

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN 0078 NÚMERO DE 2016

(29 ENE 2016)

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por el señor Cándido Rodríguez Losada contra la Resolución 1585 de 2015, por medio de la cual la Superintendencia Financiera de Colombia tomó posesión inmediata para liquidar los bienes, haberes y negocios de **INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.**

EL SUPERINTENDENTE FINANCIERO (E)

En ejercicio de sus atribuciones legales, en concordancia con lo establecido en el numeral 4° del artículo 291 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. - Que mediante la Resolución 1585 del 18 de noviembre de 2015, notificada personalmente en la misma fecha, la Superintendencia Financiera de Colombia (en adelante SFC) tomó posesión inmediata para liquidar los bienes, haberes y negocios de Internacional Compañía de Financiamiento S.A. (en adelante Internacional C.F. S.A.), por estar incurso en las causales previstas en los literales h) y f) del artículo 114 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (en adelante EOSF).

SEGUNDO. - Que la Resolución 1585 del 18 de noviembre de 2015 fue notificada personalmente al Representante Legal de Internacional C.F. S.A. el 18 de noviembre de 2015 y mediante aviso en los términos previstos en el artículo octavo de la precitada Resolución, la cual se surtió el 19 de noviembre de 2015.

TERCERO. - Que estando dentro del término legal previsto en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, mediante escrito radicado en esta Superintendencia el día 3 de diciembre de 2015 bajo el número 2015117664-316-000, el doctor Cándido Rodríguez Losada, en su condición de ex - administrador y accionista de Internacional C.F. S.A. y adicionalmente, invocando su calidad de tercero afectado, se adhirió al recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1585 de 2015 por parte del doctor Sergio Cortés Rodríguez el 2 de diciembre de 2015, en el cual se solicitó la práctica de algunas pruebas.

CUARTO. - Que el recurso de reposición contra la Resolución 1585 de 2015, expedida por la SFC, fue presentado con el cumplimiento de los requisitos establecidos para el efecto por el artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA).

QUINTO. - Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4° del artículo 291 del EOSF, la interposición del recurso contra la decisión de toma de posesión de una entidad vigilada, no suspende el cumplimiento inmediato de la medida.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO

0078

DE 2016

Hoja No. 2

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1585 del 18 de noviembre de 2015 mediante la cual se adoptó la medida de toma de posesión inmediata para liquidar los bienes, haberes y negocios de **INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.**

SEXTO.- Que mediante Auto 002 del 15 de diciembre de 2015, notificado el 17 del mismo mes y año, este Despacho resolvió (i) aceptar la intervención como tercero del doctor Cándido Rodríguez Losada dentro de la presente actuación al tenor de lo previsto en el artículo 38 del CPACA, conforme a lo allí expuesto, (ii) negar la incorporación de las pruebas documentales allegadas por el recurrente que se encuentran referidas en el numeral 4.1. del escrito de recurso de reposición y (iii) no decretar la práctica de las pruebas testimoniales y la inspección judicial solicitada por el impugnante en los numerales 4.2. y 4.3. del citado recurso.

SÉPTIMO. - Que este Despacho procede a resolver el recurso de reposición, para lo cual se presenta un resumen de los argumentos expuestos por el recurrente, sin perjuicio del estudio in extenso del escrito de impugnación.

De manera preliminar, manifiesta el recurrente que no está de acuerdo con la posición adoptada por la Superintendencia, en tanto que la misma *"se fundamenta en situaciones que en muchos de los casos, no tienen la gravedad que la Superintendencia les otorga, de ser ciertas, al paso que se decide adoptar la decisión más lesiva, existiendo a su disposición un catálogo de medidas que habrían permitido solventar las dificultades por las que atravesaba la compañía (...)"*.

Seguidamente, en el acápite que denominó **"De las supuestas prácticas de normalización artificial de cartera"**, señaló en relación con la práctica denominada caja cheque que (i) de conformidad con el artículo 882 del Código de Comercio, la entrega de un cheque por parte del deudor constituye pago de sus obligaciones y que para el caso en particular, no se dispuso entre las partes una finalidad distinta a la atención de la deuda, (ii) no existe disposición legal o reglamentaria o instrucción por parte de la Superintendencia, que establezca cuál es el término que tiene una entidad para presentar los cheques entregados para satisfacer una obligación, distinta de los plazos de caducidad de las acciones cambiarias, (iii) pese a que la Superintendencia encontró un solo cheque con 699 días de haber sido girado, presentó dicha situación de una manera más gravosa y generalizada, sin tener en cuenta la materialidad de la situación y sin establecer el promedio *"en que se mantuvieron los cheques sin ser presentados al pago por parte de la Compañía (...)"*.

Adicionalmente, en este mismo acápite y en torno a la sobreestimación de cuentas por cobrar, indicó que *"no se trata de un tema de manipulación de información, sino más que todo de un tema administrativo de gestión de cobro por parte de la compañía en la que a clientes con buenos hábitos de pago se le extendía cuentas de cobro con el fin de que no entraran en una situación de mora (...)"*. Igualmente señaló que para el 30 de octubre, la cartera se había gestionado sin hacer uso de dicho mecanismo, y sin embargo la Superintendencia no fijó su atención en ello.

Concluye este argumento manifestando que *"[e]n este orden de ideas, los hechos que dan cuenta de unas fallas en la gestión de la Compañía en el cobro frente a sus clientes, sin que las mismas lleguen a tener la envergadura de 'manipulación de la información' que la Superintendencia les asigna"*.

Señalado lo anterior, continúa el recurso con consideraciones sobre **"las operaciones con vinculados y los supuestos excesos en los cupos individuales de crédito"**, abordando dicho aspecto a partir de tres puntos. El primero, referente a las relaciones existentes entre los señores José Alejandro Ramírez y Sergio Cortés y las sociedades Catering y Campamento de Colombia S.A.S.; Distribuidora Riavia S.A.S. y Equipos de Cantera Albán S.A.S., el segundo sobre la operación de las sociedades deudoras y el tercero, de los cupos individuales de crédito.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO

0078

DE 2016

Hoja No. 3

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1585 del 18 de noviembre de 2015 mediante la cual se adoptó la medida de toma de posesión inmediata para liquidar los bienes, haberes y negocios de INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.

En el primer punto se afirma que el señor Cortés no tuvo relación con los socios ni con las compañías antes citadas desde agosto de 2013 y que desde tal fecha, procuró su desvinculación de dichas sociedades pero que *"lastimosamente por asuntos ajenos a [su] voluntad dicha circunstancia no se materializó hasta marzo de 2015 (...)".* Al respecto, indica que en sus declaraciones no faltó a la verdad, pues lo que en ellas se indica tiene que ver con que no percibía recursos de éstas y con que, no se les favoreció o se les dio algún trato especial de su parte, puesto que las condiciones de los créditos otorgados eran las mismas condiciones de otros créditos.

Igualmente, manifiesta que lo mismo puede predicarse del señor Alejandro Rodríguez, quien es solo propietario de una acción, lo cual *"como luce de bulto es totalmente irrelevante en las decisiones que llevaron a celebrar con ellas operaciones activas de crédito (...)".* En tal sentido, encuentra que la decisión de liquidación de esta Superintendencia, se basa en la titularidad de una sola acción y en no haberse *"formalizado"* a tiempo, la desvinculación del señor Cortés.

Seguidamente, indica que de conformidad con lo señalado por el artículo 122 del EOSF no se entienden las razones por las cuales para esta Superintendencia, las operaciones adelantadas se entienden realizadas con vinculados, para lo cual transcribe el contenido del artículo y señala que *"las Sociedades Deudoras no encajan dentro de las personas que se entienden legalmente como vinculados, y, por lo mismo los créditos que se hubieren conferido a estas no se entienden como si hubieren sido conferidos a un vinculado. De esto obviamente se sigue que no requerían autorización de la junta directiva a la que alude la norma en cuestión".*

Cerrado este punto y en relación con la operación de las sociedades deudoras -punto dos-, afirma que las pruebas de una falta de actividad alegadas por esta Superintendencia en la Resolución, no tiene la vocación de probar lo expuesto; puesto que solo constituyen un indicio. Igualmente, manifiesta que tales sociedades son empresas activas que desarrollan su objeto social y las cuales, recibieron un crédito previo agotamiento del procedimiento establecido que incluía la visita a la sede social.

Finalmente, como tercer punto, el recurrente procede a hacer un análisis de lo señalado por los artículos 2.1.2.1.10 y 2.1.2.1.11 del Decreto 2555 de 2010 para efectos del cálculo de los cupos individuales de crédito, exponiendo cómo en su consideración, no concurren ninguno de los supuestos señalados en tales artículos y concluye haciendo alusión al principio de legalidad señalado en el artículo 6° de la Constitución y al carácter taxativo de los criterios de acumulación, indicando que en todo caso las normas prohibitivas son de carácter restrictivo. En tal sentido indica que no obstante lo anterior, la Superintendencia *"decreta y declara sin prueba alguna, que ciertos créditos son acumulables sin serlo"* y con ello *"al acumular en el acto administrativo créditos que no son acumulables conforme a la ley, la Superintendencia se equivoca y su acto adolece de falta motivación, por lo que su revocatoria se impone."*

Agotado este argumento, prosigue el Dr. Cándido con el que denominó **"de la concentración de cartera y la metodología de la Calificación"** afirmando que no es cierto que la compañía no haya subsanado la excesiva concentración de cartera que venía presentando, puesto que desde finales de 2014 se venían adoptando medidas para conjurar esta situación, así como se habían acogido las recomendaciones de esta Superintendencia sobre el particular. Adicionalmente, la compañía automatizó los reportes con destino a la alta gerencia respecto a los modelos de referencia de la cartera comercial y consumo para la estimación de provisiones, encontrándose en curso la automatización del modelo de calificación de cartera comercial.

Igualmente señaló que *"si bien es cierto que el HHI giraba en torno al 87% a principios del 2015, al momento de la intervención (...) se encontraba en el 69% y de no ser por la dicha intervención"*

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO

0078

DE 2016

Hoja No. 4

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1585 del 18 de noviembre de 2015 mediante la cual se adoptó la medida de toma de posesión inmediata para liquidar los bienes, haberes y negocios de **INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.**

al final del año se encontraría en el 60%ivalor que se encuentra únicamente 5 puntos porcentuales por encima del objetivo que fue previsto (...)”.

Concluye manifestando que la desconcentración de la cartera requería de un periodo determinado para su modificación y que este Ente de Control debe tener en cuenta que *“la implementación de medidas de mayor velocidad habría ocasionado mayores perjuicios a la compañía, sin que eso quiera decir que las medidas no se estaban llevando a cabo de conformidad con lo dispuesto por esa Superintendencia.”*

En relación con el argumento denominado **“de la exposición con el originador de cartera Procol S.A.S”**, sostiene *“que la Superintendencia, en un error de inmensas proporciones, porque descartó de plano que solo quisiera exponer una grosera violación a los cupos individuales de crédito, establece que se presentó un exceso del 91.29% del Patrimonio Técnico de la Compañía en la operación celebrada”*. Igualmente señala que no es posible para esta Superintendencia, aplicar las normas de cupos individuales de crédito dado que la operación realizada con esta sociedad no es una operación activa de crédito sino la de compra de cartera, situación que no se puede desvirtuar a partir de la posición de deudor solidario que asume Procol con dicha operación, la cual es meramente de garantía.

De otro lado y haciendo referencia a la **“Compra de cartera originadores”** indicó que *“la compañía no tuvo en ningún momento la oportunidad de explicar y exponer a la Superintendencia las diferencias de forma independiente lo cual puede llevar incluso a un desconocimiento del derecho al debido proceso (...)”*, manifestando seguidamente que los hallazgos expuestos por esta SFC en relación con las libranzas se sustentan en las diferencias encontradas con los originadores, lo que a su juicio no puede derivar e *“endilgar a sus vigiladas el incumplimiento de obligaciones”*. En tal sentido, indica que la compañía ha venido recaudando normalmente los flujos de la cartera de pagarés libranzas, los cuales han sido objeto de *“múltiples inspecciones”* por parte de la Superintendencia, concluyendo que *“el valor de los activos representados en cartera de libranzas que se encuentra presentado por la compañía es correcto”*.

Continúa el recurrente, con argumentos en relación con **“Gastos no registrados – Provisión del impuesto de renta”** y **“Gastos no registrados – cuentas por cobrar”**, indicando frente al primero que la compañía no adeuda valor alguno a la DIAN y que ésta ha honrado sus obligaciones tributarias, y frente al segundo que, para el momento de los hechos, la compañía *“únicamente debía provisionar las cuentas por cobrar de más de 180 días (...) en este punto, la Superintendencia pretende hacer extensiva la aplicación de las NIIF a hechos frente a los cuales aún no se encontraban vigentes, al exigir que se provisionen las cuentas por cobrar según su probabilidad de recuperación y no según el periodo por el cual se encontraren vencidas.”*

Señalado lo anterior, indica el Dr. Cándido en el aparte del escrito del recurso titulado **“De los hechos que sustentan la medida de toma de posesión para liquidar respecto del Gobierno Corporativo de la Compañía”** que en lo que corresponde a la Junta Directiva y al Comité de Auditoría, la Superintendencia Financiera pretende *“imputar obligaciones y deberes que no les asisten a la compañía”*, lo que a su juicio no puede ser tenido en cuenta al momento de adoptar una decisión.

Continúa con el numeral denominado **“De la Junta Directiva y su funcionamiento”**, en el cual trae a colación algunos apartes de la resolución impugnada en los que se señala que a los miembros de dicho órgano no se les remitía la documentación requerida para que pudieran tomar decisiones sobre los temas propuestos a su consideración. Sin embargo para el recurrente, del material probatorio se debe concluir todo lo contrario, es decir que *“la información requerida si fue puesta en conocimiento de los miembros de Junta para la toma de las decisiones”*, para indicar seguidamente que *“no es posible concluir que de haber*

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO

0078

DE 2016

Hoja No. 5

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1585 del 18 de noviembre de 2015 mediante la cual se adoptó la medida de toma de posesión inmediata para liquidar los bienes, haberes y negocios de **INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.**

tratado puntos del orden del día se desprenda que los informes no hubieran sido conocidos por los directores”.

Agrega que la Superintendencia pretende soportar las anteriores manifestaciones en el hecho de que la documentación *“no fue enviada por correo electrónico a los directores”*, cuando lo cierto es que dicho medio no es el único mecanismo idóneo para poner en conocimiento de los miembros de la Junta Directiva la información necesaria para la toma de decisiones, lo que a juicio del recurrente se constituye en una *“conclusión con información parcial”* y obedece a suposiciones de este organismo de inspección y vigilancia.

Igualmente señala, en relación con el informe de presidencia que debía ser enviado a la Junta Directiva que *“es muy distinto indicar que no se sabe si alguien va a dar un informe, a no conocer el mismo. La Superintendencia busca acomodar de manera forzada las declaraciones y medios probatorios que encuentra a sus pretensiones, en un aparente afán de liquidar una sociedad que ha de ser preservada.”*

Afirma que los miembros de dicho órgano pudieron haberse enterado por otros medios, incluso a través de otros correos diferentes a los analizados por la Superintendencia Financiera, señalando que únicamente revisó los correos de las carpetas de salida de los correos electrónicos, pero no las carpetas de entrada, ni correspondencia *“o cualquier otro medio a través del cual los miembros de junta hubieren solicitado dicha información”*.

Concluye en este acápite señalando que los miembros de Junta Directiva únicamente deben solicitar la información relevante en el evento de que sea necesario y no en todos los casos como lo pretende hacer ver la Superintendencia Financiera.

Continúa su debate con el acápite denominado ***“De la supuesta falta de direccionamiento y seguimiento real por parte de la Junta Directiva”*** en el cual señala que la Superintendencia Financiera llegó a conclusiones erradas al afirmar que a) las labores de direccionamiento y supervisión que estaba llamada a desempeñar la Junta Directiva no fueron objeto de deliberación de dicho órgano, y b) que la Junta Directiva no impartió instrucciones ni efectuó seguimiento alguno respecto de las debilidades que fueron puestas en su conocimiento.

Al respecto, sostiene que la Superintendencia realizó juicios de valor sobre el contenido de las actas, situación frente a la cual no tiene competencia, y que dicha situación se traduce en el desbordamiento de sus facultades al concluir del análisis efectuado sobre las mismas un desconocimiento del numeral 6.1.1.1 de la parte I de la Circular Básica Jurídica. Para el efecto indica que si esta autoridad quiere impugnar el contenido de un acta debe hacerlo primero ante autoridad competente. En ese sentido señala que *“las alegaciones que realiza sobre las actas, que se presumen legales, no tienen el valor suficiente para poder llegar a conclusiones respecto de la supuesta falta de direccionamiento y seguimiento real de la Junta Directiva”*.

Agrega que las mismas actas que cuestiona la Superintendencia establecen que las decisiones fueron tomadas con base en la información que fue analizada y discutida y que las mismas se convierten en un elemento probatorio que la Superintendencia no puede desconocer, reiterando la presunción de legalidad de la que gozan y que no ha sido a su juicio desvirtuada.

Por último, en dicho acápite señala que *brilla por su ausencia la imposibilidad que tuvimos los directivos de brindarle a la Superintendencia sus razones y argumentos, lo cual seguramente la hubiera llevado a no decir en el acto administrativo cosas inexactas, o hacer deducciones que con el debido respeto son equivocadas”*.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO: 0078

DE 2016

Hoja No. 6

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1585 del 18 de noviembre de 2015 mediante la cual se adoptó la medida de toma de posesión inmediata para liquidar los bienes, haberes y negocios de INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.

En relación al numeral denominado **"Del Comité de Auditoría"** el recurrente manifiesta que la Superintendencia Financiera pretende hacer ver que la Compañía incurrió en una falta al no indicar la manera cómo se llevaron a cabo las reuniones no presenciales de dicho Comité. Al respecto señala que dichas consideraciones no tienen la vocación de prosperar, toda vez que conforme a la interpretación que realiza del artículo 19 de la Ley 222 de 1995 las reuniones no presenciales deben ser susceptibles de ser probadas, lo que *"no significa que exista una determinada tarifa legal para probarlo"*.

De lo expuesto señala que *"lo relevante es que se pueda probar la realización de la reunión no presencial, pero de manera alguna se exige que dicha prueba tenga una determinada condición o calidad"*, concluyendo el Dr Cándido que Internacional Compañía de Financiamiento S.A no se encontraba en la obligación de dejar constancia del mecanismo utilizado para llevar a cabo la reunión no presencial.

Frente al numeral **"Alta Gerencia – Presidente y Vicepresidente Ejecutivo"** indica el recurrente que esta Superintendencia al momento de afirmar que el Presidente de la Compañía no ejerció las funciones legales y estatutarias derivadas de su condición de Representante Legal Principal se limitó a establecer *"que aquella se deriva de la evidencia recopilada durante la visita"*, sin indicar el tipo de evidencia al que se hace referencia.

Aduce que únicamente se tuvieron en cuenta sus declaraciones donde indico *"(sic) que no se me (sic) encuentro en capacidad para responder sobre el rol de la Vicepresidencia, lo cual no implica un desconocimiento de sus funciones, ya que quien se encuentra habilitado para dar respuesta a dichos interrogantes es el mismo Vicepresidente; y que entre la Presidencia y la Vicepresidencia se han repartido y asignado los roles a cumplir dentro de la Compañía"*.

Agrega que esta Superintendencia afirma que el Presidente no dio cumplimiento a sus funciones al *"ceder su gestión"*, situación que a juicio del recurrente es plenamente válida al no existir norma alguna que impida esta Delegación.

Añade que la función del Vicepresidente de la Compañía se tradujo en la coordinación del equipo de Gerentes *"cada uno con sus responsabilidades y funciones"*, mientras que la Presidencia era la encargada de la supervisión *"de Comercial, Crédito y Tesorería"*, razón por la cual *"no es cierto como lo afirma la Superintendencia que el direccionamiento de la compañía estaba a cargo del Vicepresidente Ejecutivo y no de su Presidente"*.

Cerrado lo anterior en cuanto al gobierno corporativo, continuó con el aparte que denominó **"De la toma de posesión para liquidar"** en el cual expuso cinco puntos, a saber: El primero que denominó **"de la falta de proporcionalidad y razonabilidad de la decisión de liquidar"**, en el cual se establece que la Superintendencia no atendió a los citados criterios en la toma de posesión que se recurre, sacrificando *"valores y principios constitucionales sin el peso suficiente"*, fundamentándose en causales improcedentes, y sin tener en cuenta la aplicación de los demás institutos de salvamento.

El segundo orientado a señalar que **"la Resolución impugnada sacrificó el principio de protección de la empresa a costa del principio de confianza en el sistema financiero"**, en el cual retoma el principio de conservación de la empresa trayendo a colación jurisprudencia de la Corte Constitucional, para señalar la importancia de garantizar otros intereses como lo es la protección del empleo. En igual sentido hace hincapié en *"la importancia del salvamento de las entidades financieras"* indicando que para el efecto, la propia regulación financiera *"se encarga de suministrar un cartabón de alternativas, donde la última es la toma de posesión para liquidar"*, todo ello para sostener que la liquidación de una entidad es la opción última a adoptar y que por ello, la decisión de esta Superintendencia no es proporcionada.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO

0078

DE 2016

Hoja No. 7

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1585 del 18 de noviembre de 2015 mediante la cual se adoptó la medida de toma de posesión inmediata para liquidar los bienes, haberes y negocios de INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.

El tercer punto debate ***“la pérdida de confianza en el regulador como causal de intervención para liquidar”*** sosteniendo que en varios apartes del acto administrativo se habla de la pérdida de confianza por parte del supervisor, como justificación de la decisión adoptada, lo cual en su criterio es totalmente subjetivo, sin que sea susceptible de ser controvertido puesto que *“es algo que está dentro de la percepción exclusiva de la Superintendencia, nada ni nadie podrá probar en contrario y a la entidad le bastará con afirmar que dicha confianza se ha perdido”*. Igualmente señala que contrario a lo afirmado por la SFC, dicha confianza *“no tiene por qué ser mantenida a lo largo del tiempo, toda vez que la ley lo exige al momento de constitución de la entidad”*.

Como cuarto punto, se ocupó de señalar ***“la procedencia de otras medidas de salvamento menos gravosas”***, retomando algunos de los argumentos expuestos en torno al principio de conservación de la empresa y del carácter último de la liquidación, indicando que *“si bien una medida puede no ser suficiente para normalizar la situación, si se aplican varias de ellas de manera armónica y complementaria, es posible preservar a la compañía sin necesidad de acudir a su liquidación”* para seguidamente indicar que medidas como la vigilancia especial acompañada de una orden de recapitalización y de una administración fiduciaria, habrían podido, en conjunto, sanear las falencias evidenciadas por esta Superintendencia. Concluye sosteniendo que esta entidad *“pueda libremente escoger la medida, con prescindencia del cartabón que existe para tal efecto. Y, al hacerlo debe respetar los límites del acto discrecional (...)”*.

Concluye con el quinto punto afirmando que ***“la causal contenida en los literales f) y h) del artículo 114 del EOSF para que proceda la Toma de Posesión no se aplica en este caso”***, para lo cual, luego de hacer la transcripción de la norma en cita, señala que *“la causal en comento se configura cuando la entidad financiera persiste en manejar negocios de manera no autorizada o insegura. Así las cosas, para su efectiva configuración es necesario que la compañía hubiera realizado en diversas ocasiones prácticas no autorizadas o inseguras que hubieren sido advertidas por la Superintendencia (...) para que pueda persistir en una conducta es necesario que previamente se haya llevado a cabo la misma conducta”* sobre lo que, en su criterio, no es posible que se configure la causal consagrada en el literal f) del artículo 114 del EOSF.

En este mismo aparte, agrega que *“es esta la primera Resolución por medio de la cual esa Superintendencia ha afirmado que la Compañía ha realizado este tipo de prácticas, razón por la cual es imposible que hubiere persistido en llevar a cabo prácticas inseguras o no autorizadas”*.

Ahora bien, en lo que respecta a la causal contenida en el literal h) de la misma normatividad, señala que *“como se pudo acreditar a lo largo de este recurso, gran parte de los asuntos que la Superintendencia considera como una inconsistencia de la información contable reportada por la compañía no lo son, y por lo mismo, no se puede asegurar (...) que la información transmitida no es confiable”*. Seguidamente, retoma los argumentos esgrimidos en torno a la toma de decisiones por parte de los miembros de la Junta Directiva, afirmando que no es cierto que dicho órgano colegiado *“hubiere llevado a cabo actos que implicaban que un tercero, a través del diligenciamiento de una proforma, determinara su sentido del voto”*.

Así, a partir de los argumentos expuestos, solicita se revoque la decisión adoptada.

OCTAVO. - Que esta Superintendencia procederá a analizar y a efectuar las consideraciones pertinentes frente a cada uno de los puntos y aspectos expresados por el recurrente y que fundamentan la impugnación presentada en contra de la Resolución 1585 del 18 de noviembre de 2015, así:

En primer lugar y teniendo en cuenta que el Dr. Rodríguez realiza algunas manifestaciones en torno al debido proceso y a la proporcionalidad y razonabilidad de la medida, las cuales son transversales a la decisión adoptada, esta Superintendencia se

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO

0078

DE 2016

Hoja No. 8

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1585 del 18 de noviembre de 2015 mediante la cual se adoptó la medida de toma de posesión inmediata para liquidar los bienes, haberes y negocios de INTERNACIONAL COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A.

ocupará de analizar estos dos puntos.

Seguidamente, y pese al orden en que fue planteado el recurso, se procederá a abordar el punto denominado "*de la toma de posesión para liquidar*", dado que los argumentos esbozados en dicho acápite se encuentran estrechamente relacionados con la proporcionalidad y razonabilidad de la medida adoptada, e igualmente, permiten exponer cómo el análisis que efectuó esta Superintendencia obedeció a una valoración integral de las circunstancias que ahora el recurrente expone aisladamente.

Finalmente, bajo la anterior perspectiva, se analizarán uno a uno los demás argumentos de defensa esgrimidos.

8.1 En relación con el derecho al debido proceso.

Señala el recurrente en algunos apartes del escrito presentado, que esta Superintendencia no le dio la oportunidad a la sociedad de pronunciarse previamente sobre los hallazgos que dieron lugar a la toma de posesión inmediata para liquidar los bienes, haberes y contratos de INTERNACIONAL C.F. S.A. hoy en liquidación, y que con ello, posiblemente, se pudo haber desconocido su derecho al debido proceso.

En efecto, en el recurso se consagran manifestaciones tales como que "*la compañía no tuvo en ningún momento la oportunidad de explicar y exponer a la Superintendencia, las diferencias de forma independiente, lo cual puede llevar incluso a un desconocimiento del derecho al debido proceso dentro de las actuaciones administrativas. El derecho al debido proceso exige que las autoridades judiciales y administrativas se sujeten plenamente a los procedimientos y a las garantías sustanciales establecidas en la constitución y la Ley (...) deben permitir al investigado que se pronuncie y pueda exponer su versión de los hechos, con el fin de evitar una arbitrariedad en la toma de decisiones por parte de la autoridad*" o que "*brilla por su ausencia la imposibilidad que tuvimos los directivos de brindarle a la Superintendencia sus razones y argumentos, lo cual seguramente la hubiera llevado a no decir en el acto administrativo cosas inexactas, o hacer deducciones que con el debido respeto son equivocadas*".

Al respecto, sea lo primero señalar que el derecho al debido proceso administrativo, se entiende como el conjunto de garantías sustantivas y procesales que tienen por finalidad, entre otras, impedir que la administración actúe de manera arbitraria o caprichosa, y hacer que se someta siempre a los procedimientos señalados en la Ley, obrando de manera transparente y coherente.

En tal sentido, en sentencia T-656 de 2010, la Corte Constitucional manifestó que "*para dar un desarrollo más amplio al concepto del debido proceso administrativo, es necesario tener presente que el Estado es el que debe ajustarse a las reglas previstas en el ordenamiento jurídico a fin de garantizar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos ante la administración, evitando de este modo que los administrados queden a la deriva de una decisión arbitraria u omisión de una actuación a causa de dilaciones injustificadas*".

Adicionalmente, dicha Corporación señaló en la sentencia C-540 de 1997 que "*su aplicación en los procesos administrativos ha sido reiterada por esta Corporación en diversos fallos, precisándose que quien participe en ellos debe tener la oportunidad de ejercer su defensa, presentar y solicitar pruebas, con la plena observancia de las formas propias que los rija*".

Bajo tal marco normativo, se encuentra que contrario a lo manifestado por el recurrente, en el proceso que dio lugar a la medida que se debate, se observaron las formas propias que le gobiernan y se cumplieron con las cargas que le son exigibles a esta Superintendencia, entre ellas, la referida a informarle sobre la procedencia del recurso de reposición, instancia durante la cual podía presentar y solicitar las pruebas que

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO

0078

DE 2016

Hoja No. 9

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1585 del 18 de noviembre de 2015 mediante la cual se adoptó la medida de toma de posesión inmediata para liquidar los bienes, haberes y negocios de INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.

considerara pertinentes, así como consultar la información a la que se hizo referencia de manera expresa en el acto impugnado.

En efecto, la actuación administrativa estuvo guiada por las normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y del Decreto 2555 de 2010, que regulan la toma de posesión de una entidad, esto es, los artículos 114, 115 y 291 del EOSF y artículo 9.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010¹. Así mismo, el recaudo probatorio estuvo gobernado por las exigencias normativas que garantizan la legalidad e integridad de las pruebas.

Al respecto, debe señalarse que de conformidad con dicha normatividad, el procedimiento para la toma de posesión, una vez configurada la causal o causales señaladas en el artículo 114 del EOSF, bien sea a partir de los hallazgos de visita de inspección, de lo evidenciado dentro de un proceso de monitoreo o de cualquier otro insumo que obtenga esta Superintendencia en ejercicio de sus labores de supervisión, no implica el traslado de la evidencia, bien sea esta un informe de inspección, como en el caso que nos ocupa, o cualquier otra documentación en donde se dé cuenta de la concurrencia de los supuestos para adoptar la medida.

Lo anterior, comoquiera que ante la existencia de una situación o situaciones de tal envergadura, esta Superintendencia debe sin demora, evaluar y adoptar las medidas que considere pertinentes, adecuadas, proporcionales y oportunas, sin consideración del traslado o no de documentación antes referida, el informe de inspección en este caso, atendido el mandato legal de protección al público ahorrador, entre otras cautelas a adoptar.

Sobre este particular, el Consejo de Estado en sentencia del 27 de octubre de 2005² indicó que *"[a]demás, vale recordar que la medida de toma de posesión exige que ésta se adopte de manera inmediata, en razón de la protección y salvaguarda del interés general, sin necesidad de que se surta trámite intermedio alguno"*, postura que reafirma el actuar de esta Superintendencia, ya que se itera, la pronta adopción de las medidas tendientes a conjurar situaciones irregulares permite garantizar el cumplimiento de los fines constitucionales encomendados, cuales son la confianza y el ahorro del público.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que con posterioridad a la toma de posesión para liquidar, el expediente de la actuación, esto es el informe de inspección que contiene los resultados de la visita practicada así como los documentos y pruebas recaudados durante la misma, se ha encontrado a disposición de la sociedad en todo momento para su consulta. Tan es así, que el 17 de diciembre de 2015, luego de vencido el plazo para presentar el recurso de reposición, se hizo presente el doctor Alfonso García Rubio, en su calidad de apoderado del doctor Sergio Cortés Rodríguez, con el fin de consultarlo, según se acredita con el acta de consulta de expedientes que se suscribió en dicha ocasión.

Igualmente y retomando el procedimiento establecido para la toma de posesión al cual se viene haciendo alusión, debe tenerse en cuenta que de acuerdo a éste, el derecho de defensa y contradicción se ejerce a través del recurso de reposición que puede, como efectivamente se hizo, interponer el afectado contra la Resolución correspondiente.

En efecto, es el recurso de reposición contra la Resolución 1585 de 2015, el instituto procesal dispuesto por la legislación para controvertir las decisiones administrativas

¹ La cita de estas normas se hace sin perjuicio de las normas que las complementen o aclaren.

² Radicación No. 25000-23-24-000-1991-02105-01(14070) Consejero Ponente: Juan Ángel Palacino Hincapié.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 0078

DE 2016

Hoja No. 10

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1585 del 18 de noviembre de 2015 mediante la cual se adoptó la medida de toma de posesión inmediata para liquidar los bienes, haberes y negocios de INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.

adoptadas por este Ente de Supervisión, con lo cual se garantiza como lo señala el recurrente que la administración escuche las explicaciones de Internacional C.F. S.A hoy en liquidación, valore las pruebas aportadas y que frente a ellas se proceda o no a modificar la decisión adoptada.

Así, en cuanto a la afirmación según la cual *"Brilla por su ausencia la imposibilidad (sic) que tuvimos los directivos de brindarle a la Superintendencia sus razones y argumentos, (...)"*, es de señalar que los principales directivos de la entidad, incluído el señor Cándido Rodríguez, tuvieron la oportunidad de brindar a esta Superintendencia sus razones y argumentos, no solo con la oportunidad procesal del recurso de reposición, sino también con anterioridad a la decisión, puesto que durante la visita de inspección, éstos tuvieron la posibilidad de allegar la información que consideraran pertinente, así como de aclarar complementar las declaraciones rendidas ante esta autoridad.

Finalmente, en cuanto a la manifestación efectuada, en el sentido de indicar que *"como consecuencia de las medidas que fueron adoptadas por medio de la Resolución Impugnada, que implican la imposibilidad de tener acceso a las bases de datos de la compañía, el presente recurso fue elaborado con cargo a la información que tengo presente al momento de su presentación"*, esta Entidad advierte que no obra prueba en el expediente que reposa en esta Entidad, de una solicitud en este sentido de obtener dicha información. Sobre este mismo particular, es de indicar que no obstante, con posterioridad a la toma de posesión, el informe de inspección estuvo a disposición del impugnante, este solo lo consulto hasta después de vencido el término para interponer el recurso.

Por todo lo anterior, se encuentra que con el trámite surtido, esta Superintendencia no vulneró el derecho al debido proceso de la entonces sociedad vigilada, sino que por el contrario, esta Superintendencia garante del derecho del debido proceso (i) observó en todo momento, las disposiciones del Estatuto Orgánico al Sistema Financiero y del Decreto 2555 de 2010 que regulan el trámite de toma de posesión (ii) concedió la oportunidad para la presentación del recurso de reposición, (iii) tuvo a disposición el expediente de la actuación y no impidió su consulta y (iv) procede con este pronunciamiento a analizar y resolver en detalle los argumentos de defensa expuestos en el escrito de impugnación del 2 de diciembre de 2015.

8.2 En cuanto a la razonabilidad y proporcionalidad de la medida adoptada.

Indica el recurrente que la decisión recurrida *"se fundamenta en situaciones que en muchos de los casos no tienen la gravedad que la Superintendencia les otorga, de ser ciertas, al paso que se decide adoptar la decisión más lesiva, existiendo a su disposición un catálogo de medidas que habrían permitido solventar las dificultades por las que atravesaba la compañía. Esto, pese al aparente esfuerzo del acto administrativo en tratar de explicar por qué medidas adecuadas, proporcionales y suficientes, distintas de la liquidación que constituye fundamentalmente una destrucción de valor, no fueron adoptadas"*.

Al respecto, es oportuno recordar que los principios de razonabilidad y proporcionalidad, son principios de rango constitucional a los que se encuentra sujeta toda la actividad estatal, como lo es la de supervisión, la cual puede conllevar la adopción de medidas cautelares, de institutos de salvamento, la imposición de sanciones y, en este caso, la adopción de la toma de posesión para liquidar los bienes, haberes y negocios de Internacional C.F.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO

DE 2016

Hoja No. 11

0078

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1585 del 18 de noviembre de 2015 mediante la cual se adoptó la medida de toma de posesión inmediata para liquidar los bienes, haberes y negocios de INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.

Sobre dicho principio la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que³ *"La teoría jurídica alemana, partiendo de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal, ha mostrado cómo el concepto de razonabilidad puede ser aplicado satisfactoriamente sólo si se concreta en otro más específico, el de proporcionalidad. El concepto de proporcionalidad sirve como punto de apoyo de la ponderación entre principios constitucionales (...)*

El concepto de proporcionalidad comprende tres conceptos parciales: la adecuación de los medios escogidos para la consecución del fin perseguido, la necesidad de la utilización de esos medios para el logro del fin (esto es, que no exista otro medio que pueda conducir al fin y que sacrifique en menor medida los principios constitucionales afectados por el uso de esos medios), y la proporcionalidad en sentido estricto entre medios y fin, es decir, que el principio satisfecho por el logro de este fin no sacrifique principios constitucionalmente más importantes."

Bajo este panorama, se observa que la decisión adoptada por esta Superintendencia obedeció a los criterios antes indicados, los cuales fueron aplicados frente a la valoración integral y conjunta de los hallazgos evidenciados (graves inconsistencias de revelación de información de carácter contable, y de cartera, deficiencias no superadas en materia de riesgo de crédito, exceso en los límites individuales de crédito, inoperancia en su gobierno corporativo, entre otras), que contrario a lo manifestado por el accionante, sí revisten de la gravedad suficiente para dar paso a la toma de posesión inmediata para liquidar.

En efecto, tal y como se expone en detalle en los numerales siguientes, la medida adoptada, esto es la toma de posesión para liquidar, (i) garantiza la estabilidad en el sistema financiero y la preservación de la confianza pública en el sector, (ii) es la única que, dadas las circunstancias, garantiza dichos fines y, (iii) no sacrifica principios constitucionalmente más importantes.

Ahora bien, esta Superintendencia considera que bajo tal escenario no es procedente una valoración aislada de los hechos, tal y como la presenta el recurrente, como quiera que corresponde a esta entidad valorar el manejo conjunto de los riesgos de los negocios de cualquier entidad vigilada, tal y como lo era Internacional CF, a efectos de propender porque las entidades sometidas a vigilancia, sean integralmente viables y seguras para el mercado en general.

En efecto, la adopción de cualquier otra medida, no era procedente dado que como consecuencia del manejo que se le dio a los negocios, se evidenció que al interior de la entidad no existían órganos ni personas, inclusive al nivel de accionistas, que le garantizaran a esta Superintendencia, el leal cumplimiento de las cargas que conllevarían cualquiera de los otros institutos de salvamento, tal y como se expone en detalle más adelante.

Así, la afirmación del recurrente en el sentido de señalar que las deficiencias presentadas podían conjurarse con el catálogo de medidas dispuestas por el EOSF, no resulta de recibo, pues como se expone nuevamente, los hallazgos a los que se ha hecho alusión daban cuenta de situaciones de orden estructural que no podían subsanarse con el citado catálogo de medidas, por lo que resultaba un imperativo legal la adopción de la medida de toma de posesión para liquidar.

De esta manera, de acuerdo con lo expuesto en los dos numerales precedentes, esta Superintendencia encuentra que su actuación se ha ajustado en su totalidad a las garantías procesales que la rigen en los términos de la Constitución Política y en la ley,

³ Sentencia 022 de 1996 M.P. Carlos Gaviria Díaz.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO

0078

DE 2016

Hoja No. 12

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1585 del 18 de noviembre de 2015 mediante la cual se adoptó la medida de toma de posesión inmediata para liquidar los bienes, haberes y negocios de INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.

de tal suerte que, se procederá a exponer las siguientes consideraciones atendiendo a la metodología propuesta en precedencia.

8.3 De la toma de posesión para liquidar.

Como se indicó en el numeral séptimo de la presente resolución, en el punto denominado "*de la toma de posesión para liquidar*", el recurrente se ocupó de señalar: (i) que la Resolución 1585 de 2015, sacrificó el principio de protección de la empresa a costa del principio de confianza en el sistema financiero, (ii) que la "*pérdida de confianza en el regulador*" no constituye una causal de intervención para liquidar, (iii) que era posible adoptar otras medidas menos gravosas y (iv) que las causales contenidas en los literales f) y h) del artículo 114 del EOSF no proceden en el caso específico.

Así, como se puede observar, tales argumentos se encuentran estrechamente ligados con los criterios que determinan si la medida adoptada resulta ser proporcional o no frente a los hallazgos advertidos, razón por la que, de manera previa al análisis de las circunstancias individuales presentadas por el recurrente, se expondrán nuevamente de manera integral las consideraciones de esta Superintendencia sobre la situación de Internacional C.F., y las razones que conllevaron a adoptar como medida la toma de posesión inmediata para liquidar los bienes haberes y negocios de dicha entidad para seguidamente ocuparse de los argumentos ligados a la proporcionalidad en la adopción de la medida.

8.3.1 De las consideraciones que se tuvieron en cuenta para adoptar la medida impugnada.

Tal y como se indicó en la Resolución impugnada, en ejercicio de las funciones de supervisión que le corresponden a este Ente de Control, se encontró que la sociedad Internacional C.F. hoy en liquidación, desarrolló un conjunto de prácticas que afectaron negativamente y de manera general, el funcionamiento y la información presentada por la entidad, las cuales adicionalmente, fueron definidas por la Alta Gerencia, y permitidas por el conjunto de instancias que conformaban el Gobierno Corporativo de la entidad.

En tal sentido, se encontró que la utilización de las prácticas comerciales y administrativas tales como caja cheque, cuentas por cobrar, la forma de provisionamiento del impuesto de renta entre otras descritas ampliamente en la Resolución cuestionada, dieron lugar al manejo inseguro de los negocios de Internacional C.F. y a que se presentaran graves inconsistencias en la información que revelaba dicha entidad, lo cual le impedía a este Organismo conocer adecuadamente la situación real de la misma.

Bajo este escenario, no se entiende cómo pretende el recurrente que el análisis que efectúa este Ente de Control respecto de la situación de la entidad se haga de manera casuística, tal y como quedó evidenciado en su escrito de impugnación, desconociendo con ello que la sociedad como ente económico, es un conjunto de instituciones, organismos, procedimiento etc., encaminados a desarrollar armónicamente y bajo una misma dirección una actividad económica, en este caso la actividad financiera.

Así, contrario a lo que se pretende exponer en el escrito de impugnación, la supervisión que realiza esta Superintendencia se ocupa no de hechos aislados, sino del funcionamiento de las estructuras básicas de las entidades, tal y como lo son su gobierno corporativo, sus sistemas de administración y gestión de riesgo, su modelo de negocio,

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO

0078

DE 2016

Hoja No. 13

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1585 del 18 de noviembre de 2015 mediante la cual se adoptó la medida de toma de posesión inmediata para liquidar los bienes, haberes y negocios de **INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.**

entre otras, las cuales impactan cada una de las actividades que realiza el ente económico por pequeñas que éstas pudieren parecer.

Es por ello que si bien la Resolución 1585 de 2015, se ocupó de exponer situaciones particulares, tales como las prácticas artificiales de normalización de cartera, la forma en cómo se manejaban las provisiones, el otorgamiento de crédito a vinculados, las dinámicas de la junta directiva y el comité de auditoría, entre tantas otras, también se ocupó de evaluar conjunta e integralmente dichas circunstancias, evidenciando con ello que los problemas de la entidad, lejos de ser circunstanciales y subsanables individualmente considerados, eran de carácter estructural, al punto que para solventarlos, había que redefinir y recomponer cada una de las instancias que conformaban la sociedad, incluyendo sus accionistas.

Adicionalmente, se encontró que con la conducta de los accionistas, miembros de junta directiva, auditor interno, entre otros, se defraudó la confianza que soporta la supervisión y que se demanda de quien quiera obtener y conservar una licencia, para el desarrollo de la actividad financiera, la cual no sobra recordar, es de interés público.

Sobre este particular, procede reiterar lo señalado en la Resolución 1585 de 2015, en la que se indicó que *"la licencia de funcionamiento que otorga la Superintendencia a las entidades vigiladas se fundamenta en la valoración de unos criterios de análisis que no se limitan a la acreditación de unos requisitos meramente formales o de cumplimiento legal. En este orden de ideas, la confianza del Supervisor entra a jugar un rol preponderante en toda esta valoración, la que debe ser mantenida no solo en virtud de su aceptación inicial, sino durante toda la existencia de la entidad vigilada, encontrándose quebrantada en este momento respecto de **INTERNACIONAL CF S.A.**, razón por la cual esta Superintendencia debe actuar al tener dentro de sus objetivos la supervisión del sistema financiero colombiano con el fin de preservar su estabilidad, seguridad y confianza, así como promover, organizar y desarrollar el mercado de valores colombiano y la protección de los inversionistas, ahorradores y asegurados".*

Así, pese a que el análisis pertinente se hará en los apartes siguientes, debe indicarse que aunque la pérdida de la confianza no es una causal de toma de posesión, sí es un elemento de juicio para que esta Superintendencia, una vez configurada o configuradas las causales de toma de posesión señaladas en el artículo 114 del EOSF, determine que ésta debe hacerse para liquidar los bienes, haberes y negocios de una sociedad y no como una toma que tenga por objeto *"si es posible, colocarla en condiciones de desarrollar adecuadamente su objeto social, o si se pueden realizar otras operaciones que permitan lograr mejores condiciones para que los depositantes, ahorradores e inversionistas puedan obtener el pago total o parcial de sus acreencias"*.

Dicho lo anterior, y sin perder de vista el escenario propuesto, se continuará con la resolución del recurso presentado.

8.3.2. De los argumentos en torno a la proporcionalidad de la medida.

8.3.2.1. La Resolución impugnada sacrificó el principio de protección de la empresa a costa del principio de confianza en el sistema financiero.

En relación con los argumentos del impugnante, debe indicarse que la SFC es consciente del importante rol protagónico que representan los entes societarios dentro de un contexto social, al destacar de ellos su presencia efectiva en un Estado Social de Derecho por ser agentes de fomento de empleo, estímulo a la iniciativa privada y generadores de desarrollo económico y mercados sectoriales principalmente. Por ello, justamente a partir de dicha claridad y con plena responsabilidad en la consideración y adopción de la

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO

0078

DE 2016

Hoja No. 14

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1585 del 18 de noviembre de 2015 mediante la cual se adoptó la medida de toma de posesión inmediata para liquidar los bienes, haberes y negocios de **INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.**

determinación final resultante en una toma de posesión para liquidar a Internacional CF S.A. se ponderaron todas las consecuencias ciertamente drásticas que la misma suponía.

Es oportuno mencionar que la SFC no fue ajena a la concepción de los institutos de salvamento legalmente previstos en la regulación financiera, siendo eco de ello el análisis expuesto en el considerando noveno de la Resolución impugnada, quedando allí establecido que ninguna de las opciones evaluadas eran conducentes y efectivas para superar las críticas condiciones en que se encontraba la Compañía de Financiamiento al incidir aquellas no solo en la incursión en unas causales de toma de posesión, sino fundamentalmente en la pérdida de la confianza en que se fundan las relaciones de la SFC con sus vigiladas, atendida la gravedad de las causales advertidas.

Por ello, discrepa este Despacho de la afirmación referida a que: *"... Todo ello con la única excepción consistente en que las demás medidas sean absolutamente inservibles, lo cual no ocurrió en el presente caso."* Muy por el contrario, una lectura sensata de la exploración expuesta frente a cada alternativa de los institutos de salvamento, como fueron la vigilancia especial, la recapitalización, la fusión, la cesión total o parcial de activos, pasivos y contratos y enajenación de establecimientos de comercio a otra institución, exclusión de activos y pasivos ni el programa de recuperación, considerando las dificultades estructurales de Internacional C.F. S.A, no resultaban suficientes ni individual ni en forma combinada, como lo expone el recurrente, para solventar las causas originadoras de la grave condición en que venía operando. En este sentido, tampoco se comparte la apreciación del recurrente planteada al inicio de su escrito al mencionar: *"... pese al aparente esfuerzo del acto administrativo en tratar de explicar por qué medidas adecuadas, proporcionales y suficientes, distintas de la liquidación que constituye fundamentalmente una destrucción de valor, fueron adoptadas"*, en razón a que ciertamente dicho análisis sí fue el resultado de un esfuerzo, real y diligentemente sopesado frente a las implicaciones que la decisión adoptada representaba, siendo predominante la tutela del público ahorrador principalmente y descalificadas cada una de ellas de manera concreta y puntual en los términos del considerando noveno, atendidas las condiciones que presentaba la entidad, que no es del caso replicar en esta oportunidad.

Así mismo, la SFC consciente del impacto que una medida como la toma de posesión para liquidar tiene, imperativamente que agotar de manera previa un responsable análisis a los escenarios que de una u otra manera puedan precaverla, sin que en el caso de Internacional C.F. S.A., alguna de ellas individualmente o en conjunto con otra u otras, hubiera conducido a la sostenibilidad de la Compañía en el sector financiero.

Igualmente, procede precisar que en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 del EOSF la adopción de las medidas preventivas de la toma de posesión (o institutos de salvamento) son de carácter facultativo, lo cual no impide a esta SFC llegar a aplicar el último instrumento legal: la toma de posesión para liquidar, en caso de considerar que las causas son de tal envergadura que así impongan su adopción.

En el escenario de Internacional C.F. S.A., no resultaban eficaces ninguno de los institutos de salvamento de que trata el artículo 113 del EOSF, considerando que los hallazgos en la información de la Compañía, quebrantaron la confianza del Supervisor en la entidad vigilada, siendo ésta un presupuesto sustancial en la preservación de toda empresa, exigente aún más, respecto de entidades que manejan ahorro del público, al sobrevenir al grave contexto fáctico que acompañó la configuración de las causales de toma de posesión, no siendo concebida como equivocadamente lo hace el recurrente, como una causal autónoma.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO

0078

DE 2016

Hoja No. 15

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1585 del 18 de noviembre de 2015 mediante la cual se adoptó la medida de toma de posesión inmediata para liquidar los bienes, haberes y negocios de INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.

Ahora bien, frente al argumento relativo a que la medida de liquidación no es proporcional por cuanto sacrifica el principio de preservación de la empresa como promotora de desarrollo y fuente de empleo, debe insistirse al recurrente que la pérdida de la confianza sobreviniente a la existencia de dos causales de toma de posesión autónoma y claramente motivadas en la resolución recurrida, se compadece con el criterio de ponderación y proporcionalidad propio de las decisiones administrativas, indistintamente que con ellas se afecten intereses empresariales si se anteponen los del público ahorrador.

A propósito de la función social de la empresa, importante traer a colación los siguientes pronunciamientos jurisprudenciales en los que se deja claro que el principio del interés público o social prevalece sobre el interés individual.

-. Sentencia C-793-14 proferida por la Corte Constitucional:

"(...)

6. La función social de la propiedad y la función social de la empresa

Para la Sala, resulta necesario referirse a la función social de la propiedad y de la empresa, dado que algunas intervenciones han registrado su preocupación por el lugar en que quedan los derechos económicos del sector financiero, si se atiende el requerimiento de la demandante. En respuesta a dichas manifestaciones, el Ministerio Público ha recordado que la propiedad cumple una función social y, por ende, implica derechos, pero también obligaciones. Similar es la apreciación de la Procuraduría General respecto de la obligación social solidaria que pesa sobre las entidades de financiamiento públicas y privadas.

Por lo que concierne a la propiedad, el punto de partida que se impone para revisar el asunto, es el mandato contenido en el 58 de la Constitución, cuyo tenor literal, en lo pertinente, es el siguiente:

Art. 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultare en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social.

La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica

No sobra anotar que si bien es cierto que este mandato fue modificado por el Acto legislativo N° 1 de 1999, el apartado transcrito es el mismo que fue aprobado por la Asamblea Constituyente de 1991. En esa medida, es de recibo recordar lo que, a propósito del inciso 2 del artículo 58, dijera el Constituyente Guillermo Perry en defensa del texto aprobado:

"(...) El Doctor Darío Echandía en 1936 presentó ésta como la fórmula que concreta de manera específica para la propiedad, el principio general de que el interés público o social prevalece sobre el interés individual. De esa manera, no solamente es un derecho y una obligación de manera simultánea como lo vamos a consagrar para el caso del trabajo en esta Constitución, sino que el derecho de propiedad se garantiza, solo en tanto y en cuanto cumpla la función social que le es inherente; por esa razón, la legislación colombiana ha plasmado principios como el de extinción de dominio. Vale decir que la propiedad que no cumple su función social intrínseca, deja de ser propiedad (...)"⁴.

Resulta pues claro que el constituyente garantizó la propiedad privada, pero, al igual que cualquier otro derecho, al estimar que no tiene carácter absoluto, le atribuyó características que la involucran

⁴ Asamblea Nacional Constituyente 1991, Antecedentes Artículo 58, p. 142.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO

0078

DE 2016

Hoja No. 16

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1585 del 18 de noviembre de 2015 mediante la cual se adoptó la medida de toma de posesión inmediata para liquidar los bienes, haberes y negocios de INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.

no solo en la satisfacción de los intereses privados del titular de la misma, sino que la comprometen en la realización de cometidos sociales. En los orígenes doctrinales de esta concepción, merece citarse la autorizada voz de León Duguít, quien en una de sus conferencias en 1911, titulada "La propiedad función social", exponía que "(...) si bien es cierto el propietario tiene el deber, y por tanto el poder, de emplear la cosa que posee en la satisfacción de las necesidades individuales (...)" también, sentaba la siguiente proposición "El propietario tiene el deber, y por consiguiente el poder, de emplear su cosa en la satisfacción de necesidades comunes, de una colectividad nacional entera o de colectividades secundarias"⁵.

La jurisprudencia de esta Sala ha tenido ocasión de referirse al asunto en los siguientes términos:

"(...) En el Estado social de derecho, la protección del derecho de propiedad y los demás derechos adquiridos está vinculada a los principios de solidaridad y de prevalencia del interés general (C.P art 1). Precisamente, la función social inherente a la propiedad está orientada a realizar los intereses de la comunidad y por ello impone a quien sea propietario que, sin renunciar al ejercicio de sus derechos, contribuya a la realización de intereses que trascienden la esfera meramente individual (...)"⁶. (negrillas fuera de texto)

El peso específico del interés público como factor que permite limitar la propiedad como función social, también ha sido resaltado por la Corporación. En este sentido cabe citar la sentencia C-295 de 1993, cuando al discutirse la constitucionalidad de una disposición que establecía en el orden municipal la cesión gratuita de áreas para vías, zonas verdes y servicios comunales, lo cual, en el entender del accionante vulneraba el derecho de propiedad, la Sala se inclinó por la constitucionalidad, incluyendo entre sus motivos el siguiente:

"La propiedad, en tanto que función social, puede ser limitada por el legislador, siempre y cuando tal limitación se cumpla en interés público o beneficio general de la comunidad, como, por ejemplo, por razones de salubridad, urbanismo, conservación ambiental, seguridad etc.; el interés individual del propietario debe ceder, en estos casos, ante el interés social." (Negrillas fuera de texto)

(...)

En lo que atañe a la función social de la empresa el artículo 333 de la Constitución Política de 1991, dispuso en lo pertinente:

"ARTICULO 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley.

La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades.

La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. (...)"

Un elemento importante en la comprensión del significado a atribuirle al precepto en estudio, es la explicación presentada en las discusiones de la Asamblea Nacional Constituyente sobre el asunto, al respecto se expuso:

"(...) en el segundo inciso hay una primera frase que considera la subcomisión que tiene una gran importancia, es el de que la empresa tiene una función social que implica obligaciones, esta idea, venía de algunos proyectos presentados a consideración de la

⁵ Duguít, L., "La propiedad función social" en *Las transformaciones generales del derecho privado desde el Código de Napoleón*, Trad. C. Posada, Ed. Coyoacán, México, 2007, p. 127

⁶ Colombia, Corte Constitucional, Sentencia C-1074 de 2002. Esta providencia contiene en pies de página, un importante acopio jurisprudencial sobre las características, limitaciones y, otros aspectos de la propiedad.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO

0078

DE 2016

Hoja No. 17

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1585 del 18 de noviembre de 2015 mediante la cual se adoptó la medida de toma de posesión inmediata para liquidar los bienes, haberes y negocios de INTERNACIONAL COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A.

*Asamblea, y algunos miembros de la subcomisión, inicialmente plantearon que si la propiedad es una función social, pues no es necesario decir también que la empresa como tal tiene una función social. Pero finalmente llegamos a la conclusión de que la empresa es mucho más que la propiedad de una serie de bienes. La empresa es una organización que además de los bienes que tiene, tiene una determinada tecnología, unas especializaciones, un grupo humanos (sic) que allí laboran, desde directivos hasta trabajadores, quienes deben manejar la empresa no solamente con un criterio de utilidad para los dueños o de beneficio para los trabajadores, sino par (sic) el interés más amplio de la sociedad (...)por esas razones consideramos conveniente señalar esto en la norma constitucional(...) es el concepto moderno del manejo de la empresa. Cualquier curso de administración, sobre todo los posgrados hoy en día, señalan que el manejo de las empresas tiene que tener (sic) en cuenta de manera muy especial el entorno social, que la empresa está cumpliendo una función de carácter social, que va más allá del propio conglomerado compuesto por los accionistas, los directivos y los trabajadores (...)"*⁷

Valora la Corte Constitucional que el querer del constituyente, al connotar como social la función de la empresa, implica la atribución de obligaciones que exceden el afán de lucro particular. Si bien es cierto la configuración de la empresa, comporta obligaciones entre los diversos sujetos que interactúan para el logro de los fines de la organización, como los son los propietarios o accionistas, trabajadores, clientes para la adquisición de bienes o usuarios de los servicios ofertados; también es cierto que, el universo en el cual se inserta el tipo de organismos en referencia, supera, en mucho, el particular y específico marco señalado. Es el conglomerado social quien, de manera más general, puede resultar comprometido con el actuar empresarial. No pueden por ejemplo, ignorarse los importantes efectos que en materia de confianza en el ahorrador e inversor, generan eventuales prácticas financieras atribuibles a actores específicos. No podrían ignorarse las consecuencias que puede acarrear para la salud de la colectividad, el manejo inadecuado de singulares procesos industriales. Para la Sala, circunstancias como las referidas, evidencian el importante alcance de la actividad empresarial. No pasa por alto la Corte el trascendental papel que desempeña la Empresa en el contexto de las sociedades y, tal es su entidad que el constituyente expresamente lo reconoció al expresar que ese tipo de organización es la base del desarrollo, pero, es esa justamente otra razón que hace patente el compromiso de dichos organismos en la construcción social.

Encuentra pues la Corporación que la libertad de empresa como derecho de raigambre constitucional, no es, ni puede ser absoluto, con lo cual, se entiende la necesidad de trazarle límites y, fijarle restricciones a la libertad empresarial. Ciertamente, dichos cotos han de tener asidero constitucional, no de otro modo se entiende en este caso, lo dispuesto en el artículo 334 Superior que en lo aliente dice:

ARTICULO 334 La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho. En cualquier caso el gasto público social será prioritario.

El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar, de manera progresiva, que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de los bienes y servicios básicos. También para promover la productividad y competitividad y el desarrollo armónico de las regiones.

Como se advierte en el imperativo constitucional inmediatamente transcrito, debe el Estado, por mandato de la ley, adoptar las medidas que permitan lograr el cometido de los fines establecidos de manera general por el Constituyente. Es precisamente la función social, uno de esos propósitos

⁷ Asamblea Nacional Constituyente 1991, Artículo 331, 333,334 p. 6.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO

0078

DE 2016

Hoja No. 18

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1585 del 18 de noviembre de 2015 mediante la cual se adoptó la medida de toma de posesión inmediata para liquidar los bienes, haberes y negocios de INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.

a lograr y, a su vez, esta funge como motivo del actuar legislativo cuando la realización de fines estatales, como los consagrados en el artículo 2 de la Carta, entre ellos la defensa del interés general; exigen el cumplimiento de la intervención estatal ordenada en el citado artículo 334 de la Constitución. Relevante en esta consideración resulta recordar lo dicho en otra oportunidad por el Pleno de la Corte:

"(...) la función social, asociada a la empresa, es fuente de un sinnúmero de intervenciones legítimas del Estado que se instrumentalizan a través de la ley. Entre otros criterios relevantes que en este sentido pueden tomarse en cuenta, se mencionan los siguientes: la actividad de la empresa; su estructura organizativa; el mercado en el que se inserta; el tipo de financiamiento al cual apela; el producto o servicio que presta; la importancia de su resultado económico etc. Los anteriores factores pueden determinar variadas formas de inspección, control, regulación y existencia de estímulos e incentivos.(...)"⁸

En otra ocasión advirtió la Sala:

"(...) EN CIERTOS CASOS LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA, SE LOGRA COMO UNA CONTRAPARTIDA DE LOS INCENTIVOS ECONÓMICOS QUE EL LEGISLADOR DECIDE OTORGAR CON MIRAS A ALCANZAR DETERMINADOS OBJETIVOS ECONÓMICOS DE INTERÉS GENERAL. (...)"⁹

Y en la misma providencia destacó el peso del interés general como límite de la libertad de empresa:

"(...) La Corte ha hecho énfasis en que tanto los posibles estímulos como las limitaciones de orden legal a las que puede verse sometida la libertad económica y de empresa, han de tener como guía la garantía de los derechos fundamentales de las personas y la prevalencia del interés general (...)"¹⁰

De lo dicho, concluye la Sala que la libertad de empresa desde la perspectiva constitucional debe cumplir una función social, razón, entre otras, que autoriza la intervención estatal por la vía de la concesión de estímulos, beneficios, restricciones y otras medidas cuyo telos bien puede ser la mejora de la calidad de vida de los habitantes del territorio nacional, la prevalencia del interés general o la garantía de los derechos fundamentales de los asociados

Del mismo modo, en el fallo T-468-03 expedido por la Corte Constitucional se plantearon las siguientes manifestaciones al abordar el punto de la autonomía de la voluntad privada en el sector financiero:

"(...)"

Adicionalmente, la noción de orden público como límite de la autonomía de la voluntad, deja de cumplir un papel exclusivamente negativo de protección a las libertades individuales, para transmutar su alcance a la realización imperativa de los deberes de bien común e interés público, propios de un Estado Social de Derecho. En este orden de ideas, la nueva noción de orden público permite, por una parte, imponer la realización de los principios superiores de un Estado Social, destinados a velar por la conservación y vigencia no sólo de las libertades individuales de los ciudadanos, sino también de los derechos sociales o prestacionales de todas las personas y, por otra parte, conlleva al reconocimiento de un Estado interventor, quien fundado en principios de equidad, regula imperativamente las relaciones entre los particulares, con el propósito de alcanzar

⁸ Sentencia C-254 de 1996

⁹ Sentencia C-100 de 2005

¹⁰ Ibidem. Una consideración similar respecto de la importancia del bien común cuando se trata de establecerle límites a la libertad de empresa, quedó plasmada en la Sentencia C-492 de 2002 del siguiente modo "(...), el reconocimiento de la libertad de empresa se hace conforme al respeto del bien común y sus límites son el resultado de la protección de las condiciones mínimas de seguridad, tranquilidad, salubridad y moralidad públicas dentro de las cuales se puede ejercer el libre comercio.(...)"

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO

0078

DE 2016

Hoja No. 19

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1585 del 18 de noviembre de 2015 mediante la cual se adoptó la medida de toma de posesión inmediata para liquidar los bienes, haberes y negocios de **INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.**

un pleno desarrollo económico ligado al logro efectivo de una justicia social. La imposibilidad de admitir un acto o contrato, con violación al orden público, le otorga a dicha garantía el reconocimiento de norma de derecho imperativo, o, en otras palabras, de ius cogens¹¹.

(...)

A partir de la citadas consideraciones y de conformidad con lo previsto en la Constitución Política de 1991, la concepción moderna de la autonomía de la voluntad privada, supone la existencia de un poder dispositivo de regulación, pero sometido a la intervención normativa del Estado, de suerte que, lejos de entrañar un poder absoluto e ilimitado de regulación de los intereses de los particulares, como era lo propio del liberalismo individualista, se encuentra sometido a la realización de la función social de la propiedad privada y de las libertades básicas de la economía de mercado.

(...)

17. Partiendo de estas consideraciones, surge entonces como interrogante: ¿si en la actividad financiera y bancaria es predicable el mismo grado de autonomía que se presenta en la generalidad de las relaciones jurídicas?

Conforme lo ha expuesto esta Corporación, la función bancaria no es igual a las demás actividades que realizan los particulares en ejercicio de la autonomía de la voluntad privada¹², en razón de las siguientes consideraciones:

- *El artículo 335 de la Constitución Política, califica a la actividad bancaria como de interés público, motivo por el cual se orienta a la búsqueda del bienestar general.*
- *Así mismo, la citada disposición constitucional restringe el acceso a la prestación de los servicios financieros, en la medida en que exige la autorización previa del Estado para su ejercicio. Esta limitación tiene como fundamento el alto riesgo social que implica esta actividad y la consecuente necesidad de asegurar la confianza pública en el servicio. Entre otras, por ejemplo, el artículo 35 de la Ley 510 de 1999, establece como objetivo de la Superintendencia Bancaria: "a) Asegurar la confianza pública en el sistema financiero y velar por que las instituciones que lo integran mantengan permanente solidez económica y coeficientes de liquidez apropiados para atender sus obligaciones (...)"¹³.*

(...)

- *Finalmente, como lo ha sostenido esta Corporación, la Carta limita expresamente la libertad contractual del sector bancario, en procura de la protección del interés público cuando dispone el ejercicio continuo y obligatorio de las funciones de control, vigilancia e inspección estatal en el desarrollo y prestación de dicha actividad económica¹⁴.*

¹¹ Ver, a título de ejemplo, los artículos 16, 1518 y 1524 del Código Civil.

¹² Colombia, Corte Constitucional Sentencia SU-157 de 1999. M.P. Alejandro Martínez Caballero.

¹³ Subrayado por fuera del texto original.

¹⁴ En Sentencia SU-157 de 1999 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), la Corte Constitucional sostuvo que: "al Estado corresponde desplegar una actividad orientada a favorecer el cabal cumplimiento de las prerrogativas inherentes a la libre iniciativa privada y la libertad económica y, a la vez, procurar la protección del interés público comprometido. Por ende, se distinguen casos en donde la intervención es obligatoria, a través de cláusulas de mandato y, situaciones en donde la intervención es facultativa. Un ejemplo de la intervención obligatoria es el control y vigilancia estatal para las entidades financieras, que contempla el artículo 335 superior. El inciso 24 del artículo 189 de la Carta concreta la inspección, vigilancia y control sobre las personas que prestan actividades financieras, en cabeza del Presidente de la República, quien la ejercerá de acuerdo con la ley. Por su parte, el artículo 10 de la Ley 35 de 1993 señala que el Presidente de la República, a través de la Superintendencia Bancaria, ejercerá la inspección, vigilancia y control de quienes desempeñen las actividades financieras. Y, el artículo 2º del Decreto 1284 de 1994 señala que esa entidad vigilará los establecimientos bancarios, compañías de seguros y las corporaciones de ahorro y vivienda, entre otros".

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO

0078

DE 2016

Hoja No. 20

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1585 del 18 de noviembre de 2015 mediante la cual se adoptó la medida de toma de posesión inmediata para liquidar los bienes, haberes y negocios de **INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.**

Por consiguiente, la autonomía de la voluntad privada en tratándose de las instituciones financieras, se encuentra restringida o limitada: (i) Por la naturaleza especial de la actividad que prestan; (ii) Por la circunstancia de ser el crédito y el ahorro instrumentos necesarios para garantizar los derechos de las personas; (iii) Por la prohibición constitucional de no abusar de los derechos propios; (iv) Por el principio de prevalencia del interés público; (v) Por la vigencia del principio de solidaridad y, adicionalmente; (vi) Por las exigencias éticas de la buena fe. (...).

De esta manera, la protección empresarial se encuentra sometida a la realización de los fines de la función social que le es predicable constitucionalmente en los términos del artículo 333 de la Constitución Política, no olvidando además que las actividades financieras, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación a las que se refiere el literal d) del numeral 19 del artículo 150 son de interés público, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 de la precitada Constitución Política.

En este orden de ideas, no se puede siquiera minimizar la gravedad de los hechos que motivaron la toma de posesión para liquidar, considerando que la actividad de intermediación financiera de la Compañía de Financiamiento se encontraba desarrollando en condiciones inapropiadas e inseguras al encontrarse prácticas tendientes a la normalización artificial de cartera, como fueron la denominada "Caja-cheques" y en cuentas por cobrar, a través de las cuales se revelaba una situación del riesgo crediticio irreal, ni desconocer la materialidad y censura de las operaciones con vinculados y excesos en los límites individuales de crédito, la excesiva concentración de cartera y debilidades en la metodología de calificación que derivaron en una subestimación de provisiones, la alta exposición con el originador Procol S.A.S., la sobreestimación advertida en cartera comprada a originadores, tanto en la prima como en la valoración de los activos, la falta de reconocimiento de algunos gastos: Provisión de impuesto de renta, Cuentas por cobrar y utilidades por ventas de BRP.

Tampoco puede pasarse por alto que el ajuste de todos estos conceptos en el estado de resultados de la Compañía correspondió a un valor aproximado de \$19.310 millones, producto de la distorsión de información financiera con efecto directo en los resultados netos presentados y el nivel de solvencia de Internacional C.F. S.A., conforme se describió en la Resolución 1585 de 2015.

Sumado a ello las falencias advertidas en materia de Gobierno Corporativo, a partir de las debilidades que revestía el mecanismo de toma de decisiones como vía de funcionamiento de la Junta Directiva, la falta de direccionamiento y seguimiento real por parte de la misma Junta Directiva respecto de la gestión de los negocios de la Compañía, desatención de un adecuado sistema de control interno y, el no ejercicio de las funciones legales y estatutarias a cargo de la Alta Gerencia, predicable del Presidente, quien permitió la concentración de funciones de dirección, control y seguimiento en el Vicepresidente Ejecutivo, sin el conocimiento, control y reporte al mismo. Lo anterior sin excluir las cargas que también le eran exigibles a este último funcionario – vicepresidente ejecutivo – dado su papel en el direccionamiento de la compañía.

A partir de estas condiciones, no concibe este Despacho cómo se puede aducir que Internacional C.F. S.A. podía seguir funcionando bajo la premisa de "protección de la empresa", dado que ninguno de los institutos de salvamento lograba admitir su proyección negocial, aún en hipótesis que conllevaran un cambio de administradores, o una inyección de capital, o la creación de una universalidad patrimonial, entre otros, en razón principalmente a que la alteración de la condición de idoneidad incluso trascendió hasta el beneficiario real y controlante de la entidad, quien conocedor de los hechos, en su

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO

0078

DE 2016

Hoja No. 21

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1585 del 18 de noviembre de 2015 mediante la cual se adoptó la medida de toma de posesión inmediata para liquidar los bienes, haberes y negocios de **INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.**

condición de accionista indirecto y miembro principal de la Junta Directiva, nunca presentó un plan o acción de mejora tendiente a subsanar de manera efectiva, las situaciones advertidas, así como al hecho de que la distorsión de la información financiera impidió a la SFC conocer adecuadamente la situación real de la Compañía.

Por consiguiente a partir de lo anterior, es claro que las valoraciones sobre un ente societario de carácter financiero demandan criterios más exigentes, en los que se antepone el interés público por orden constitucional, recordando que la SFC tiene dentro de sus objetivos asegurar la confianza pública en el sistema financiero y velar porque las instituciones que lo integran mantengan permanentemente la solidez económica apropiada para atender sus obligaciones.

8.3.2.2. Sobre la “pérdida de la confianza en el regulador” como causal de intervención para liquidar.

En relación con las consideraciones expuestas por el recurrente, basta con clarificarle que la toma de posesión para liquidar a Internacional C.F. S.A. se adoptó con fundamento en las causales previstas en los literales h) y f) del artículo 114 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero –EOSF– referidas a la existencia de graves inconsistencias en la información que suministra a la SFC que a juicio de ésta no permita conocer adecuadamente la situación real de la entidad y cuando persista en manejar los negocios en forma no autorizada o insegura, de manera que es inexplicable que el impugnante entienda confusamente la mención de la “pérdida de la confianza” como una causal.

El quebranto de la confianza del supervisor sobreviene ante la gravedad y materialidad de las situaciones encontradas en la Compañía de Financiamiento a pesar de pretender sugerir que la misma fue utilizada como un “comodín” para justificar la decisión. De manera que, la claridad de los hechos y la evidente configuración de las causales de toma de posesión no resisten ningún análisis tendiente a descalificar la valoración objetiva que sobre ellas se expuso y no es dable pretender conferirle una connotación de subjetividad a la determinación que se tomó por la SFC.

No se comparte la afirmación del impugnante cuando menciona que la preservación de la confianza no tiene que ser mantenida a lo largo del tiempo, pues estima que la ley lo exige únicamente al momento de la constitución de la entidad, para cuyo efecto cita el inciso 5° del artículo 53 del EOSF, puesto que además de ser sorpresivo este argumento bajo la óptica del criterio de responsabilidad, carácter e idoneidad que se pondera al momento de una solicitud de constitución de una entidad vigilada, no resulta admisible desconocer el presupuesto fundamental de mantener tales condiciones permanentemente, las que de suyo, inspiran al Supervisor la confiabilidad adecuada para ser partícipes del sistema financiero, predicables no solo del ente jurídico sino principalmente de los accionistas, administradores, directivos, órganos de control, etc., dado que sobre el postulado de la confianza se estructura preponderantemente la relación de una entidad vigilada y el ente supervisor a partir del otorgamiento de una licencia bancaria.

Por tal razón causa extrañeza al Supervisor una consideración de esta naturaleza, pues ella denota la atípica concepción de la operatividad de una entidad vigilada sin la acreditación permanente de las condiciones de responsabilidad, carácter e idoneidad adecuadas a efectos de permitir que por su intermedio se manejen recursos del público, aspectos que el Supervisor evalúa como garante de la confianza pública en todo momento. Un escenario como el sugerido por el recurrente conduciría al afianzamiento de la irregularidad en el funcionamiento del sector financiero.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 0078

DÉ 2016

Hoja No. 22

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1585 del 18 de noviembre de 2015 mediante la cual se adoptó la medida de toma de posesión inmediata para liquidar los bienes, haberes y negocios de INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.

Pero además, si se trata de fundamentos legales, no debe olvidarse cómo el literal f) del numeral 3° del artículo 53 del EOSF otorga facultades a la SFC para exigir el suministro de la información que estime pertinente, tanto al momento de su constitución como posteriormente, respecto de los beneficiarios reales del capital social de una entidad vigilada cuando se trate de personas que pretendan participar en la constitución de la misma y no tengan carácter de financieras. Y si ello no fuera suficiente, se recuerda cómo el literal g) del numeral 2° del artículo 325 del EOSF, referido a la función de posesionar a los directores, administradores, representantes legales, revisores fiscales, entre otros, exige que los requisitos objetivos y las calidades subjetivas valoradas por la SFC para autorizarla deben acreditarse y conservarse por los mismos, durante el tiempo en que se desempeñen en cargos que requieran posesión, teniendo incluso este Organismo facultad para revocarla cuando no se conserven las calidades objetivas y subjetivas evaluadas al momento de autorizar su posesión.

Debe recordarse que los problemas de Internacional C.F. S.A. se afincaron en deficiencias estructurales centradas en la inoperancia de sus principales órganos de administración y control que se tradujeron en un manejo inseguro de los negocios e inadecuada revelación, afectando la confianza que no solo constituye el pilar fundamental de las relaciones entre las entidades vigiladas y la SFC, sino que también constituye, al tenor de lo señalado en el literal a) del numeral 3° del artículo 326 del EOSF, uno de los objetivos de esta Superintendencia¹⁵. En la Resolución 1585 de 2015 se encuentran ampliamente acreditadas las situaciones objetivas en virtud de las cuales se estructuraron las causales de toma de posesión y la asociación de las mismas con la defraudación de la confianza del Supervisor en la entidad vigilada, sin que pueda referirse un criterio de subjetividad, conforme lo sugiere el recurrente. Claramente la decisión impugnada se apoyó en la valoración de unos hechos específicos, reales y documentados, sobre cuyo objeto y características se adelantaron las apreciaciones y conclusiones correspondientes sin que sobre ellas haya incidido una consideración distinta a su confrontación con el régimen legal y a la sujeción a las funciones y objetivos asignados por la Ley al Supervisor.

En los anteriores términos, los comentarios del recurrente no ameritan mayor análisis.

8.3.2.3. De la procedencia y finalidad de otras medidas de salvamento menos graves.

Retomando parte de los argumentos esgrimidos ya por esta Superintendencia, asociados a la prevalencia del interés general frente a los intereses particulares, en este caso, de carácter empresarial, no comprende la acepción utilizada por el impugnante, cuando refiere situaciones "patológicas" para indicar que la decisión objeto del recurso de reposición, no aplica a entidades que se encuentran en un estado en el cual se pueda salir de las dificultades.

Conforme quedó expuesto en la resolución impugnada, la configuración de las causales se acreditó de manera clara y suficientemente ilustrativa, siendo así que las condiciones de operación de Internacional C.F. S.A. exigían una medida radical pues no se visualizaron alternativas que pudieran admitir la permanencia de la Compañía en el sector financiero.

¹⁵ La disposición en cita señala que, corresponde a esta Superintendencia "asegurar la confianza pública en el sistema financiero y velar porque las instituciones que lo integran mantengan permanente solidez económica y coeficientes de liquidez apropiados para atender sus obligaciones".

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO -

0078

DE 2016

Hoja No. 23

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1585 del 18 de noviembre de 2015 mediante la cual se adoptó la medida de toma de posesión inmediata para liquidar los bienes, haberes y negocios de **INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.**

Así las cosas, a riesgo de ser reiterativa, esta Superintendencia debe insistir en que el considerando noveno del acto administrativo impugnado recoge las apreciaciones responsablemente realizadas con antelación a la adopción de la decisión de toma de posesión para liquidar la entidad, siendo consciente que los institutos de salvamento, se insiste, son medidas de carácter facultativo conforme se expuso en el acto recurrido, sin que sea presupuesto agotarlos previamente a la adopción de una medida de toma de posesión para liquidar, contrario a lo expuesto por el impugnante. Pese a ello, justamente con sujeción a las circunstancias y características de los hechos encontrados, las medidas preventivas previstas en el artículo 113 del EOSF en su totalidad fueron valoradas y reflejadas en el acto administrativo, ciertamente a partir de las razones que no permitían visualizar la sostenibilidad de la Compañía en el sector financiero.

Y no podría ser de otra forma, puesto que los hallazgos no se limitaron a inconsistencias formales de carácter contable o a simples defectos de provisiones de cartera o en una predecible o aceptable equivocación en la calificación de los créditos, los cuales, compartiendo el criterio del recurrente, podrían ser subsanables con medidas como la vigilancia especial, o un programa de recuperación tratándose exclusivamente de afectación de indicadores financieros, que no es el caso, o una capitalización, entre otros.

Sucede que las situaciones trascendieron a la realización de prácticas tendientes a normalizar artificialmente la cartera, que distorsionaron la información financiera impidiendo conocer la situación real de la Compañía, a la celebración de operaciones con vinculados y excesos en los cupos individuales de crédito, a la estructuración indebida de operaciones con el originador de cartera Procol S.A.S., sin desconocer las fallas estructurales en Gobierno Corporativo.

Por tales razones, la SFC en el acto impugnado precisó: "... cobran importancia los hallazgos relacionados con actuaciones contrarias a la ley y a las cargas de conducta atinente a la buena fe comercial y a la transparencia que afectan la confianza pública..."

Por último, además de considerar que las apreciaciones que expone el recurrente dentro de los distintos escenarios que presenta ante las alternativas legales de institutos de salvamento concebidas de forma individual o conjunta, tales como la vigilancia especial, un plan de recuperación, recapitalización o una administración fiduciaria a las que hizo mención, que a su juicio, hubieran solventado los problemas transitorios que enfrentaba la Compañía para no haber acudido a la liquidación, corresponden a hipótesis del recurrente que la misma Superintendencia realizó al caso concreto de Internacional C.F. S.A., absolutamente convencida que ninguna de ellas procedía en relación con la materialidad de los hechos, la afectación estructural de la entidad y la amenaza de la confianza pública, con independencia de la importancia que le resta a tales valoraciones el recurrente.

8.3.2.4. La causal contenida en los literales f) y h) del artículo 114 del EOSF para que proceda la toma de posesión no se aplican en este caso.

Pretende el recurrente desconocer la contundencia en la configuración de las causales de toma de posesión en que se fundamentó la medida, por cuanto en su parecer, para la persistencia en el manejo inseguro de los negocios es necesario que la Compañía hubiera realizado en diversas ocasiones las prácticas no autorizadas o inseguras advertidas por la SFC y que pese a ello hubiera continuado en esa conducta. Por ello enfatiza que "es esta la primera Resolución por medio de la cual esa Superintendencia ha afirmado que la Compañía ha realizado este tipo de prácticas", para así desestimar la persistencia en ellas.

Sobre el particular, se aborda el énfasis realizado por el recurrente inicialmente sobre la

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

0078

RESOLUCIÓN NÚMERO

DE 2016

Hoja No. 24

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1585 del 18 de noviembre de 2015 mediante la cual se adoptó la medida de toma de posesión inmediata para liquidar los bienes, haberes y negocios de INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.

causal referida al manejo inseguro de los negocios contenida en el literal f) del artículo 114 del EOSF para así mismo valorar la apreciación por él presentada respecto de la causal h) del artículo precitado, al indicar que los asuntos que la SFC considera como una inconsistencia en la información contable reportada, no lo son, sin sustentar tal inconformidad.

Conforme se expuso en el acto administrativo impugnado, durante la visita de inspección adelantada durante el año 2015 y cuyas conclusiones se encuentran contenidas en el informe 2015100740-015 se advirtió que las prácticas de normalización artificial de cartera (Caja Cheques y Cuentas por cobrar para aplicar a cartera) venían siendo desarrolladas en la Compañía de Financiamiento de manera sucesiva, al establecerse que algunos de los cheques recibidos para el pago de obligaciones crediticias no eran presentados para su pago, permaneciendo en caja por varios meses, reflejando antigüedades que oscilaban entre 23 y 699 días, manteniendo al día la cartera de la entidad. Por ello, al ser aplicados los valores de los cheques (caja cheques) a las cuotas o saldos de las obligaciones de cartera de crédito, antes de su real ingreso, se afectó la calidad e integridad de la información sobre el estado real de las operaciones activas de crédito de los clientes.

Igual situación se predicó de la creación de cuentas por cobrar para aplicar a cartera equivalentes al monto que debería ser amortizado por los deudores de acuerdo con la estructuración original del crédito y que se enjugarían mediante el otorgamiento de nuevos créditos, respecto de cuya práctica debe mencionarse, según consta en el informe de visita, se presentaban al menos desde 2014.

Todo lo anterior, conforme se indicó en la resolución impugnada, "(...) Por el contrario se pudo evidenciar que la Compañía, de manera reiterada utilizó mecanismos diseñados para mostrar una situación financiera distinta a la real, según se ha descrito en relación con el efecto generador por la normalización del estado de los deudores en forma artificial, así como por la falta de reconocimiento de gastos y valoración de los activos por cuenta de saldos sin conciliar principalmente desde mayo de 2014."

No pueden desprenderse tales prácticas del impacto que generaron sobre los estados financieros de la entidad, toda vez que con ellas se impidió conocer el adecuado reconocimiento de ingresos, al ser sobreestimados de manera sucesiva, particularmente en el activo más representativo de la compañía, como lo era la cartera de crédito.

De otra parte, conforme se observa en el informe de visita 2015100740-15, la inadecuada aplicación de políticas de provisión para gastos no legalizados, permitieron establecer que algunas cuentas por cobrar referidas a giros del exterior, anticipos de contratos y proveedores y cuentas por cobrar - diversas - desbordaban incluso más de 180 días y aquellas por concepto de adelantos al personal, otros gastos anticipados y otros descuentos de nómina con más de 10 días, que no fueron provisionadas, generando una inadecuada revelación de la realidad económica de la Compañía de Financiamiento.

Así mismo, al no encontrarse perfeccionadas las ventas de bienes recibidos en pago-BRP- no se debía anticipar la utilidad y se ha debido reconstituir el nivel de provisiones hasta que se cumplieran las promesas de compraventa, subestimándose así el nivel de provisiones de BRP's durante 2015.

Situaciones éstas que, sumadas al faltante en la provisión del impuesto de renta para diciembre de 2014, como las diferencias advertidas en el cálculo de la prima por compra de cartera y las partidas pendientes de conciliar, que según se refiere en el informe de visita, corresponden a operaciones realizadas en años anteriores, evidenciaron que para

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO

0078

DE 2016

Hoja No. 25

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1585 del 18 de noviembre de 2015 mediante la cual se adoptó la medida de toma de posesión inmediata para liquidar los bienes, haberes y negocios de **INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.**

los periodos de 2014 y lo corrido de 2015, la Compañía no solo presentó información inexacta sobre los saldos brutos y neto de su cartera, el valor de la provisión acumulada, el cargo en los estados financieros por concepto de cartera, ingresos por intereses, sino que impidió conocer el verdadero riesgo de crédito de la entidad.

Con fundamento en estas graves y recurrentes situaciones en materia de riesgo crediticio y la indebida revelación de información financiera, a las que se sumaron las fallas estructurales de la Compañía sobre el Riesgo de Gobierno Corporativo, sin desconocer las operaciones con vinculados y excesos a los cupos individuales de crédito, no puede desconocerse una persistencia en un manejo inseguro de negocios, distante de una adecuada administración de riesgos integralmente considerados y una clara revelación de información financiera ajustada a la realidad económica de la entidad.

Tampoco se puede olvidar que en noviembre de 2014 la SFC había realizado una visita de inspección con el objeto de evaluar el sistema de administración de riesgo crediticio especialmente la metodología de calificación en el seguimiento y normalización del portafolio comercial y la operación de compra de cartera a no vigilados, entre otros aspectos. Estas situaciones previas exigían una gestión diligente de la Compañía para ir superando las debilidades que ya se le habían advertido y ello no sucedió. Por el contrario, dicha situación se vio agravada con los hallazgos del 2015, conforme se ha expuesto.

No resulta entonces comprensible para la SFC que la Compañía se proponga argumentar que no "persistió" en el manejo inseguro de los negocios, cuando se tiene acreditado que las conductas cuestionadas se desarrollaron continuamente en el tiempo, producto de una inapropiada administración al interior de la entidad que la indujo a una situación y condiciones de funcionamiento irregulares, las que motivaron la decisión de la SFC, objeto de impugnación.

De otra parte, no se puede confundir, como pareciera entenderlo el recurrente de manera equivocada, la existencia de prácticas no autorizadas o inseguras con el manejo inseguro de los negocios, pese a que el efecto en los dos escenarios, pudiera ser común atendido el riesgo real o potencial que se genera en su operación o desarrollo.

Al respecto, debe señalarse que las prácticas inseguras o no autorizadas corresponden a una adecuación descriptiva y típica respecto de una conducta o comportamiento que resulte particularmente censurable para el Supervisor, que exige pronunciamiento expreso dirigido a la vigilada a efectos de ordenar con fundamento en el literal a) del numeral 5° del artículo 326 del EOSF que sean suspendidas. Por su parte, el manejo inseguro puede surgir o sobrevenir con independencia de la pre-existencia o no de aquellas prácticas, en la medida en que este concepto corresponde al desempeño integralmente considerado de una entidad vigilada que se aparta de los postulados adecuados de una administración de riesgos propia de su naturaleza.

Debe recordarse que la declaratoria de práctica ilegal o insegura presupone, de acuerdo con la previsión contenida en el numeral 5 del artículo 326 del EOSF, que la SFC considere que una institución sometida a su vigilancia hubiere "*violado sus estatutos o alguna disposición de obligatoria observancia...*" o "*... esté manejando sus negocios en forma no autorizada o insegura ...*", violación que se materializa en la omisión en el cumplimiento de una obligación impuesta por la ley o el accionar en contravía de una prohibición legal, o en la gestión de los negocios apartándose del marco de autorización o seguridad que le es propio.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO

0078

DE 2016

Hoja No. 26

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1585 del 18 de noviembre de 2015 mediante la cual se adoptó la medida de toma de posesión inmediata para liquidar los bienes, haberes y negocios de **INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.**

Así, la declaratoria de ilegalidad o inseguridad es una atribución propia y exclusiva de este organismo de control, de manera que en ese escenario no es consecuente la pretensión del recurrente, orientada a que este organismo de control deba instituir previamente una práctica ilegal o insegura para poder configurar la causal de manejo inseguro de negocios.

En este punto no puede perderse de vista que en el escenario que nos ocupa, el manejo inseguro de los negocios por parte de Internacional C.F., se materializó a partir de la suma de varias conductas: desde gobierno corporativo, prácticas de normalización artificial de cartera, distorsión de la información de la entidad y la toma de una serie de decisiones encaminadas a afectar los estados financieros y en general la información de la Compañía, que superan en su conjunto el concepto de práctica ilegal.

De esta forma, está concebido el entendimiento de la causal de toma de posesión contemplada en el literal f) del artículo 114 del EOSF, pues de lo contrario, se impediría su aplicación sin la acreditación previa de la calificación de una práctica no autorizada o insegura, condicionamiento que no se desprende de dicha disposición legal.

En efecto, el concepto de manejo inseguro de negocios trasciende a la responsabilidad que le es predicable a todo administrador de negocios según se desprende de los principios de conducta que emanan de la legislación mercantil predicable a aquellos que lo son de entidades vigiladas por la SFC igualmente, conforme se advierte en el artículo 72 del EOSF. Dicha disposición establece que los administradores de las instituciones sometidas al control y vigilancia de la SFC deben obrar no sólo dentro del marco de la ley sino dentro del principio de la buena fe y de servicio a los intereses sociales, absteniéndose de celebrar una serie de conductas que allí se relacionan.

Resta agregar que, conforme se expuso en el acto impugnado, la utilización de las prácticas comerciales y administrativas allí descritas, dio lugar al manejo inseguro de los negocios de Internacional C.F. S.A. en la medida en que las operaciones realizadas y su forma de revelación impedían conocer con certeza si los recursos captados de los depositantes estaban siendo debidamente protegidos. En efecto, la inadecuada valoración de los riesgos asociados a los activos, principalmente la cartera de créditos, a través de múltiples mecanismos utilizados para sobreestimar su valor y las utilidades generadas, impidió conocer el verdadero respaldo para atender el pago de los dineros depositados y, por lo tanto, éstos se encontraban en riesgo de pérdida. Situaciones todas estas, conocidas por la Alta Gerencia, Junta Directiva y hasta por el beneficiario real y controlante de la entidad.

La acepción o concepto de manejo inseguro de negocios retoma la responsabilidad que se desprende a partir de la exigencia a todo administrador de una entidad vigilada, de desplegar su actuación como un buen hombre de negocios. Sobre ello resulta oportuno traer a colación el concepto de la Superintendencia de Sociedades referido al concepto de "Buen Hombre de Negocios" identificado con el oficio 220-015163 del 11 de febrero de 2013, cuyo análisis tiene plena cabida y aplicación a efectos de demostrar que la operación y manejo de los negocios de Internacional C.F. S.A. se apartó sistemáticamente del alcance de dicho precepto normativo y filológico.

"CONCEPTO COMERCIAL DE "BUEN HOMBRE DE NEGOCIOS". SUPERSOCIEDADES

Resulta pertinente informarle que el concepto actuar "con la diligencia de un buen hombre de negocios" surge en el texto de la exposición de motivos que dio lugar a la expedición de la Ley 222 de 1995, acogida por el legislador y posteriormente desarrollada por la jurisprudencia y la doctrina como consecuencia de la gran responsabilidad que asumen los administradores quienes en el

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO . . .

0078

DE 2016

Hoja No. 27

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1585 del 18 de noviembre de 2015 mediante la cual se adoptó la medida de toma de posesión inmediata para liquidar los bienes, haberes y negocios de **INTERNACIONAL COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A.**

ejercicio de su gestión, sus decisiones y las actuaciones que adelantan a nombre de la sociedad que representan o administran impactan en el orden social y económico del país. Así se observa en los distintos pronunciamientos proferidos por las distintas Cortes, una de ellas la Corte Constitucional en sentencia C-123 de 22 de febrero de 2006, M. P. Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ, al examinar la constitucionalidad, entre otros, del artículo 24 (Parcial) de la mencionada Ley 222 referido a la presunción de culpa de administrador en los casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o de los estatutos, en su argumentación y consideraciones trae a colación los argumentos que sustentaban el proyecto de ley que posteriormente se convirtió en ley de la República.

En esa oportunidad la Corte expresó:

"(....)

.... en relación con los administradores, dada la importante labor que desempeñan, por los inmensos poderes que hoy en día detentan, consideró necesario el legislador someterlos a un estricto código de conducta, para lo cual se precisó el marco general de sus actividades, sus funciones y responsabilidad, estableciendo además, normas que agilizaran y facilitaran las consecuentes acciones para el establecimiento de dicha responsabilidad. Así lo recordó el legislador durante el trámite legislativo de la Ley 222 de 1995, cuando señaló en la ponencia para segundo debate en la Cámara de Representantes que:

"La necesidad de abandonar los modelos tradicionales de responsabilidad referidos al buen padre de familia, que hoy resultan disueltos, para acoger como nuevo patrón el del correcto y leal empresario, ha llevado a proponer un acápite sobre administradores. Una mejor protección del crédito, del público, de los trabajadores y de los mismos socios hace indispensable detallar y precisar las funciones y responsabilidades de los administradores así como las consecuentes acciones de responsabilidad, puesto que es claro que tales funcionarios detentan hoy inmensos poderes y adoptan decisiones de profundas implicaciones sociales, que como es de esperar deben ceñirse a un estricto código de conducta, que resulta concordante con las normas de rendición de cuentas previstas en el capítulo de estados financieros. (....)

En efecto, en el Libro I de la Ley 222 de 1995, se estableció el Régimen de Sociedades, y en el Capítulo IV, de los Órganos Sociales, se consagra en la Sección II lo referente a los administradores (artículos 22 al 25), señalando quienes tienen esta calidad, sus deberes y responsabilidades, y lo relacionado con la acción social de responsabilidad contra éstos.

(....)

Así mismo, respecto de la conducta de los administradores, el art. 23 de la ley, señala que deben obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios, así como que sus actuaciones se cumplirán en interés de la sociedad y observando los intereses de sus asociados. Además, de manera específica se establecen, los deberes de los administradores en el cumplimiento de su función así:

(.....)

Puede concluir la Corte, que en materia de sociedades, dada la importante labor que desempeñan sus administradores, en razón a la gran responsabilidad que asumen y la repercusión que sus actuaciones pueden tener en el desarrollo social, ha sido la ley la que les ha impuesto de manera general a éstos, ejercer sus funciones con sujeción a los principios de lealtad y buena fe, así como actuar con la diligencia de un buen hombre de negocios, en interés de la sociedad y teniendo en cuenta los intereses de sus asociados. En tal medida, la actuación de los administradores debe ir más allá de la diligencia común y corriente, pues su gestión profesional de carácter comercial debe orientarse al cumplimiento de las metas propuestas por la sociedad.

Cabe recordar, que la Ley 222 de 1995, impuso a los administradores un grado de diligencia y prudencia superiores a la mediana que hasta entonces tenía, la de un buen padre de familia, pues ahora deberán actuar con la diligencia propia de un buen hombre de negocios, es decir, con la que

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO

0078

DE 2016

Hoja No. 28

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1585 del 18 de noviembre de 2015 mediante la cual se adoptó la medida de toma de posesión inmediata para liquidar los bienes, haberes y negocios de **INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.**

pondría un comerciante normal en sus propios asuntos, lo que supone una mayor exigencia en la administración de los asuntos propios de la sociedad.

Dicho marco general anotado, así como las reglas específicas que imponen deberes a los administradores, se complementan en la citada Ley 222, con las normas relativas a la responsabilidad solidaria e ilimitada en que éstos pueden incurrir por los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros. Responsabilidad en la que se presumirá la culpa del administrador en los casos de incumplimiento o extralimitación de funciones, violación de la ley o de los estatutos, o cuando hayan propuesto o ejecutado la decisión sobre distribución de utilidades en contravención a lo prescrito en el artículo 151 del Código de Comercio y demás normas sobre la materia.

(....)

Presunciones simplemente legales que la Corte encuentra razonables, en la medida que ha sido la propia ley la que le fija a los administradores el marco general de su actuación, obrar de buena fe, de manera leal y con la diligencia de "un buen hombre de negocios", lo cual no puede más que denotar la profesionalidad, diligencia y rectitud con la que deben actuar los administradores en bienestar de los intereses de la sociedad y de sus asociados, atendiendo la importancia y relevancia del papel que cumplen en el desarrollo de sus funciones y el alto grado de responsabilidad que asumen por la gestión profesional que se les encomienda.

En efecto, según el artículo 333 de la Constitución, la empresa como base del desarrollo tiene una función social que implica obligaciones, y por lo tanto la actuación de sus administradores tiene profundas implicaciones y repercusiones en el orden social. En efecto, la importante labor que desempeñan los administradores y los inmensos poderes que hoy en día detentan, llevó al legislador a precisar sus funciones así como su responsabilidad, estableciendo las normas respectivas que facilitarían y agilizarían su establecimiento.

(....)".

En esa oportunidad, luego de hacer referencia a quiénes conforme al citado artículo 22 se consideran administradores, con relación a los principios que deben gobernar las actuaciones de los administradores, contemplados en el artículo 23 ss, expresó:

"(....)

2. PRINCIPIOS Y DEBERES DE LOS ADMINISTRADORES

2.1 Principios rectores que deben orientar la conducta de los administradores e intereses que deben tener en cuenta en sus actuaciones.

2.1.1. La buena fe es un principio de Derecho que presume que las actuaciones de las personas son legítimas, exentas de fraude o cualquier otro vicio, es decir, que los administradores deben obrar satisfaciendo totalmente las exigencias de la actividad de la sociedad, y de los negocios que ésta celebre y no solamente los aspectos formales que dicha actividad demande.

2.1.2. La lealtad es el actuar recto y positivo que le permite al administrador realizar cabal y satisfactoriamente el objeto social de la empresa, evitando que en situaciones en las que se presenta un conflicto de sus intereses se beneficie injustamente a expensas de la compañía o de sus socios.

Al respecto el artículo 23 de la Ley 222 de 1995, reitera el deber de lealtad y expresa que las actuaciones de los administradores deben adelantarse en interés de la sociedad, y de los asociados, resultando claro que si los intereses de los socios se apartan de los fines de la empresa, aquellos deben ceder a los de ésta.

2.1.3. La diligencia de un buen hombre de negocios hace relación a que las actuaciones de los administradores no sólo deben encontrarse acompañadas de la prudencia de un buen padre de

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO

0078

DE 2016

Hoja No. 29

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1585 del 18 de noviembre de 2015 mediante la cual se adoptó la medida de toma de posesión inmediata para liquidar los bienes, haberes y negocios de **INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.**

familia, sino que su diligencia debe ser la que tendría un profesional, un comerciante sobre sus propios asuntos, de manera que su actividad siempre debe ser oportuna y cuidadosa, verificando que la misma esté ajustada a la ley y los estatutos, lo que supone un mayor esfuerzo y una más alta exigencia para los administradores en la conducción de la empresa.

La diligencia del buen hombre de negocios, lleva implícitos deberes como el de informarse suficientemente antes de tomar decisiones, para lo cual el administrador debe asesorarse y adelantar las indagaciones necesarias, el de discutir sus decisiones especialmente en los órganos de administración colegiada, y, por supuesto, el deber de vigilancia respecto al desarrollo y cumplimiento de las directrices y decisiones adoptadas.

(...).

1. Tal como quedo claramente expuesto actuar con la "diligencia de un buen hombre de negocios" implica para el administrador (Representante legal y miembros de la junta directiva, entre otros) que en el ejercicio de sus funciones debe actuar con el cuidado que un profesional o comerciante pondría en sus propios asuntos, es decir, en el ejercicio de sus actuaciones, gestiones y decisiones debe poner el mayor interés y cuidado posible de manera que ninguna de las gestiones que adelante en nombre de la sociedad viole disposiciones de orden legal, estatutaria o sea contraria a las decisiones adoptadas por los órganos sociales.

No obstante que valorar la conducta dolosa o culposa de un administrador o establecer juicios de responsabilidad escapan a la competencia asignada a esta Entidad, la sociedad, los asociados o terceros en general están facultados para adelantar la acción de responsabilidad en contra del administrador que con su conducta le ha ocasionado daño a su patrimonio.

2.a). Cuando el Cit. 23 expresa que las actuaciones de los administradores "...se cumplirán en interés de la sociedad, teniendo en cuenta los intereses de sus asociados", lo hace, en primer lugar, porque en ejercicio del cargo todas las gestiones y actuaciones que adelanten los administradores deben privilegiar los intereses de la sociedad, así se observa no solo en los deberes que de manera general prevé el legislador en el citado artículo 23, sino las contempladas en la ley y/o en los estatutos, y no podría ser de otra manera pues tanto la normatividad societaria como el contrato de sociedad lo que persigue es el normal funcionamiento de la compañía y para ello se impone que sus administradores obren de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios, pues como lo ha anotado la doctrina la gestión de los administradores la desarrollan como gestores de negocios ajenos.

Sobre éste último aspecto, recordemos que los administradores cumplen un mandato conferido precisamente por los asociados, de ellos se espera que pongan al servicio de la sociedad sus conocimientos profesionales, técnicos o su experiencia para lograr el éxito de la empresa, en esa medida si la sociedad obtiene resultados positivos redundará en beneficio económico para los asociados, de donde precisamente puede afirmarse que el interés social está por encima de los individuales, de manera que cuando se contrapongan dos interés, es obligación del administradores de la sociedad privilegiar los sociales.

b). Desde el punto de vista del Ordenamiento Mercantil no existe un sistema para ponderar los intereses de la sociedad y/o de los asociados, corresponderá al administrador analizar si los intereses de los asociados se apartan del interés social caso en el cual debe privilegiar los intereses de la sociedad, actuar de manera diferente lo hace acreedor no solo a las sanciones por parte de la autoridad administrativa que supervisa al ente social sino sujeto a juicio de responsabilidad que la sociedad, los asociados o los terceros puedan adelantar en su contra, instancia en la que el Juez competente hará la valoración de la conducta dolosa o culposa del administrador y, por supuesto, reconocerá la indemnización a que hubiere lugar.

c). Retomando los conceptos anteriormente expuestos la ley es la que ha impuesto que los administradores ejerzan sus funciones con sujeción a los principios de lealtad y buena fe, así como actuar con la diligencia de un buen hombre de negocios, en interés de la sociedad y teniendo en cuenta los intereses de sus asociados, es decir, las gestiones y las actuaciones de los administradores deben estar orientadas por los principios rectores mencionados, luego privilegiar

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO

0078

DE 2016

Hoja No. 30

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1585 del 18 de noviembre de 2015 mediante la cual se adoptó la medida de toma de posesión inmediata para liquidar los bienes, haberes y negocios de INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.

los intereses de los socios o los propios sobre los de la sociedad es contrario a la ley pues del administrador se esperan actuaciones que favorezcan los intereses de la compañía que dirigen. "En este orden de ideas, los actos de los administradores deben ser cumplidos "con entera lealtad, con intención recta y positiva, para que así pueda realizarse cabal y satisfactoriamente la finalidad social y privada a que obedece su celebración". (Ospina Fernández Guillermo. Teoría General de los Actos o Negocios Jurídicos. Volumen 2. Editorial Temis - Bogotá, 1983. Pág. 332)"

En estos términos no es admisible el argumento del recurrente orientado a desvirtuar la causal prevista en el literal f) del artículo 114 del EOSF, pues la misma no exige la precalificación de una práctica insegura.

Así mismo, respecto de la causal contenida en el literal h) del artículo 114 del EOSF, respecto de la cual también estima que no se puede asegurar la existencia de inconsistencias en la información contable ni que aquella que es transmitida a la SFC no es confiable, observa este Despacho que el recurrente no aporta ninguna valoración o soporte documental que así lo constate. De manera que no basta con que se exponga un argumento en contrario para rebatir otro criterio que no se comparta.

De otra parte, en cuanto a los argumentos presentados en este punto del recurso en relación con las proformas a través de las cuales los miembros de la junta directiva emitían su voto, remitidas a éstos previamente diligenciadas por la gerente jurídica de la compañía y secretaria del citado órgano de administración, es de advertir que, tal como se expondrá en la presente Resolución, la información y documentación relacionada con los temas del orden del día sometidos a consideración de ese órgano durante el año 2015¹⁶, fue remitida de manera incompleta a los directores.

En este orden de ideas, de acuerdo con la evidencia que sobre el tema obra en el expediente de la presente actuación, a partir de la firma de la proforma por parte de los directores a la que se hizo referencia en la Resolución que se debate, no es posible inferir que éstos conocían la información relacionada con la totalidad de los puntos sometidos a su consideración en el orden del día, tal como lo asevera el recurrente sin aportar pruebas que den fe de ello.

Así las cosas, la falta de información requerida para la toma de decisiones, aunada al hecho de que los miembros de la junta directiva no formularon observaciones sobre el particular y a la imposibilidad de surtir un proceso de análisis, discusión y deliberación de los temas a través del mecanismo de voto previsto en el artículo 20 de la Ley 222 de 1995, llevaron a esta Superintendencia a establecer que la actuación de la junta se limitó a un aspecto meramente formal, consistente en la firma de la referida proforma en los términos previamente sugeridos por la Gerente Jurídica en la misma proforma.

8.4. De los hechos que sustentan la medida de toma de posesión para liquidar respecto de la actividad de la Compañía.

Señaladas las anteriores consideraciones y sin perder de vista el escenario que conllevó a esta Superintendencia a adoptar la toma de posesión para liquidar los bienes, haberes y negocios de Internacional C.F., hoy en liquidación, se procederá a analizar cada uno de los argumentos expuestos por el recurrente así:

8.4.1. En relación con el acápite sobre "las supuestas prácticas de normalización artificial de cartera."

¹⁶ Entre enero y agosto de 2015.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO

0078

DE 2016

Hoja No. 31

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1585 del 18 de noviembre de 2015 mediante la cual se adoptó la medida de toma de posesión inmediata para liquidar los bienes, haberes y negocios de **INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.**

Acerca de los argumentos aducidos por el recurrente relativos a la práctica denominada "Caja Cheques", esta Superintendencia no se aparta de la precisión legal por él expresada, en el sentido de que la entrega de un cheque es un medio idóneo de pago según lo previsto en la regulación comercial. De manera que el cuestionamiento de la SFC no se ocupó de rebatir tal precisión normativa.

Como bien se indica en la Resolución, existía una situación adicional que acompañaba la entrega de los cheques. Es así como, según lo descrito por varios representantes legales de la Compañía y otros funcionarios y lo probado en el Informe de Inspección, como más adelante se indicará, según este procedimiento los cheques recibidos para el pago de obligaciones crediticias, no eran presentados para su pago, permaneciendo en caja por varios meses, mientras que en las cuentas de los clientes- deudores de la entidad vigilada- se reconocían de manera inmediata, como si realmente hubieran sido efectivos desde el día de la recepción del cheque y pagada la cuota de la obligación crediticia correspondiente.

Dentro de este contexto surge la censura de esta Superintendencia, dado que como se expuso en la Resolución impugnada con esa práctica *"se facilitaba que la cartera aparentara estar al día, sus indicadores mostraran una situación de menor riesgo por no revelarse vencida, generando adicionalmente un impacto en el estado de resultados mediante la permanente causación de intereses no recibidos realmente y la reducción del gasto mediante unas menores provisiones de la compañía"*.

Ahora bien, en relación con el argumento planteado por el recurrente, se debe resaltar que los cheques se enmarcan dentro de la modalidad de títulos valores de contenido crediticio, los cuales, se caracterizan por incorporar una suma de dinero a través de una orden de pago, que llevarán implícita una condición resolutoria si el instrumento es rechazado o no sea descargado de cualquier manera.

En efecto, como lo prevé el mismo artículo 882 del Código de Comercio, en el aparte no resaltado por el recurrente el cheque valdrá como pago *"pero llevará implícita la condición resolutoria de pago, en caso de que el instrumento sea rechazado o no sea descargado de cualquier manera."*

Significa ese aparte normativo, como bien lo expresa el Consejo de Estado, que *"el pago que se realice con un instrumento de esta naturaleza es eficaz mientras el título valor entregado cumpla con el fin que busca, esto es, se convierta en dinero y libere la prestación. Porque de ocurrir la condición resolutoria -el título es rechazado o no es descargado de cualquier manera- se reputa no haberse dado nunca el pago."*¹⁷ (Negrilla extra textual).

Lo que genera que el acreedor está obligado a hacer lo conducente para obtener la realización del título por él recibido o de procurar su *"buen fin"*, de suerte que como lo afirmó la Corte Suprema de Justicia, si esto tiene lugar, *"el pago adquiere plena firmeza y se extingue la acreencia original por virtud de haberse hecho efectiva la incorporada en el instrumento, mientras que si las cosas no suceden así y éste es rechazado por los suscriptores responsables de honrarlo o no es descargado de cualquiera otra manera susceptible de desinteresar definitivamente al acreedor, la eficacia predicable de aquello que por mandato de la ley se tuvo por "pago bajo condición resolutoria" desaparece (...)"*¹⁸

¹⁷ Colombia, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero Ponente: Ricardo Hoyos Duque, Bogotá, D.C., 22 de noviembre de 2001. Radicación Número: 70001-23-31-000-1996-5720-01(14852).

¹⁸ Colombia, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 30 de julio de 92. Exp. 2528. M.P. Carlos Esteban Jaramillo Schloss.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO

0078

DE 2016

Hoja No. 32

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1585 del 18 de noviembre de 2015 mediante la cual se adoptó la medida de toma de posesión inmediata para liquidar los bienes, haberes y negocios de INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.

Importa recordar que de acuerdo con el artículo 1626 del Código Civil en virtud del cual se establece que, *"El pago efectivo es la prestación de lo que se debe"* y con el artículo 1627 ibídem que señala *"el pago se hará bajo todos los respectos de conformidad al tenor de la obligación"*, es irrefutable que al pago de una obligación a través de un cheque le es inherente el agotamiento de un procedimiento operativo como es el canje. Eso quiere decir que el acreedor deberá agotar los mecanismos para hacerlo efectivo, inclusive ejerciendo las acciones legales con que cuenta, ante su impago.

Esto en el claro entendido que la prestación a cargo del deudor es dineraria, de manera que, siguiendo la línea jurisprudencial expuesta en esta materia, solamente entregando la cantidad de signos monetarios que, con referencia a determinada unidad de cuenta, constituyan el objeto de la prestación, el deudor quedará liberado de la obligación. O, para expresarlo con una fórmula propia del derecho de obligaciones, el dinero se encontrará no solo *"in solutione"*, sino también *"in obligatione"*.¹⁹

Ahora bien, resulta contrario a la pretensión natural y obvia que tiene un Establecimiento de Crédito en su calidad de comerciante, el hecho de mantener en su poder, inclusive más allá del término de caducidad o prescripción de la acción cambiaria²⁰, los títulos valores recibidos en pago, sin procurar hacerlos efectivos, bajo la afirmación de que simplemente se tomó *"un tiempo para la presentación de los cheques"*.

Así las cosas, según la exposición que efectúa el recurrente pareciera que el plazo de caducidad o prescripción cambiaria, definido en la ley y sobre el cual, por esa obvia razón, no es necesario una instrucción de este organismo, era tenido en cuenta, no como aquella fecha límite de que disponía para lograr el cobro ejecutivo del cheque, sino como aquella fecha que debía esperar para dejar vencer ese plazo.

¹⁹ Colombia, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de noviembre 18 de 1991. MP. Héctor Marín Naranjo.

²⁰ Artículo 790. Prescripción de las acciones cambiarias derivadas del cheque. *Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: Las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque.*

Nota: el inciso 3° del artículo 882 del Código de Comercio, establece que si el acreedor de una obligación que ha sido pagada mediante la entrega de letras, cheques, pagarés y demás títulos-valores de contenido crediticio que lleguen a ser rechazados o no sea descargados "de cualquier manera", deja caducar o prescribir el instrumento, la obligación originaria o fundamental se extinguirá así mismo; pero que no obstante, tendrá acción contra quien se haya enriquecido sin causa a consecuencia de la caducidad o prescripción. Acción que prescribirá en un año. Esta acción se denomina acción de enriquecimiento sin causa.

Al respecto la Corte Constitucional señaló: *"la Corte debe precisar que las acciones a las que se refieren respectivamente los artículos 780 a 793 y 882-inciso 3° del Código de Comercio, tienen un alcance diferente y se formulan en momentos procesales igualmente diferentes, a saber, i) en el caso de la acción cambiaria que se tramita mediante un proceso de condena (art. 793 C.Co.) es claro que ésta tiene como fundamento la existencia de un instrumento crediticio, esto es, el derecho literal y autónomo en él contenido y hace relación con la preservación de la seguridad en el tráfico jurídico; y ii) la acción de enriquecimiento sin justa causa (art. 882-inciso 3° C. Co.), cuya procedencia es subsidiaria y se tramita mediante un proceso declarativo, tiene como fundamento no la exigibilidad de un título valor sino el empobrecimiento que se produce sin justa causa en el patrimonio del acreedor por el hecho de la extinción de la obligación civil originaria al dejarse prescribir o caducar el título valor con el que se pretendió efectuar, sin que resultara eficaz, el pago de la misma.*

Cabe precisar que para interponer la acción de enriquecimiento sin causa, el acreedor deberá probar la configuración de los elementos propios de dicha figura jurídica, y no bastará con el simple hecho de que el título valor se halle caducado o prescrito, dado que ésta es una de las condiciones exigidas por la Ley pero no es la única que determina la procedencia de la acción aludida." Colombia, Corte Constitucional, Sentencia C-471 de 2006 M.P. Álvaro Tafur Galvis.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO

0078

DE 2016

Hoja No. 33

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1585 del 18 de noviembre de 2015 mediante la cual se adoptó la medida de toma de posesión inmediata para liquidar los bienes, haberes y negocios de **INTERNACIONAL COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A.**

No puede dejarse de lado que la pretensión principal de un establecimiento de crédito cuando otorga un crédito, es la de lograr su recaudo, en aras de la protección de los recursos del público y de garantizar su propia estabilidad. No está de más señalar que las fallas de revelación derivadas de esta situación, tal como se resaltó en la Resolución, impidieron que esta Superintendencia conociera el estado riesgo de crédito de la Compañía conocimiento que resultaba imprescindible para la ejecución y cumplimiento de las funciones asignadas a este Organismo.

Debe agregarse que, resultó siendo palmario el conocimiento previo que tenía la Compañía de Financiamiento para que los mismos no fueran presentados para su pago, conforme se desprendió de las declaraciones de la Gerente de Cartera y Cobranzas, del entonces Gerente de Contabilidad, del Coordinador de Contabilidad, del Vicepresidente Ejecutivo, del entonces Presidente de la Compañía, del Gerente de Operaciones, de la Directora Comercial, del Gerente de Riesgos y de la Auditora General, con lo que se descarta la acepción utilizada por el recurrente en el sentido de haber entendido que la SFC asumió como cierta lo que constituye una "mera posibilidad", cuando los empleados de Internacional C.F. S.A. así como constancias de comités, así la acreditaron.

No merece menor importancia considerar adicionalmente que los cheques que tuvieron una antigüedad significativa, permitieron entender a la SFC que la vocación de cobro no era el propósito de la recepción de tales títulos valores, dado que la posibilidad de ejercer la acción cambiaria había caducado en tales situaciones, no tratándose de casos aislados como se pretende manifestar por el recurrente, como se aprecia en el Informe de Inspección.

Se debe clarificar sobre este particular que la SFC no argumentó que no existieran fondos para atender el pago de los cheques, como lo expone el recurrente, sino que, tal y como se evidencio de las declaraciones a las que se hace referencia en la Resolución 1585 de 2015, existieron acuerdos verbales con los clientes en virtud de los cuales, se entregaban cheques para aplicar al pago de obligaciones, que no eran presentados por la entidad para su cobro.

Finalmente, frente al argumento relacionado con la inmaterialidad de la situación, la resolución impugnada se ocupó de señalar que "....se advirtió que para el mes enero de 2015 éstos reflejaban un saldo de \$5,362 millones aproximadamente, y para junio del mismo año, su saldo era cerca de \$3,894 millones, corroborándose así, que durante los diferentes meses se aplicaba dicha práctica." (Subraya y negrilla extra textual)

También la Resolución indicó sus efectos: *"Con esta dinámica se facilitaba que la cartera aparentara estar al día, sus indicadores mostraran una situación de menor riesgo por no revelarse vencida, generando adicionalmente un impacto en el estado de resultados mediante la permanente causación de intereses no recibidos realmente y la reducción del gasto mediante unas menores provisiones de la compañía."*

Sobre este asunto el capítulo II del Informe de Inspección puso de presente que éste procedimiento era la expresión de una práctica contable artificiosa que alteró la información sobre la calidad de la cartera de los deudores, sobre su provisionamiento y, como se mencionó, sobre las utilidades de la Entidad, *".... Además, constituye una práctica riesgosa pues la calificación y provisionamiento del deudor se aparta de sus elementos constitutivos como son los procesos de determinación y análisis de la capacidad de pago y la condición de riesgo de los deudores."*

En resumen, no resultan inateriales los hallazgos sobre este asunto, más aún cuando se afectó la calidad e integridad de la información financiera de la Compañía de

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO

0078

DE 2016

Hoja No. 34

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1585 del 18 de noviembre de 2015 mediante la cual se adoptó la medida de toma de posesión inmediata para liquidar los bienes, haberes y negocios de INTERNACIONAL COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A.

Financiamiento a partir de la distorsión de las condiciones de las operaciones activas de crédito de sus clientes, pues de esta manera se revelaba la cartera en situación de normalidad cuando los deudores tenían saldos a cargo vencidos. Con ello además se subestimó la calificación y, por ende, el provisionamiento de créditos, así como la debida revelación en los estados financieros, presentando una mayor utilidad.

En estos términos no resultan de recibo los argumentos del recurrente, en virtud de los cuales pretende demeritar la concepción de la práctica denominada “Caja Cheques” como un mecanismo de normalización artificial de cartera. Debe agregarse que la pretensión de la Entidad fue mostrar una situación financiera distinta a la real, según se ha descrito, en relación con el efecto generado por la normalización del estado de los deudores en forma artificial, así como por la falta de reconocimiento de gastos y valoración de los activos por cuenta de saldos, asuntos estos que una vez conocidos, develaron la existencia de graves inconsistencias en la información que suministró a este Organismo, que le impidieron conocer adecuadamente la situación real de la Entidad.

Habría que mencionar, en relación con las cuentas por cobrar, que el impugnante en uno de los apartes del recurso señaló abiertamente que no se trataba de un “tema de manipulación de información, sino más que todo de un tema administrativo de gestión de cobro por parte de la Compañía en la que a clientes con buenos hábitos de pago se le extendían cuentas de cobro con el fin de que no entrarán en una situación de mora por asuntos que no obedecían a una verdadera dificultad en el pago de sus obligaciones”, (negrilla extratextual), lo que corrobora que con esa práctica se buscaba ocultar la situación de riesgo de crédito del deudor, asunto que tuvo un impacto en la revelación contable de la cartera, como se expuso en la Resolución impugnada.

Valga mencionar que tampoco se trataba de deudores “con un buenos hábitos de pago”, pues como se demuestra en el Capítulo II del Informe de Inspección, en algunos casos no se conocía si existía o no un hábito de pago, pues con las cuentas de cobro y los caja cheques se “cubrían” las cuotas por pagar, para revelar que la obligación se encontraba al día.

También se estableció que las cuentas de cobro, en algunos casos, se enjugaban con el otorgamiento de sucesivos créditos, como se muestra a continuación

Caso 1:
(...)²¹

Crédito No.	Aprobación	Observación
15595	Crédito otorgado en enero de 2013 por \$3.000 millones a un plazo de 24 meses, con pago de interés trimestral y pagos de capital semestrales.	En junio 25 de 2013 con una operación de monetización abonó a capital \$2.000 millones y canceló la primera cuota del crédito por \$154,9 cuyo pago se encontraba programado para el 5 de abril de 2013.
16107	Crédito otorgado en julio de 2013 por \$150 millones a un plazo de 12 meses, período de gracia de 6 meses y amortización a capital e intereses trimestral	No presentó registro de abonos a la deuda pues la primera cuota de intereses se encontraba programada para el 5 de octubre de 2013 y su saldo se recogió con la operación No.16150 en agosto de 2013.
16150	Crédito otorgado en agosto de 2013 por \$3.000 millones a un plazo de 24 meses, con pago de interés mensual y capital semestral.	Esta operación recogió el saldo de la obligación No.15595 por \$760,1 millones y el saldo de la obligación No.16107 por \$143,1 millones. El saldo se transfirió a la cuenta de ahorros del deudor por \$2.096,6 millones.

²¹ En el Capítulo II del Informe de Inspección No. 2015100740-015-000 se detallan los deudores que fueron objeto de revisión. Dado el carácter de la información perteneciente a los clientes de la Entidad, su identificación se omite en la transcripción efectuada.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 0078 DE 2016 Hoja No. 35

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1585 del 18 de noviembre de 2015 mediante la cual se adoptó la medida de toma de posesión inmediata para liquidar los bienes, haberes y negocios de INTERNACIONAL COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A.

Crédito No.	Aprobación	Observación
16694	Operación otorgada en Abril de 2014 por \$750 millones a un plazo de 24 meses, con pago de intereses mensuales y pago de capital semestral.	Este crédito se destinó a cubrir el pago de la primera cuota de la obligación No 16150 por \$750 millones
111101 20014	Operación otorgada en septiembre de 2014 por \$3.750 millones a un plazo de 36 meses, con pagos semestrales de intereses y capital.	Este crédito se destinó a cubrir el saldo de las obligaciones de cartera ordinaria No. 16150 y No. 16694, por valor de \$3.000 millones. Nota: No se evidenció el pago de las cuotas pactadas para los meses de marzo y septiembre de 2015.

Como se aprecia en el caso No. 1, la exposición del deudor se incrementó con el otorgamiento de nuevos créditos cuyo destino fue cubrir la cancelación de obligaciones previas, y la asignación de nuevos recursos, a pesar de no tener un hábito de pago regular que permitiese ver la real condición crediticia. Este cliente permaneció al día y calificado en categoría "A".

En ese segundo evento y tercer evento, sucede algo similar al anterior, con el otorgamiento de nuevos créditos se recogían los anteriores, revelando las obligaciones al día, como si el deudor hubiese efectuado el pago efectivo de las cuotas, como lo advierte el Capítulo II del informe de Inspección:

Caso 2:
(...)

Crédito No.	Aprobación	Observación
15868	Operación otorgada en mayo de 2013 por \$400 millones con pazo de 24 meses.	De la revisión realizada a los pagos de las cuotas del crédito se observó que en mayo de 2014 se atendieron el pago de dos cuotas de este crédito por \$41,3 millones con los recursos provenientes del crédito No. 19027 los cuales fueron abonados en la cuenta de ahorros del deudor por valor de \$117,7 millones.
16002	Operación otorgada en junio de 2013 por \$600 millones a un plazo de 24 meses y amortización mensual de capital e intereses	De la revisión selectiva realizada a los pagos de las cuotas del crédito de enero a junio de 2014 se observó que: * Con el crédito No. 16532 de febrero se cancelaron las cuotas de enero y febrero. * En mayo se aplicaron \$61,7 millones del crédito No. 19027 para cubrir el valor de las cuotas de abril y mayo. * En junio se canceló la obligación con el crédito No. 1111030017
16532	Operación otorgada en marzo de 2014 por \$99,5 millones a un plazo de 24 meses.	Los recursos de esta operación se destinaron a cubrir el pago de cuotas de los créditos No. 15868 por \$39,8 millones y No. 16002 por \$59,6 millones.
19027	Operación otorgada en mayo de 2014 por \$117,7 millones a un plazo de 24 meses. En junio de 2014 se programó el pago de una cuota de \$5,9 millones y para el 28 de julio de 2014 se programó la cancelación de la deuda por valor de \$115,3 millones.	En abril de 2014 este crédito se canceló con el otorgamiento del nuevo crédito No. 1111030017.
1111030017	Operación otorgada en julio de 2014 por \$800,4 millones a un plazo de 24 meses.	Con esta operación se recogieron los saldos de los créditos (Capital e intereses) No. 15868, 16002, 16532 y 19027. De la revisión de algunos de los pagos de las cuotas del crédito, se observó que en el mes 03/2015 las cuotas correspondientes a los meses de 11/2014 y 12/2014 y de 1/2015 y 2/2015 se registraron como Cuentas por Cobrar por valor de \$167,8, valor que incluye la amortización a capital, intereses corrientes y generación de intereses de mora. Con este registro la Compañía revela al día la obligación del deudor como si hubiese efectuado el pago efectivo de las cuotas. Durante los meses de 03/2015, 04/2015 y 05/2015 el saldo del crédito permaneció en \$596,6 millones sin evidenciarse abonos a capital; la exposición fue cancelada en 05/2015 con el otorgamiento del nuevo crédito No. 19184 por valor de \$897,6 millones. La exposición del

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO -

0078

DE 2016

Hoja No. 36

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1585 del 18 de noviembre de 2015 mediante la cual se adoptó la medida de toma de posesión inmediata para liquidar los bienes, haberes y negocios de INTERNACIONAL COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A.

Crédito No.	Aprobación	Observación
		crédito cancelado era de \$696,9 millones y este valor incluye capital e intereses corrientes y de mora. En 10/2014 atendió la obligación con el cheque No. 57923 de Bancolombia por \$83 millones, título que no se hizo efectivo y fue recogido con el crédito No. 19184.
19184	Operación otorgada en junio de 2015 por \$897,6 millones para pagar en una sola cuota en diciembre de 2015 (Capital e intereses).	

Caso No. 3:

(...)²²

Crédito No.	Aprobación	Observación
15656	Operación otorgada en febrero de 2013 por \$1.065 millones a un plazo de 24 meses.	Con este crédito se recogieron los saldos de los créditos de la sociedad CI Corporación Petrolera SA. De la revisión de algunos de los pagos de las cuotas del crédito se observaron instalamentos que fueron atendidos con nuevas operaciones de crédito. En marzo de 2014 se hizo una aplicación al crédito por valor de \$90,2 millones con recursos provenientes del crédito No. 16653 otorgado en abril de 2014. En abril de 2014 se registró una aplicación al crédito por \$45,8 millones con recursos provenientes del crédito No. 16731 otorgado en mayo de 2014. En mayo de 2015 se hizo una aplicación al crédito por \$46,5 millones con recursos provenientes del crédito No. 19025 otorgado en abril de 2014.
15747	Operación otorgada en marzo de 2013 por \$434 millones a un plazo de 12 meses, con amortización mensual de capital e intereses.	De la revisión de algunos de los pagos de las cuotas del crédito se observó que en marzo de 2014 se realizó una aplicación de \$76,8 millones al crédito con recursos provenientes del crédito No. 16653 otorgado en febrero de 2014. Este crédito se recogió con la obligación No. 16653. Cancelando la obligación que registraba un saldo a capital de \$76,8 millones
16004	Operación otorgada en junio de 2013 por \$142 millones a un plazo de 24 meses	Se revisaron selectivamente los pagos de las cuotas de los meses de enero a septiembre de 2014 observando que: * En marzo de 2014 se aplicaron \$11,2 millones del crédito No. 16653 para pago de cuotas de febrero y marzo de esta obligación. * En abril de 2014 se aplicaron \$5,7 millones por débito de la cuenta de ahorros, pero estos recursos correspondían al otorgamiento del crédito No. 16731 de abril de 2014. * En mayo de 2014 se aplicaron \$5,8 millones por débito de la cuenta de ahorros, pero estos recursos correspondían al otorgamiento del crédito No. 19025 de mayo de 2014.

²² En el Capítulo II del Informe de Inspección No. 2015100740-015-000 se detallan los deudores que fueron objeto de revisión. Dado el carácter de la información perteneciente a los clientes de la Entidad, su identificación se omite en la transcripción efectuada.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO

0078

DE 2016

Hoja No. 37

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1585 del 18 de noviembre de 2015 mediante la cual se adoptó la medida de toma de posesión inmediata para liquidar los bienes, haberes y negocios de INTERNACIONAL COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A.

Crédito No.	Aprobación	Observación
16396	Operación otorgada en diciembre de 2013 por \$400 millones a un plazo de 12 meses con amortización mensual de capital e intereses. Internacional CF solicitó a Findeter el redescuento de la totalidad de este crédito.	Se revisaron selectivamente los pagos de las cuotas de los meses de enero a junio de 2014 observando que: * En marzo, del crédito No. 16653 otorgado en marzo de 2014 se aplicaron \$62,5 millones para cubrir las cuotas de los meses de enero y febrero. * En abril, del crédito No. 16731 otorgado en mayo de 2014 se aplicaron del \$32 millones para cubrir la cuota de marzo. * En mayo, del crédito No. 19025 otorgado en este mes se aplicaron \$32,5 millones para cubrir la cuota de abril. * En julio, del crédito No. 11110030002A otorgado en este mes se recogió el saldo de la obligación por \$251,5 millones, valor que incluía capital e intereses.
16653	Operación otorgada en abril de 2014 por \$241 millones a un plazo de 10 años con amortización de intereses mensual y amortización de capital trimestral.	Este crédito se destinó a la aplicación de los créditos No. 15656, 15747, 16004 y 16396. Se solicitaron los soportes del pago de las cuotas de los meses de mayo y junio de 2014, así como de la cancelación total y se observó que el deudor solamente realizó el pago de la cuota del mes de mayo y la cancelación total (Capital e intereses) se efectuó con el otorgamiento del crédito No. 11110030002A en julio de 2014.
16731	Operación otorgada en mayo de 2014 por \$83,9 millones a un plazo de 12 meses con amortización de interés mensual y amortización de capital trimestral.	Este crédito se destinó a cubrir la aplicación de cuotas de los créditos No. 15656 y 16396. Se solicitaron los soportes de pago de las cuotas de los meses de junio y julio de 2014, observando que el deudor solamente realizó en pago de una cuota, la operación se reestructuró y el saldo se recogió con el crédito No. 11110030002A.
11110030002 A	Operación de Redescuento Bancoldex otorgada en julio de 2014 por \$1.096,6 millones a un plazo de 60 meses y <u>un periodo de gracia para capital</u>	Los recursos de esta operación se destinaron a reestructurar las obligaciones No 15656, 16396, 16653, 16731 y 19025. Se solicitaron los soportes de los pagos de las cuotas de intereses correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de 2014 pero se observó que el deudor no efectuó pago por estos conceptos.
9916004	Operación otorgada en octubre de 2014 por \$1.228,2 millones a un plazo de 60 meses y <u>un periodo de gracia de 6 meses a capital e intereses.</u>	Esta operación recogió el saldo de los créditos No. 16004 y 11110030002A. Como esta operación fue cancelada en julio de 2015 con el crédito No 19201 se solicitaron los soportes de los pagos de las cuotas correspondientes a los meses de mayo y junio, pero según información suministrada por Internacional CF, estas cuotas no fueron canceladas y el saldo total se recogió con la nueva operación.
19201	Operación otorgada en julio de 2015 por \$1.428,6 millones a una sola cuota (capital e intereses) que vence en enero de 2016.	Esta operación recogió el saldo del crédito No. 9916004.
19201A	En agosto de 2015 esta operación le dio alcance al crédito No. 19201 respecto del valor otorgado, pues el mismo se incrementó a \$1.529,7 millones, manteniendo el pago total en una sola cuota en febrero de 2016.	Esta operación recogió el saldo del crédito No. 19201 y sigue correspondiendo a un crédito de redescuento con Bancoldex.

"La exposición de este deudor ha presentado un comportamiento creciente desde la primera operación otorgada en febrero de 2013 por \$1.065 millones. Al corte de septiembre de 2015 la cartera adeudada a Internacional CF era de \$1.529,7 millones; producto del otorgamiento de nuevas operaciones crediticias destinadas a cubrir los instalamentos no pagados por el deudor y para cancelar los saldos de los mismos créditos. Los registros contables indican que este deudor permaneció al día y calificado en categoría "A".

Caso No. 4:

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO

0078

DE 2016

Hoja No. 38

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1585 del 18 de noviembre de 2015 mediante la cual se adoptó la medida de toma de posesión inmediata para liquidar los bienes, haberes y negocios de INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.

(...)²³

Crédito	Aprobación	Observación
11110120003	Operación otorgada en junio de 2014 por \$3.000 millones a un plazo de 36 meses y amortización mensual de capital e intereses.	Recursos redescontados con Bancoldex. Se solicitaron los soportes de pago de las cuotas correspondientes a los meses de abril a septiembre de 2015, observando que en el mes de septiembre con el crédito No. 19289 se recogió el cheque en caja # 58743 de Bancolombia por \$266,4 millones que se había girado para cubrir las cuotas de los meses de mayo y junio, así como las cuotas de julio y agosto por \$186,4 millones que habían sido registradas como cuentas por cobrar.
19110	Operación otorgada en febrero de 2015 por \$460 millones a un plazo de 36 meses y amortización mensual de capital e intereses	Recursos redescontados con Bancoldex. Se solicitaron los soportes de pago de las cuotas correspondientes a los meses de marzo a septiembre de 2015 observando que en el mes de septiembre con el crédito No. 19289 se normalizaron las cuotas de julio y agosto que habían sido registradas como cuentas por cobrar por \$38 millones.
19155	Operación otorgada en abril de 2015 por \$244 millones a un plazo de 36 meses y amortización de capital e intereses mensual.	Se solicitaron los soportes de pago de los meses de mayo a septiembre de 2015 observando que en el mes de septiembre con el crédito No. 19289 se normalizaron las cuotas de julio y agosto que habían sido registradas como cuentas por cobrar por \$18 millones.

Si bien al cierre de septiembre de 2015 la exposición de capital del deudor presentó una disminución de \$360 millones frente al primer crédito otorgado en junio de 2014, la misma fue producto de la aprobación del crédito No.19289 cuyo desembolso se destinó a la normalización de las cuotas no atendidas por el deudor que correspondían a las operaciones No. 11110120003, 19110 y 19155. En los registros de la Entidad el deudor permaneció como al día y calificado en categoría "AA".

En este último caso, se otorgaron en total 10 (diez) créditos para cancelar las obligaciones, como una forma de reestructurar las obligaciones, y el deudor siempre se mantuvo en categoría de riesgo "AA", en suma, conforme se señaló en la Resolución impugnada, el efecto concreto de dicha práctica fue el de revelar un indicador de calidad de la cartera más bajo que el real, hacer ver al mercado una calificación de los deudores involucrados menor a la de su verdadera condición de riesgo, (contrario a lo que afirmó el recurrente no se trataba de clientes "con buen hábito de pago"), así como constituir un menor valor de provisiones y, en consecuencia, presentar utilidades superiores a las efectivamente generadas.

Adicionalmente, en virtud de estas prácticas –caja cheque y cuentas por cobrar-, conforme se expuso en el Capítulo II del Informe de Inspección, existía un defecto de provisión de \$3.415 millones, que representaba el 19.75% de las provisiones constituidas por la Entidad sobre el saldo de cartera a septiembre de 2015, por tanto un menor nivel de utilidad.

Sin considerar los ajustes que durante el proceso de inspección realizó la Entidad en relación con sus estados financieros, y teniendo en cuenta solamente el impacto de provisión antes mencionado, este valor de provisión adicional habría generado pérdidas para la Entidad, de hecho habría absorbido las ganancias obtenidas en lo corrido del año 2015. Entonces, no se trataba de un cheque de más de 699 días como lo quiere exponer el recurrente, se trataba de prácticas que revelaban una realidad distinta en materia contable, que no permitieron conocer la situación de la Entidad.

²³ En el Capítulo II del Informe de Inspección No. 2015100740-015-000 se detallan los deudores que fueron objeto de revisión. Dado el carácter de la información perteneciente a los clientes de la Entidad, su identificación se omite en la transcripción efectuada.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO

0078

DE 2016

Hoja No. 39

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1585 del 18 de noviembre de 2015 mediante la cual se adoptó la medida de toma de posesión inmediata para liquidar los bienes, haberes y negocios de INTERNACIONAL COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A.

Conforme la anterior exposición, se tiene que los argumentos del recurrente no tienen la potencialidad de desvirtuar lo expuesto en la Resolución impugnada, sobre este particular.

8.4.2. Sobre los argumentos expuestos por el recurrente en relación con las operaciones con vinculados y los excesos en los límites individuales de crédito.

Teniendo en cuenta que el recurrente hace referencia en este aparte, fundamentalmente a, (i) la operación con vinculados y los excesos en los límites individuales de crédito, específicamente a los criterios utilizados para la acumulación, (ii) la relación del Dr. Sergio Rodríguez Cortés con las sociedades deudoras y (iii) sobre la calificación de la cartera de dichas sociedades, entre otros, se procederá a la evaluación de cada uno de estos asuntos, de la siguiente manera:

8.4.2.1 De la operación con vinculados y los excesos en los límites individuales de crédito, específicamente los criterios utilizados para la acumulación.

En relación con este asunto proceden algunas consideraciones previas que resultan pertinentes para poner en contexto la relevancia de los hechos expuestos en la Resolución recurrida bajo el numeral 7.1.2.

En 1982 el Gobierno Nacional les recordó a los accionistas y administradores de las instituciones financieras que si bien dichas instituciones constituyen una garantía indispensable para la libertad de empresa, *"todo derecho debía ejercerse con el espíritu de servir los intereses de la sociedad, la propiedad además debía cumplir una función social; y el orden económico y social requería que éstas instituciones financieras gozasen de la confianza de la opinión pública."*²⁴

Esa declaración tuvo lugar en el marco en una crisis de confianza pública debido a la ocurrencia de prácticas, como el otorgamiento de créditos por parte de administradores de instituciones financieras a sus accionistas por encima de los límites legales. Desde ese entonces, además de ser considerada como una práctica lesiva a los bienes jurídicos que tutela esta Superintendencia, fue contemplada como una conducta punible.²⁵

Debe mencionarse además que la Corte Constitucional ha precisado que aun cuando el desconocimiento a las normas sobre *"...cupos individuales de crédito (...) en unos casos puede implicar simplemente una responsabilidad administrativa, al paso que en otros puede acarrear también responsabilidad penal por la comisión del delito de "operaciones no autorizadas con accionistas o asociados", lo cierto es que en cualquier evento la violación aun mínima de las normas que regulan los cupos individuales de crédito compromete gravemente la confianza pública en el manejo de los negocios financieros y produce una concentración del crédito contraria a los postulados superiores."*²⁶ (Negrilla extra textual)

²⁴ Decreto 2919 de 1982. Por medio del cual el Gobierno Nacional declaró el estado de emergencia económica.

²⁵ Artículo 315 Código Penal. *Operaciones no autorizadas con accionistas o asociados. El director, administrador, representante legal o funcionarios de las entidades sometidas al control y vigilancia de las Superintendencias Bancaria o de Economía Solidaria, que otorgue créditos o efectúe descuentos en forma directa o por interpuesta persona, a los accionistas o asociados de la propia entidad, por encima de las autorizaciones legales, incurrirá en prisión de dos (2) a seis (6) años y multa hasta de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La misma pena se aplicará a los accionistas o asociados beneficiarios de la operación respectiva."*

²⁶ Colombia, Corte Constitucional, Sentencia C-1062-03, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO

0078

DE 2016

Hoja No. 40

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1585 del 18 de noviembre de 2015 mediante la cual se adoptó la medida de toma de posesión inmediata para liquidar los bienes, haberes y negocios de INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.

Señalado lo anterior, y teniendo en cuenta la gravedad de la conducta que reprochó esta Superintendencia en la Resolución recurrida, resulta pertinente indicar que con el fin de develar la estructuración de la operación resulta obligado para el ente de control, un examen de todas las correlaciones existentes entre administradores, accionistas y beneficiarios de los créditos que deben ser evaluados en conjunto, tal como ocurrió en la exposición de hechos efectuada en la Resolución 1585, bajo el numeral denominado "*de las operaciones con vinculados y exceso en los límites individuales*".

En esa exposición de hechos se da cuenta del vínculo que el Dr. Sergio Cortés Rodríguez, -Presidente (E) al momento de la toma de posesión, tenía con personas jurídicas y naturales que resultaron beneficiadas de créditos cuyos montos superaron los límites legales permitidos, y del vínculo de uno de los accionistas de la Compañía, Sr. Alejandro Rodríguez Roquette, con estas personas.

Ahora frente al argumento del recurrente en el sentido de indicar que el Sr. Alejandro Rodríguez Roquette, solamente era propietario de una acción y por ende era irrelevante la incidencia que pudiera tener en la toma de decisiones, esta Superintendencia considera que, con independencia de la participación accionaria de este socio o de cualquier otro, la Compañía se encontraba obligada a acatar las disposiciones que regulan los cupos individuales de crédito.

Adicionalmente no puede perderse de vista que el señor José Alejandro Rodríguez Roquette dada su relación de consanguinidad en primer grado con quien ahora interpone el recurso que nos ocupa, Dr. Cándido Rodríguez Losada²⁷, Presidente de la Compañía entre el 9 de agosto de 2010 y octubre de 2015, podía incidir en las decisiones de otorgamiento e incremento de los créditos a cargo de esas sociedades.

Todas estas circunstancias guardaban conexidad entre sí en la medida en que mostraban las relaciones entre administradores y un accionista de la Compañía, que no fueron puestas de presente por parte de la SFC para dar una simple apariencia de gravedad, como lo expone el recurrente, sino que correspondían a una situación con esa connotación.

De otra parte, contrario a lo que afirma el recurrente cuando señala que no se trataba de operaciones con vinculados y por ende no requerían aprobación por parte de la Junta Directiva en los términos del artículo 122 del EOSF, como se observa de la lectura de referido artículo²⁸, éstas relaciones sí exigían a la Vigilada, la aprobación de tales operaciones de crédito mediante voto unánime de los miembros de la Junta Directiva en la medida en que ellas se celebraron con un administrador, Dr. Sergio Cortés Rodríguez, con su conyugue²⁹ y con el hijo de un administrador y accionista de la compañía. No puede perderse de vista que el Dr. Cándido Rodríguez Losada era además de administrador, accionista de Internacional C.F S.A.

Ahora, respecto de los cupos individuales y los criterios de acumulación y sus apreciaciones acerca de que no podían acumularse las operaciones activas de crédito de la Sociedad Importadora Colombo Española S.A.S y del Sr. José Cayetano Morao con

²⁷ El Sr. Alejandro Rodríguez Roquette es hijo del Dr. Cándido Rodríguez Losada.

²⁸ En el aparte que señala: "*Las operaciones autorizadas que determine el Gobierno Nacional y que celebren las entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria, con (...), con sus administradores, así como las que celebren con los cónyuges y parientes de sus socios y administradores dentro del segundo grado de consanguinidad o de afinidad, o único civil, requerirán para su aprobación del voto unánime de los miembros de junta directiva asistentes a la respectiva reunión. (...).*"

²⁹ Señora María Mónica Albete Rivera, esposa del Dr. Sergio Cortés Rodríguez. Única accionista de Importadora Colombo Española S.A.S.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO

DE 2016

Hoja No. 41

0078

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1585 del 18 de noviembre de 2015 mediante la cual se adoptó la medida de toma de posesión inmediata para liquidar los bienes, haberes y negocios de **INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.**

las que se encuentran a cargo de Catering y Campamento de Colombia S.A.S., Equipos de Cantera Albán S.A.S. y Distribuidora Riavia S.A.S.³⁰, pues no se atendían los criterios previstos en los artículos 2.1.2.1.10 y 2.1.2.1.11 del Decreto 2555 de 2010, y que por ello hay una falta de motivación o falsa motivación³¹, procede indicar:

Señala el parágrafo 3 del artículo 2.1.2.1.10 del Decreto 2555 de 2010, que: *"En todo caso, el establecimiento de crédito deberá acumular las obligaciones de personas jurídicas que representen un riesgo común o singular cuando, por tener accionistas o asociados comunes, administradores comunes, garantías cruzadas o una interdependencia comercial directa que no puede sustituirse a corto plazo, en el evento en que se presentara una grave situación financiera para una de ellas se afectaría sustancialmente la condición financiera de la otra u otras, o cuando el mismo factor que pudiera determinar una difícil situación para una de ellas también afectaría en un grado semejante a las demás."*

Sobre la interpretación de este artículo, la entonces Superintendencia Bancaria a través del concepto No. 2002068293 señaló:

*"Teniendo en cuenta que la disposición no define la expresión riesgo común, en aras de tener una aproximación al tema se hace necesario acudir a lo que semánticamente significan las expresiones "riesgo" y "común". En tal sentido, riesgo se define como "Contingencia, probabilidad, proximidad de un peligro o daño. La caracterización del riesgo debe ponerse en relación con el peligro, para distinguir la sutil diferencia entre ambos términos. El riesgo entraña una posibilidad de daño, es una situación en la que no existe una garantía de éxito seguro, lo que generalmente, en términos económicos, va íntimamente relacionado con la posibilidad de obtener un lucro. Por su parte el peligro implica una mayor proximidad al daño, viene caracterizado por un plus sobre el riesgo. En el riesgo se desconocen los desenlaces de las situaciones, pero sí se conocen las probabilidades de los posibles resultados"*³²

*De otra parte, la palabra común significa "Dícese de lo que, no siendo privativo de ninguno, pertenece o se extiende a varios."*³³

*En materia de seguros, que si bien es un campo especial y diferente al tema financiero puede servir de criterio orientador, riesgo común es la "Denominación bajo la que se conoce (sic) las situaciones de acumulación de riesgos, esto es, cuando una pluralidad de bienes se encuentra en las mismas condiciones de riesgo, lo que implica que la entidad aseguradora los catalogue como un riesgo común, único que afecta a todos los elementos."*³⁴

De acuerdo con lo anterior, es dable concluir en el caso bajo estudio que el riesgo común obedece a ciertas circunstancias que pueden poner en peligro o resquebrajar la estabilidad financiera de uno de los agentes objeto de la acumulación, las cuales se extienden y afectan a las demás personas jurídicas con las cuales se tiene vínculos en los términos de la norma.

³⁰ Catering Celtas S.A.S la cual cambió su razón social por el de Catering y Campamento de Colombia S.A.S. mediante Acta No. 3 de Asamblea de Accionistas del 25 de marzo de 2015, inscrita el 6 de abril de 2015 con el número 01927317 del libro IX. Certificado de Cámara de Comercio de Bogotá del 5 de noviembre de 2015. Distribuidora Celta S.A.S la cual cambió su razón social por el de Distribuidora Riavia S.A.S mediante Acta No. 003 de Asamblea de Accionistas del 25 de marzo de 2015, inscrita el 10 de abril de 2015 con el número 01928804 del libro IX. Certificado de Cámara de Comercio de Bogotá del 5 de noviembre de 2015. Equipos y Maquinaria Celta S.A.S. la cual cambió su razón social por el de Equipos de Cantera Albán S.A.S mediante Acta No. 3 de Asamblea de Accionistas del 25 de marzo de 2015, inscrita el 7 de abril de 2015 con el número 01927506 del libro IX. Certificado de Cámara de Comercio de Bogotá del 5 de noviembre de 2015.

³¹ En el recurso habla de falta de motivación, pero la jurisprudencia a la que alude se refiere a falsa motivación.

³² Nota al pie del concepto 2002068293: "Diccionario Enciclopédico Profesional de Finanzas y Banca, tomo III N-Z, Instituto Superior de Técnicas y Prácticas Bancarias, Primera Edición, Madrid, 1992, pág.396."

³³ Nota al pie del concepto 2002068293: "Diccionario Esencial de la Real Academia Española, Editorial Espasa Calpe, Madrid 1997, pág. 288."

³⁴ Nota al pie del concepto 2002068293: "Diccionario Enciclopédico Profesional de Finanzas y Banca, Tomo III N-Z, Instituto Superior de Técnicas y Prácticas Bancarias, Primera Edición, 1992 pág.397."

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO

0078

DE 2016

Hoja No. 42

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1585 del 18 de noviembre de 2015 mediante la cual se adoptó la medida de toma de posesión inmediata para liquidar los bienes, haberes y negocios de INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.

Sobre tales bases, el mismo precepto describe los eventos en los cuales tiene ocurrencia el denominado riesgo común, que son: cuando hay accionistas, asociados o administradores comunes, garantías cruzadas o interdependencia comercial directa que no puede sustituirse a corto plazo, términos sobre los cuales tampoco existe una definición clara ni un señalamiento específico del porcentaje para que se dé la comunidad. Sin embargo, teniendo en cuenta la aceptación que se tiene sobre la expresión "común" como aquello que pertenece a varios se tiene, entonces, que se entenderá por accionistas comunes aquellos con participación en un agente y en el otro."

Conforme lo dispuesto en la norma, procede acumular las operaciones activas de crédito de personas jurídicas y naturales, cuando quiera que se presenten uno, o más de uno, de los eventos en los cuales tiene ocurrencia el denominado "riesgo común", eventos por lo demás delimitados y objetivos.

En el caso en cuestión, para el momento en que se generó el exceso -Noviembre de 2014- el Señor José Cayetano Morao con endeudamiento en Internacional C.F. S.A. era "accionista en común" de las Sociedades Catering y Campamento de Colombia S.A.S., Equipos de Cantera Alban S.A.S. y Distribuidora Riavia S.A.S., por lo que conforme al numeral 2º del artículo 2.1.2.1.11 del Decreto 2555 de 2010 que remite al artículo 2.1.2.1.10 de ese mismo Decreto, se debía acumular sus obligaciones con las que estaban a cargo de las sociedades.

Debe indicarse que según lo previsto en el numeral 2º del artículo 2.1.2.1.11 del Decreto 2555 de 2010 procede la acumulación a cargo de personas naturales con "Las celebradas con personas jurídicas respecto de las cuales la persona natural, su cónyuge, compañero o compañera permanente o los parientes indicados en el numeral anterior se encuentren en alguno de los supuestos de acumulación contemplados en el artículo 2.1.2.1.10 del presente decreto."

Acumuladas de esta manera y dado que, a su vez, las Sociedades Catering y Campamento de Colombia S.A.S., Equipos de Cantera Alban S.A.S., Distribuidora Riavia S.A.S. y la Sociedad Importadora Colombo Española S.A.S., para ese mismo momento, compartían un "administrador en común", la Sra. Marcela Betancur Rodríguez, la obligación de esta última Sociedad, también debía acumularse a las otras.

Cabe agregar en relación con las operaciones activas de crédito a cargo de Distribuidora Riavia S.A.S. que, las sociedades Catering y Campamento de Colombia S.A.S. y Equipos de Cantera Alban S.A.S. eran deudoras solidarias de las mismas. Visto gráficamente la acumulación operó de la siguiente manera:

Gráfica 1

Hoja No. 43

8.4.2.2 De la relación del Dr. Sergio Cortés Rodríguez con las sociedades deudoras y otros asuntos.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO

6078

DE 2016

Hoja No. 44

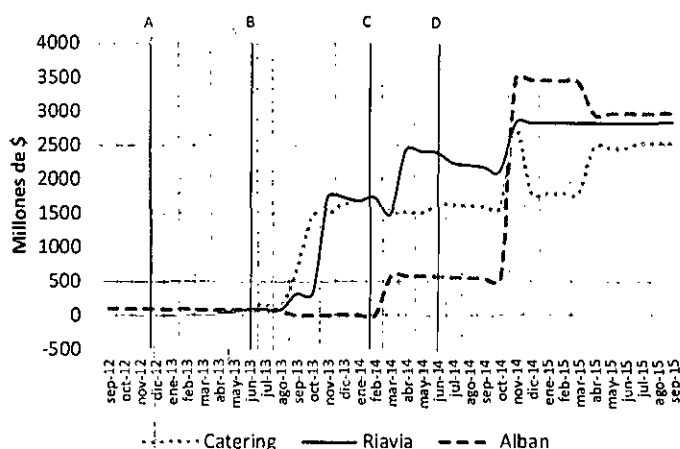
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1585 del 18 de noviembre de 2015 mediante la cual se adoptó la medida de toma de posesión inmediata para liquidar los bienes, haberes y negocios de INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.

Frente a los argumentos expuestos en los numerales 3.1.2.1 y 3.1.2.2. del recurso, procede en forma previa enfatizar que manifestaciones allí expuestas como aquella en la que se indica que el Dr. Sergio Cortés Rodríguez tuvo la intención de desvincularse de las sociedades deudoras pero que eso no fue posible sino hasta el 2015, desdicen de su actuar como administrador, pues si ese era su interés, debía obrar con la debida diligencia calificada, que debe caracterizar la gestión de un administrador de una entidad vigilada. Según reposa en los registros de esta Superintendencia su vinculación con Internacional C.F. S.A. como miembro de Junta Directiva se produjo en enero de 2014 y su desvinculación en calidad de accionistas de las sociedades deudoras se produjo 14 meses después, esto es marzo de 2015.

Situación que además no pareciera tener una justificación, si se tiene en cuenta que en agosto de 2013 dejó de ser Representante Legal de esas sociedades. Debe mencionarse que el monto de los créditos de las mencionadas sociedades se multiplicó de manera significativa, hasta llegar a exceder los cupos individuales de crédito, a partir del momento en el que el Dr. Sergio Rodríguez Cortés se vincula con la Compañía, inicialmente en condición de asesor (enero de 2013) luego como miembro de Junta Directiva (mayo del 2014) y finalmente como Vicepresidente Ejecutivo (julio de 2014).

Tal como lo muestra la siguiente gráfica, en poco más de dos años (entre agosto de 2013 y septiembre de 2015) la exposición de tales sociedades con Internacional C.F. S.A. se multiplicó por 18 veces en el caso de Catering y Campamento de Colombia S.A.S., 32 veces en el caso de Distribuidora Riavia S.A.S. y por 50 veces en el caso de Equipos de Cantera Alban S.A.S., de tal forma que con ese incremento se configuró un exceso en los límites individuales de crédito.

Gráfica 2



- A El Dr. Sergio Cortés Rodríguez adquiere la condición de asesor externo de Internacional C.F. S.A.
- B El Dr. Sergio Cortés Rodríguez renuncia a su condición de representante legal de las sociedades deudoras y en su reemplazo se designa a la señora Marcela Betancur Rodríguez.
- C El Dr. Sergio Cortés Rodríguez adquiere la condición de miembro de Junta Directiva de Internacional C.F. S.A.
- D El Dr. Sergio Cortés Rodríguez asume el cargo de Vicepresidente Ejecutivo de Internacional C.F. S.A.

Los datos fueron tomados del Archivo CV-SFC-11_SEPSFC_ANEXO1.xlsx e Información suministrada por la Cámara de Comercio de Bogotá

Debe agregarse que en la Declaración referida en la Resolución impugnada, el Dr. Sergio Cortés Rodríguez manifestó conocer a quién ocupó el cargo de Representante Legal de

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO

0078

DE 2016

Hoja No. 45

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1585 del 18 de noviembre de 2015 mediante la cual se adoptó la medida de toma de posesión inmediata para liquidar los bienes, haberes y negocios de **INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.**

las sociedades en agosto de 2013, Sra. Marcela Betancur Rodríguez, y señaló su nexo o relación con esa persona, como se expone:

"PREGUNTADO: Que vinculación tiene con la señora Marcela Betancur (sic) Rodríguez? **CONTESTÓ:** Ella fue empleada mía de la importadora en el pasado y ya no tenemos relación profesional porque mi esposa (sic) la importadora Colombo Española mi esposa la tiene en proceso de Venta. **PREGUNTADO:** Cuando Ud. se retiró como socio de estas empresas, de qué forma intercedió para que ella quedara como representante legal de estas empresa? **CONTESTÓ:** Porque los dueños de las empresas la conocían porque ella trabajaba conmigo pero entiendo que ella se fue saliendo de esas compañías al yo retirarme. **PREGUNTADO:** Cual fue la razón por la cual ella tomó la decisión de irse desvinculando de esas empresas? **CONTESTÓ:** Yo entiendo que con mi salida cada uno fue tomando su rumbo. **PREGUNTANDO:** Tuvo algún tipo de preferencia para otorgarle a ella o las empresas crédito? **CONTESTÓ:** No soy conocedor o consiente (sic) que ella haya tenido crédito y a las empresas lo mismo que dije antes ningún trato de favor."

Es de resaltar que la Señora Marcela Rodríguez Betancur no sólo fue Representante Legal de la Sociedad Importadora Colombo Española S.A.S, de propiedad de la cónyuge del Dr. Sergio Cortés Rodríguez, sino también de las Sociedades Catering y Campamento de Colombia S.A.S., Equipos de Cantera Albán S.A.S. y Distribuidora Riavía S.A.S.

Ahora, el recurrente manifestó que la participación del señor Cortés en esas sociedades era una mera apariencia, y que, por asuntos ajenos a su voluntad, su desvinculación sólo se formalizó hasta el 25 de marzo de 2015. Frente a esa manifestación, procede indicar que:

Según información suministrada por la Cámara de Comercio de Bogotá, esto es, Acta número 3 de la Asamblea General de Accionistas de Equipos y Maquinaria Celta S.A.S., Acta número 3 de la Asamblea de Accionistas de Catering Celta S.A.S. y Acta No. 3 de la Asamblea de Accionistas de Distribuidora Celta S.A.S., todas del 25 de marzo de 2015, el Dr. Sergio Cortés Rodríguez actuó en dichas sesiones en calidad de accionista, fecha en la cual esas instancias corporativas aprobaron la venta y negociación de su participación accionaria y un nuevo cambio en la representación legal en tales sociedades.

Dado el cambio en la representación legal, las Actas referidas fueron sometidas a inscripción en el registro mercantil,³⁵ por lo que en los términos del numeral 4° del artículo 29 del Código de Comercio, sus efectos respecto de terceros se produjeron a partir de la fecha de dicha inscripción, que ocurrió el mismo 25 de marzo de 2015. Es de agregar que las referidas Actas son prueba de la decisión de la Asamblea, según lo dispone el artículo 189 del Código de Comercio.³⁶

Así las cosas, la declaración del Dr. Sergio Cortés Rodríguez, no se apegó a la realidad dado que en forma expresa en ella manifestó que "antes de su vinculación como Vicepresidente Ejecutivo de la Compañía tuvo una participación" en tales sociedades, cuando lo cierto es y probado está, que, al momento de ocupar ese cargo en Internacional C.F.

³⁵ Artículo 441 del Código de Comercio por remisión del artículo 45 de la Ley 1258 de 2008

³⁶ "Las decisiones de la junta de socios o de la asamblea se harán constar en actas aprobadas por la misma, o por las personas que se designen en la reunión para tal efecto, y firmadas por el presidente y el secretario de la misma, en las cuales deberá indicarse, además, la forma en que hayan sido convocados los socios, los asistentes y los votos emitidos en cada caso.

La copia de estas actas, autorizada por el secretario o por algún representante de la sociedad, será prueba suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no se demuestre la falsedad de la copia o de las actas. A su vez, a los administradores no les será admisible prueba de ninguna clase para establecer hechos que no consten en las actas."

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 0078 DE 2016 Hoja No. 46

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1585 del 18 de noviembre de 2015 mediante la cual se adoptó la medida de toma de posesión inmediata para liquidar los bienes, haberes y negocios de INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.

S.A., esto es julio de 2014, todavía ostentaba la calidad de accionista en aquellas, la que mantuvo por cerca de 9 meses más.

También se afirmó en el recurso que esos créditos –los otorgados a las sociedades-, no le generaron un beneficio económico al señor Cortés, directo e indirecto, aun cuando, por fuerza de su participación en el capital de las sociedades Catering Celtas S.A.S, Distribuidora Celta S.A.S, y Equipos y Maquinaria Celta S.A.S., y la condición de única accionista del conyugue de este, en la Sociedad Importadora Colombo Española S.A.S., ese provecho necesariamente tuvo lugar.

Cabe añadir que pese a que en la declaración rendida por el señor Cortés juró, frente a la pregunta dirigida a que explicara cómo fue la negociación de la venta de sus acciones en las sociedades, que "(...) cedí las acciones a los accionistas nuevos sin contraprestación (...)", obra en las Actas de Asamblea de Accionistas del 25 de marzo de 2015 mencionadas, que las acciones fueron objeto de negociación a través de una compra venta, de lo que se deriva la existencia de un pacto sobre el precio y la entrega del mismo como contraprestación.

Además de ello, se tiene que en efecto sí hubo un trato que favoreció a las sociedades, por cuanto como se verá, hubo un otorgamiento sucesivo de créditos para la cancelación de obligaciones vencidas, como se aprecia en el cuadro No. 1, que se muestra a continuación, sin que se hubiesen cancelado a la fecha de realización del proceso de inspección en septiembre de 2015.

Cuadro No. 1

Catering y Campamento de Colombia S.A.S Nit 900.591.831				
Crédito No.	Aprobación	Observación		
16073	El crédito fue otorgado el 17 de junio de 2013 por valor de \$150 millones con vencimiento en 24 meses.	Fue amortizado hasta el mes de octubre de 2014 cuando fue cancelado con el producto de un nuevo crédito.		
16259	En septiembre 19 de 2013 fue otorgado crédito por valor de \$310 millones a 48 meses bajo la modalidad de leasing sobre maquinaria y equipo para cocina.	Factura de venta número 506 por valor de \$380 millones proveedor PACOMERLO.		
16465	En diciembre 16 de 2013 fue desembolsado el crédito por valor de \$327.2 millones	Este crédito estuvo dirigido al descuento de facturas.		
16529	En el mes de enero de 2014 fue otorgado el crédito por valor de \$97 millones a un plazo de 120 días.	El valor de este crédito estuvo destinado a la cancelación de obligaciones en mora de las siguientes obligaciones en cabeza de Catering Celta y Equipos y Maquinaria Celta, así:		
		Catering Celta		
		No. Crédito	Estado del Crédito	Fecha de Vencimiento
				Valor Vencido
		16073	Vencido	20/01/2014
		16258	Vencido	05/01/2014
		16259	Vencido	05/01/2014
		Subtotal		\$17.130.498
		Equipos y Maquinaria		

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO

0078

DE 2016

Hoja No. 47

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1585 del 18 de noviembre de 2015 mediante la cual se adoptó la medida de toma de posesión inmediata para liquidar los bienes, haberes y negocios de **INTERNACIONAL COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A.**

		No. Crédito	Estado del Crédito	Fecha de Vencimiento	Valor Vencido
		15741	Vencido	05/01/2014	0
		16085	Vencido	20/01/2014	44.797.771
		16242	Vencido	05/01/2014	28.286.947
		16252	Vencido	20/01/2014	6.784.696
		Subtotal			\$79.869.424
		Total			\$96.999.912
16258	El crédito por valor de \$26 millones con plazo a 48 meses fue desembolsado el 23 de septiembre de 2013	Según solicitud del representante legal, señora Marcela Betancur Rodríguez, éste crédito debía ser aplicado a las obligaciones a cargo del señor Francisco Darío Pérez que registraba la obligación No. 9915693 en mora por valor de \$50 millones.			
16431	El crédito por valor de \$47.8 millones del 29 de noviembre de 2013 con plazo a 120 días	Fue aplicado según solicitud del representante legal señora Marcela Betancur a las siguientes operaciones que se encontraban en mora: crédito número 16073 por valor de \$7.370.83, crédito 16258 por \$746.842, crédito No. 16259 por \$1.965.557, crédito No. 15176 por \$20.676.823 y crédito No.15654 por \$8.103.163 para un total de \$47.853.612.			
16656	Crédito por valor de \$330 millones fue otorgado en el mes de marzo de 2014 a un plazo de 6 meses único pago al vencimiento, esto es, en septiembre de 2014.	Garantía: deudor solidario; las empresas Equipos y Maquinaria Celta y Distribuidora Celta SAS, firma Marcela Betancur Rodríguez como representante legal de estas empresas.			
16354	En octubre 30 de 2014 fue aprobado el crédito por valor de \$800 millones.	Otorgado a un plazo de 180 días único pago al vencimiento, destino capital de trabajo.			
1111120007	El 26 de junio de 2014 fue aprobada la operación por valor de \$938.0 millones a un plazo de 6 meses línea de crédito cartera ordinaria. Codeudores Equipos y Maquinaria Celta y Distribuidora Celta SAS.	De acuerdo con el reporte enviado por la directora Comercial del 24 de junio de 2014, Catering y las empresas del grupo estaban en mora de las cuotas correspondientes a los meses de mayo y junio, y que el cliente se pondría al día con la cuota del mes de mayo el 27 de junio.			
19061	El 25 de noviembre de 2014 fue otorgado un leaseback con por valor de \$1.790 millones a 60 meses valor del bien objeto del leasing \$2.279.195.219 representado en equipo de cocina, opción de compra del 1%, amortización intereses mensuales y capital semestral.	Con esta operación se recogieron los siguientes créditos: Crédito No.16073 por valor de \$55.332.744, crédito No.16259 por \$252.140.231, crédito No.16656 por valor de \$330.000.000, crédito No.1111120007 por valor de \$938.000.000, para un total reestructurado de \$1.575.472.975 y un total desembolsado de \$1.790 millones.			
19200	En el mes de julio de 2015 le fue otorgado crédito por valor de \$90.7 con plazo a 180 días a una cuota con vencimiento el 31 de enero de 2016.	Este crédito fue otorgado para cancelar créditos que se encontraban en mora, según el formato de orden de pago por transferencia. Estos valores fueron distribuidos en los créditos señalados según correo enviado por la directora de negocios señora Claudia Adriana Jaimes donde advierte acerca de los "SALDOS PENDIENTES QUE RECOGEN LOS CLIENTES CON DOCUMENTACIÓN ENVIADA" previo visto bueno del señor Cándido Rodríguez. El destino del crédito tuvo canceló los créditos vencidos números 11116120005 y 19061 por valor			

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 0078 DE 2016 Hoja No. 48

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1585 del 18 de noviembre de 2015 mediante la cual se adoptó la medida de toma de posesión inmediata para liquidar los bienes, haberes y negocios de INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.

		de \$43.692.756 y \$46.668.000, respectivamente para un total de \$90.360.755.		
Distribuidora Riavia SAS Nit 900.542.228				
Crédito No.	Aprobación	Observación		
16628	La empresa se encuentra vinculada desde el mes de marzo de 2014 a través del contrato de leasing número por valor de \$573.7 millones sobre dos plantas eléctricas avaluadas en \$675 millones según factura, el plazo del contrato es 48 meses con pago mes vencido al DTF + 12 T.A	Este contrato se cancela en el mes de marzo de 2015. Con esta operación se cancelaron las siguientes obligaciones, según memorando CRE-CI-602-2014 del 10 de marzo de 2014:		
		Deudor	Crédito	Valor
		Equipos y maquinaria Celta	Obligación 16252	\$221.605.894
		Catering Celta	16431 y 6529	144.853.612
		Catering Celta Abono	16258	7.290.494
		Excedente para pago del bien		200.000.000
		Valor del Contrato		\$573.750.000
19059	El 25 de noviembre de 2014 fue aprobada una nueva operación de crédito ordinario por valor de \$900 millones a 36 meses con amortización anual a capital e intereses semestrales. Período de gracia un año a capital.			
19060	En el mes de noviembre de 2014 fue aprobada la línea de crédito ordinaria por valor de \$2.050 millones a 36 meses.	Periodo de gracia a capital de 12 meses. Amortización a capital semestral, garantía firma de la empresa y de Equipos y Maquinaria Celta y Catering Celta.		
Equipos de Cantera Alban S.A.S. Nit 900588955				
Operación	Valor	Nuevo Crédito	Descripción	
16242	\$754.683.936		Leasing. Se aprueba esta operación para la financiación de 5 volquetas	
16417	438.032.725		Crédito	
16418	65.200.648		Leasing	
16655	854.439.692		Leasing	
19063		\$ 2.820.000.000	Recoge las obligaciones No. 16242, 16417, 16418 y 16655. Diez (10) Volquetas Internacional 7600 mod.2011; Tres (3) Carros especial de seguridad Hyundai Coa; Un (1) Equipo de Estación de campo Nasoos est 012; Camioneta Toyota Hilux; Chevrolet Épica protección especial; Dos (2) Equipos de compactación Skil Rana; Un (1) trompo mezclador; Herramientas Especiales.	
Total	\$2.112.357.001	\$ 2.820.000.000		

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO

0078

DE 2016

Hoja No. 49

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1585 del 18 de noviembre de 2015 mediante la cual se adoptó la medida de toma de posesión inmediata para liquidar los bienes, haberes y negocios de **INTERNACIONAL COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A.**

Ahora bien, acerca de la manifestación del recurrente en el sentido de que dichas sociedades están cumpliendo con su objeto social y que las compañías no son ficticias, resulta obligado indicar que esta Superintendencia nunca indicó que se trataba de "compañías ficticias", como parece sugerir el recurrente.

En efecto como se aprecia en la Resolución en ella se refirió que conforme "*los resultados obtenidos durante los días 5, 6 y 9 de noviembre de la presente anualidad, constituyen elementos de juicio razonables para establecer que, INTERNACIONAL CF S.A., otorgó créditos a empresas cuyos negocios no operan en la actualidad*" Ahora sobre este asunto conviene traer a colación lo indicado en el Capítulo II del Informe de Inspección sobre este asunto, así: _

"...durante los días 5, 6 y 9 de noviembre del año en curso, la SFC adelantó visitas con el ánimo de conocer las instalaciones de las sociedades y corroborar su operación, a la mayoría de las cuales fueron conducidos por representantes de la Entidad.

(...) El primero de los días mencionados, 5 de noviembre, los inspectores se desplazaron a las direcciones comerciales que aparecían en los Certificados de Cámara de Comercio de Bogotá³⁷, encontrando que ninguna de las sociedades tenía su domicilio en ellas. Según lo indicado por quienes prestaban el servicio de vigilancia (celadores), hace un año aproximadamente las sociedades "Celtas" de los "venezolanos" no funcionaban en esas instalaciones.

Ese mismo día se solicitó a la Compañía precisión sobre el domicilio de esas sociedades, y en respuesta verbal suministró las registradas en sus bases de datos y las que aparecían en Certificados de Cámara de Comercio más recientes. Visitado el domicilio de la sociedad Equipos de Cantera Albán S.A.S., Carrera 14 No. 79-78 Oficina 302 de Bogotá, se encontró que el edificio no es de oficinas sino de apartamentos.

De acuerdo con lo señalado por el celador de ese sitio, no era posible que hubiese una nomenclatura 302, dado que sólo había un apartamento por piso, también mencionó que en ese edificio no residían los representantes legales de esa sociedad. Con el fin de confirmar la dirección exacta de la misma, se procedió a llamar a los teléfonos suministrados por la Compañía y en ninguno de los dos contestaron.

Como hasta el momento no se había logrado "concretar efectivamente ninguna visita", según se indica en el Informe³⁸, se le solicitó a la Dra. Claudia Jaimes, Directora Comercial de la Compañía y encargada de esos clientes, acompañar a la Comisión a la dirección, registrada en la base de datos, de la sociedad Catering y Campamento de Colombia S.A.S. esta es, Calle 71 A No. 50 - 51.

Esa dirección correspondía a la de un garaje. La Dra. Jaimes, solicitó hablar con el señor German Rivas, Representante Legal de la sociedad, y las personas que se encontraban en el lugar le respondieron que no conocían al señor Rivas y que ahí no operaba esa sociedad dado que esas eran las instalaciones de International Food Service S.A.S, (otro cliente de la Compañía).

Posterior a ello, en la dirección registrada en el último Certificado de Cámara de Comercio registrado, esta es: Carrera 58 A No. 167 - 58 L6, se encontró que el Local indicado -el 6- estaba cerrado, no tenía avisos, y no había mayor dotación visible, salvo unos pocos muebles. En su piso había recibos de servicios públicos, correspondencia y marcas de pozamiento de agua [como se observa en la foto] . Las personas que atienden los locales contiguos (una ferretería y una miscelánea), y los dos celadores de la bahía comercial informaron que en ese local no había movimiento desde hace aproximadamente cuatro meses.

³⁷ Esos certificados reposan en las carpetas de clientes de la Compañía.

³⁸ Se trata del "Informe de Visita a Clientes" anexo al Capítulo II del informe de Inspección

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO

0078

DE 2016

Hoja No. 50

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1585 del 18 de noviembre de 2015 mediante la cual se adoptó la medida de toma de posesión inmediata para liquidar los bienes, haberes y negocios de INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.



Fotografía que hace parte de los anexos al Capítulo II del Informe de Inspección 2015100740-015-000

En el segundo de los días, 6 de noviembre el Dr. Sergio Cortes Rodríguez, y la Dra. Claudia Jaimes, antes mencionados, condujeron a los inspectores a una oficina ubicada en la Calle 112 No. 15-07 Oficina 607³⁹, cuyo mobiliario consistía en dos escritorios y sillas de oficina. En ella se encontraba quién afirmó ser Juan Manuel Morales Serrano, Representante Legal de la sociedad Equipos de Cantera Albán S.A.S.

El señor Morales informó que el negocio al cual se dedicaba la sociedad era fundamentalmente "el de la explotación de canteras y venta de los materiales para obras civiles e indicó que se encontraba a la espera de la licencia de explotación de la cantera ubicada en el municipio de Albán"⁴⁰. Afirmó que en la actualidad la sociedad contaba con contratos para el desarrollo de obras de ingeniería y carreteras pero no recordó el nombre de su contraparte, refirió que no disponía físicamente de esos contratos pues según se indica en el informe, "los guarda la contadora en otra oficina de la cual están en proceso de trasteo a la oficina que le sirve para su profesión como abogado."

El Dr. Sergio Cortes Rodríguez, y la Dra. Claudia Jaimes condujeron luego a los inspectores al taller Navitrans⁴¹ y al parqueadero "Maracanazo"⁴² en el que se encontraban estacionadas en total ocho volquetas⁴³ todas ellas de propiedad de la Compañía. Según informaron dichos funcionarios esos vehículos eran el objeto del contrato de leasing celebrado con Equipos de Cantera Albán S.A.S.

Posteriormente se dirigieron a la Avenida 19 No. 118 – 30 Oficina 5023, en la que se encontraba quién afirmó ser Víctor Alfredo Vargas, representante legal y único socio de Distribuidora Riavia S.A.S., ... y su abogado. El Sr. Vargas mencionó, que esa oficina, donde se encontraban él y su abogado, era de su propiedad y que su negocio era la comercialización de una enzima biológica para la explotación del petróleo, el alquiler de cincuenta vehículos para el transporte al interior de campamentos petroleros y el de catering. Afirmó tener contratos con Canacol, Pacific Rubiales y Rio Ariari y tener más de catorce empleados y cuyas afiliaciones se encontraban "según las exigencias de Ecopetrol."

El tercer día, 9 de noviembre de 2015, la Dra. Claudia Jaimes condujo a los inspectores a una bodega ubicada en la Carrera 76 No. 76 Bis – 39 Barrio La Granja, que según indicó, era de propiedad de la sociedad Catering y Campamentos de Colombia S.A.S. En esa bodega se encontraban dos personas una de ellas de nacionalidad venezolana, quienes manifestaron ser empleados de esa sociedad, también afirmaron que la empresa estaba ubicada en la Calle 167 con Avenida Boyacá pero que las llaves de la misma las tenía otra persona quien se encontraba en Venezuela. En la bodega, como se aprecia en los registros fotográficos⁴⁴, se encontraban apilados o amontonados distintos trebejos (...).

³⁹ Anexo 8 – Fotos 3 a 7 del Informe de Visita a Clientes

⁴⁰ Informe de Visita a Clientes

⁴¹ Ubicado en la Avenida Cali con Calle 13.

⁴² Ubicado en el sector de Álamos Norte, al costado sur de la pista del aeropuerto El Dorado.

⁴³ Cuatro (4) volquetas de placas SXY333, SXY332, SXX306 y SXX307 en el primer lugar indicado y otras cuatro (4) volquetas de placas SXX312, SXX308⁴³, SXX311 y SXX309 en el segundo

⁴⁴ Anexo 8 del informe de las visitas a Clientes -Fotos 22 a 29-.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

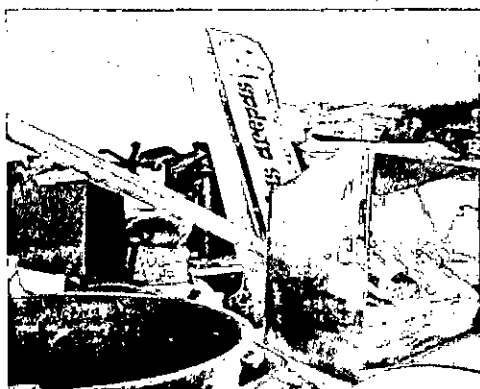
RESOLUCIÓN NÚMERO -^a

0078

DE 2016

Hoja No. 51

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1585 del 18 de noviembre de 2015 mediante la cual se adoptó la medida de toma de posesión inmediata para liquidar los bienes, haberes y negocios de **INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.**



Fotografía que hace parte de los anexos al Capítulo II del Informe de Inspección 2015100740-015-000



Fotografía que hace parte de los anexos al Capítulo II del Informe de Inspección 2015100740-015-000

En conclusión, en total se visitaron once lugares en tres días, a los cuales los inspectores fueron acompañados, en la mayoría de los casos, por la Dra. Claudia Jaimes y el Dr. Sergio Cortés Rodríguez, funcionarios de la Internacional CF, sin que se suministrara o encontrara prueba certera de que tales sociedades constituyen actualmente un negocio en marcha.

Según información oficial suministrada a petición de este organismo por el Ministerio de Salud y Protección Social, la sociedad Distribuidora Riavia S.A.S, no ha efectuado ningún aporte de seguridad social pese a que, según lo informó quién indicó ser su representante legal y único socio, contaba con una planta de personal de más de catorce personas, cuyas afiliaciones "están según las exigencias de Ecopetrol o si no, no podría ingresarlos al campo."⁴⁵ (Negrilla extra textual)

También se evidenció que la Entidad entregó en leasing a la sociedad Equipos de Cantera Albán S.A.S. ocho volquetas cuyo valor comercial a la fecha de celebración del contrato era de \$901 millones, cuando dicha sociedad según se lee en el Certificado de Cámara de Comercio, al 5 de noviembre de 2015, no había inscrito el "el acto administrativo que lo habilita para prestar el servicio público de transporte automotor en la modalidad de carga".

En esa misma línea de hechos, las personas que afirmaron ser representantes o empleados, quienes fueron conocidos por los inspectores a través de los funcionarios de la Compañía, dieron respuestas evasivas frente a la solicitud de suministrar contratos o de acceder a las instalaciones de alguna de las empresas ya que, como se mencionó, indicaron que no tenían documentación

⁴⁵ Informe de Visita a Clientes de la Comisión de Visita.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO

0078

DE 2016

Hoja No. 52

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1585 del 18 de noviembre de 2015 mediante la cual se adoptó la medida de toma de posesión inmediata para liquidar los bienes, haberes y negocios de **INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.**

por estar de trasteo o que no contaban con las llaves de las oficinas ya que las personas que disponían de ellas se encontraban de viaje”.

Conforme lo indicado, los hechos expuestos dan lugar a considerar que se trataba de empresas, como se refirió en la Resolución, cuyos negocios no operaban al momento de la toma de posesión para liquidar. Por todo lo anterior, las afirmaciones efectuadas, sobre el particular, no son de recibo para esta Superintendencia.

8.4.2.3. Sobre la clasificación de la cartera de las sociedades vinculadas.

Frente a la afirmación de que no existían pruebas para considerar que tales sociedades debían ser calificadas de una manera diferente, y que se hizo *due diligence* y visita a las empresas al momento de la originación, se debe mencionar que el proceso de análisis y de calificación, no solo tiene lugar en la originación sino también en el seguimiento. En especial si se tiene en cuenta que, con cada incremento en la exposición, dado que se entregaban nuevos recursos, debía darse un nuevo análisis de riesgo de crédito.

En conjunto, desconocer la ubicación de las sociedades, contar con información errada y errática (varias direcciones aparentes de un mismo lugar), más la falta de precisión de la que aparecía en las carpetas de tales clientes, demuestra que no se realizó el seguimiento a estas sociedades y que la Compañía no disponía de la información básica mínima, para realizar un proceso de calificación adecuado.

Cabe resaltar que, en el informe de Visita a Clientes de la Compañía, que corresponde a un anexo del Informe Inspección, la funcionaria que acompañó a los inspectores durante esos días (5, 6 y 9 de noviembre de 2015) y responsable de hacerle seguimiento a estos clientes, Directora Comercial de Internacional CF S.A., manifestó su sorpresa al constatar que las sociedades no operaban en las direcciones de que disponía Internacional C.F. S.A. en los siguientes términos:

“Como hasta el momento no se había logrado concretar efectivamente ninguna visita, se le solicitó a la señora Claudia Jaimes, Directora Comercial de Internacional CF como responsable de estos clientes, acompañarnos a realizar la visita programada a la sociedad Catering y Campamento de Colombia S.A.S (Antes Catering Celta S.A.S.) a la dirección registrada en la base de datos de Internacional CF, esta es, Calle 71 A No. 50 – 51. Al llegar al domicilio se evidenció un garaje sin aviso que lo identifique. La señora Jaimes, solicitó hablar con el señor German Rivas, Representante Legal de la sociedad Catering y Campamento, ante lo cual le respondieron que no conocen al señor Rivas y que ahí no opera dicha sociedad pues esas son las instalaciones de International Food Service (otro cliente de Internacional CF), empresa que se dedica a la importación de comida Española. Ante esta situación la señora Jaimes expresa su desconcierto y reconoce la importancia de visitar y hacerles seguimiento a los clientes.” (Negrilla extra textual).

Es de agregar que no se está dentro de un proceso administrativo sancionatorio⁴⁶, como lo alega el recurrente, en tanto que, se reitera, que la naturaleza de la actuación que se adelantó responde a propósitos particulares dirigidos a conjurar una o unas de las situaciones referidas en el artículo 114 del EOSF y a evitar la extensión de sus efectos, en procura de la salvaguarda de intereses superiores como la protección de la confianza del público en el sector financiero y la preservación del orden público económico, lo que se predicó no solo por la ocurrencia de un exceso en los límites individuales de crédito, sino por la coexistencia de hechos que valorados en su conjunto daban cuenta de situaciones de orden estructural.

Ahora en virtud del carácter de inmediatez de una medida como la toma de posesión para la liquidación, como se mencionó preliminarmente, se hace imperioso que las decisiones

⁴⁶ En el recurso se indica que “es carga de la Superintendencia demostrar que la investigada se encuentra dentro de las causales descritas por el ordenamiento para que sea objeto de sanciones”

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO . . .

0078

DE 2016

Hoja No. 53

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1585 del 18 de noviembre de 2015 mediante la cual se adoptó la medida de toma de posesión inmediata para liquidar los bienes, haberes y negocios de **INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.**

sean ejecutadas en forma inmediata, de tal forma que no hay lugar para discusiones o debates previos con la Entidad Vigilada objeto de la medida, más aún por cuanto su derecho de defensa se satisface con la posibilidad de interponer el recurso respectivo, tal como efectivamente ocurrió.

Así las cosas, revisados los argumentos del recurrente frente a los anteriores aspectos, se encuentra que los mismos no tienen la vocación de modificar la decisión de toma de posesión para liquidar, en tanto que lo que atañe a este punto tuvo como base hechos ciertos que dan cuenta de operaciones realizadas en exceso a los límites permitidos con vinculados según se expuso previamente. Hechos que revisten la mayor gravedad y que no pueden ser minimizados catalogándolos como meras elucubraciones o tratarlos como contrarios a la verdad, para sustentar una supuesta "falsa motivación", la cual no se materializa dado que el sustento de la Resolución corresponde a la realidad fáctica y jurídica, conforme lo corrobora el acervo probatorio recaudado y la adecuación normativa efectuada antes detallada.

8.4.3. Sobre lo expuesto en el recurso respecto de "la concentración de cartera y la metodología de calificación."

Frente a estas materias, el recurrente afirmó que, i) la compañía sí tomó medidas inmediatas desde finales de 2014, ii) acogió las recomendaciones de la Superintendencia, iii) desarrolló un modelo de calificación de cartera en el 2015, el cual fue puesto en conocimiento de este organismo, iv) automatizó sus reportes con destino a la alta gerencia, v) se encontraba automatizando el modelo de calificación comercial y vi) que el HHI se encontraba en el 69% y que de no ser por la intervención al final del año se encontraría en el 60%.

Sobre este asunto, resulta preciso mencionar los antecedentes del hallazgo, así: entre el 25 de agosto y el 12 de septiembre de 2014 la SFC realizó un proceso de supervisión *In Situ*⁴⁷ en Internacional C.F. S.A. – hoy en Liquidación-. El objetivo de dicha visita consistió en evaluar el sistema de administración de riesgo de crédito (en adelante RC), en particular, la calidad de la metodología de calificación empleada en el seguimiento y normalización del portafolio comercial, las operaciones de compra de cartera a no vigilado, entre otros.

Como resultado de este proceso la DRC, mediante comunicación del 14 de noviembre de 2014⁴⁸, se le ordenó a la administración, puntualmente al Presidente de la Compañía ejecutar un plan de actividades de corto plazo para abordar de manera efectiva las falencias del sistema de administración de riesgo crediticio, identificadas por la Comisión de Visita.

Entre las principales debilidades se encontró un elevado nivel de concentración de cartera comercial, pues entre finales del año 2011 y junio del año 2014 el saldo promedio de cartera por deudor se multiplicó por más de cuatro veces. En el mismo periodo, se detectó que el endeudamiento de los principales 150 deudores pasó de representar el 63.54% al 91.5% del total de la cartera comercial. Por último se encontró que el riesgo por concentración se acentuaba al corte de julio de 2014, pues el 50% de la cartera comercial estaba expuesto en tan sólo 28 deudores, frente a los cuales, adicionalmente, se advirtió que cerca del 38% de su exposición no contaba con garantías idóneas.

⁴⁷ Radicado 2014067860

⁴⁸ Radicado 2014105416-001-000 del 14 de noviembre de 2014

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO

0078

DE 2016

Hoja No. 54

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1585 del 18 de noviembre de 2015 mediante la cual se adoptó la medida de toma de posesión inmediata para liquidar los bienes, haberes y negocios de INTERNACIONAL COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A.

De otra parte, la Comisión encontró falencias en la calificación por riesgo en la etapa de seguimiento de la cartera; carencia de un proceso de seguimiento de la condición financiera de los originadores a los cuales les compra créditos; fallas en la aplicación del modelo de referencia comercial, y debilidades tanto en las políticas sobre el proceso de reestructuración de cartera como en la aplicación de las instrucciones especiales sobre créditos otorgados a las víctimas del conflicto armado.

Además de la exigencia de corrección de los procesos de gestión de riesgos y de su correlato operativo, se requirió la revisión de la calificación de los deudores en general y, específicamente, de algunos que tras el análisis de la Comisión de Visita presentaron alertas en su condición financiera, a pesar de lo cual estaban calificados en escalas de bajo riesgo⁴⁹, precisando el posible impacto de provisión adicional que tendría que constituir en los estados financieros y en los indicadores de calidad y cobertura de cartera⁵⁰.

En diciembre de 2014 se realizó reunión⁵¹ con la Administración de la Entidad, en la cual se reiteró verbalmente la relevancia de la problemática identificada en el proceso de inspección correspondiente con el fin de que la Compañía corrigiera todos los hallazgos encontrados por la Comisión de Visita.

A pesar de esas gestiones, la respuesta formal al Informe de Visita por parte de la Compañía,⁵² no atendió lo solicitado por la SFC, dada su falta de concreción y correspondencia con la importancia de la problemática planteada. En tal medida esta SFC consideró que dicha respuesta no atendía a cabalidad lo solicitado y planteado en el informe de inspección y su carta de traslado. Por lo que resultó necesario advertirle, a través de una comunicación que:

No existían acciones concretas requeridas, i) en materia de concentración y cobertura de garantías de la cartera, ii) en relación con los límites de exposición, iii) los sistemas de alertas, los roles y responsabilidades de las funciones de control (áreas de riesgo y auditoría), iv) sistemas de reporte a la Alta Dirección, ni precisó las actividades específicas para la revisión, ajuste e implementación de la metodología de calificación. En esa oportunidad se exhortó a la Compañía para que resolviera en forma definitiva las deficiencias evidenciadas en los procesos del SARC.

Cabe señalar que en dicha comunicación se le hizo una recomendación final a la Compañía indicándole "que el objetivo fundamental del plan de acción requerido por esta Superintendencia no se limita al cumplimiento de requisitos formales sino que requiere necesariamente de resultados eficaces en el sentido de alcanzar la atomización esperada del riesgo de crédito derivado de la vulnerabilidad de la concentración de cartera, corregir definitivamente las falencias en el sistema de administración de riesgo crediticio y robustecer el área de gestión y control de riesgos, teniendo en cuenta la importancia de la cartera dentro de su activo" (Subrayado fuera de texto)

⁴⁹ Dentro de las causales de recalificación y del requerimiento de mayor provisionamiento se cuentan las señales de alerta en algunos deudores, errores operativos, problemas de capacidad de pago, alineamiento, ajustes en PDI y errores en provisión de cuentas por cobrar por suspensión en la causación de intereses. El incremento en la provisión de los deudores considerados correspondió a cerca del 20% de las provisiones de la cartera comercial, reportadas en diciembre de 2014.

⁵⁰ Dentro de las causales de recalificación y del requerimiento de mayor provisionamiento se cuentan las señales de alerta en algunos deudores, errores operativos, problemas de capacidad de pago, alineamiento, ajustes en PDI y errores en provisión de cuentas por cobrar por suspensión en la causación de intereses. El incremento en la provisión de los deudores considerados correspondió a cerca del 20% de las provisiones de la cartera comercial, reportadas en diciembre de 2014.

⁵¹ Reunión sostenida en las instalaciones de la SFC el día 17 de diciembre de 2014.

⁵² Radicado 2014105416-007-000 del 24 de diciembre de 2014

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO

0078

DE 2016

Hoja No. 55

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1585 del 18 de noviembre de 2015 mediante la cual se adoptó la medida de toma de posesión inmediata para liquidar los bienes, haberes y negocios de **INTERNACIONAL COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A.**

No obstante esa recomendación, la respuesta⁵³ a ese requerimiento no resolvió las graves deficiencias advertidas por el Ente supervisor, lo que condujo a que está Superintendencia requiriera directamente a la Junta Directiva de Internacional C.F. S.A. – hoy en Liquidación-, verbalmente⁵⁴ y por escrito⁵⁵, con el fin de que asumiera una gestión de liderazgo, seguimiento y control, dada la importancia y la urgencia de ajustar los procesos esenciales del SARC de la Entidad.

Como se pudo apreciar de este recuento, a pesar de las advertencias realizadas enfáticamente en el Informe de Inspección del 2014, en los requerimientos y en las reuniones sostenidas con la Alta Gerencia de Internacional CF S.A., ésta no respondió oportunamente con la debida diligencia que le es predicable o con el profesionalismo exigible, a las recomendaciones formuladas por la Superintendencia Financiera. De hecho, dada su baja efectividad, fue necesario hacer el llamamiento a la Junta Directiva antes referido, que devino en un plan de acción que elaboró la propia Junta, cuyas metas también definidas por ese órgano social, se cumplirían, según lo planteó la Junta, en su gran mayoría en agosto de 2015.

Ahora bien dada la importancia y la magnitud de la problemática presentada, la SFC decidió realizar una nueva inspección *In Situ* a la Entidad, en el 2015. Sin embargo, y tal como se puede observar en el Capítulo II del Informe de Inspección radicado con el número 2015100740-015-000, este Organismo advirtió que la Entidad: *"no sólo no cumplió sus propias metas propuestas de disminución de la concentración para el periodo comprendido entre abril y septiembre de 2015, sino que mantuvo elevados niveles en esta materia, y que además seguía utilizando la misma metodología de calificación que fue objeto de reparos en el proceso de supervisión In Situ realizado por la DRC en 2014 y que se requirió con urgencia corregir."*

Con base en lo indicado se tiene que, la Junta Directiva y la Alta Gerencia de la Compañía, contrario a lo que afirma el recurrente, no gestionaron en la forma requerida las instrucciones dadas por esta Superintendencia, asuntos sobre los cuales en forma insistente se les solicitó un ajuste estructural, por lo que el daño que menciona, no tuvo lugar por la decisión de esta Superintendencia, sino por la baja capacidad de reacción de los administradores, referida ésta como la ineffectividad en los resultados de las gestiones, al desconocimiento de las órdenes de este Organismo y en general la poca disposición de implementar los ajustes que resultaban relevantes, dado que su principal activo era su cartera.

Cabe agregar que a eso se le sumaron los hallazgos de la visita de 2015, que conjugadas con las anteriores detectadas, mostraron al supervisor la magnitud del problema que atravesaba la Compañía y que en últimas dio lugar a la toma de posesión.

Finalmente, resta por manifestar que, tampoco en este caso se configura la supuesta "falsa motivación" que alega el recurrente, en cuanto como se demostró existe una correspondencia de lo que se aduce en la Resolución como motivo o causa del mismo, con la realidad jurídica y/o fáctica que le da sustento.

8.4.4. En cuanto a la exposición con el originador de cartera Procol S.A.S.

⁵³ Radicado 2014105416-010-000 del 11 de marzo de 2015

⁵⁴ Tal reunión se realizó el día 4 de abril de 2015. Además de los funcionarios de la SFC, asistieron los Doctores Cándido Rodríguez, Sergio Cortés, Javier José Ardura y Alfonso García Rubio.

⁵⁵ Radicado 2015021118-004-000 del 9 de junio de 2015.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO

0078

DE 2016

Hoja No. 56

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1585 del 18 de noviembre de 2015 mediante la cual se adoptó la medida de toma de posesión inmediata para liquidar los bienes, haberes y negocios de INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.

Al respecto el recurrente menciona que se trata de un error de inmensas proporciones, el haber expuesto *una grosera violación a los cupos individuales de crédito*, derivada de un exceso que corresponde al 91.29% del Patrimonio Técnico de la Compañía en la operación celebrada con Procol de Colombia S.A.S. por cuanto *"no se celebró operación activa de crédito alguna."*

En tal sentido, no debe perder de vista el recurrente que una operación activa de crédito es toda aquella *"...que coloca a una entidad vigilada, en desarrollo de su actividad como profesional en la intermediación financiera, en posición real o potencial de acreedor."*⁵⁶ Dicho de otro modo: *"...independientemente de la naturaleza de las operaciones y de los elementos que las puedan diferenciar, para los efectos que interesan a esta Superintendencia en la supervisión de los límites individuales de crédito, lo que debe tenerse en cuenta es la celebración de una operación activa de crédito, es decir, si la Entidad vigilada efectivamente asume la posición de acreedor."*⁵⁷

Así también lo entendió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en fallo en el que esa autoridad judicial indicó: *"... dentro de las operaciones activas de crédito están incluidas aquellas que tiene la virtud de colocar 'potencialmente' a la entidad en calidad de acreedora."*⁵⁸

Partiendo de esa precisión conceptual, en la medida en que Procol de Colombia S.A.S. resulta ser deudor solidario de los créditos objeto de la compraventa de la cartera que ella origina, respecto de los cuales Internacional C.F. S.A. es acreedor, se entiende que existe una operación activa de crédito, computable a la luz del Decreto 2555 de 2010.

Es de mencionar que la posición que asumió el originador y la del acreedor se encuentra instrumentada en el contrato de originación y en el pagaré, y sobre su alcance, la Directora Central Jurídica de la Internacional C.F. S.A. informó⁵⁹ a la comisión de visita *...en caso de incumplimiento por parte de los Originadores en el pago del flujo derivado del contrato de compraventa de títulos valores, Internacional podrá dar inicio a un proceso ejecutivo en contra del Originador y/o deudores solidarios, acelerar el plazo de todos los créditos y obtener a través de ellos (en la medida de la suficiencia económica del originador y sus solidarios), el pago de los valores desembolsados por parte de Internacional."* (Subrayado fuera de texto).

Por ende, dado que en su calidad de deudor responde por el pago de las obligaciones mencionadas y teniendo en cuenta el monto de ellas, existió como se precisó en la Resolución, un exceso en los límites individuales de crédito de las proporciones señaladas.

8.4.5. Compra de cartera de originadores

Acerca de la falta de relación de los créditos de libranza que se encontraban en cobro jurídico sin mención a su importe, aspecto que estima el impugnante, le resta todo peso jurídico al argumento, debe precisarse que la descripción y detalle de los mismos reposa en el Capítulo II del Informe de Inspección, el cual se encontraba y se encuentra a disposición del recurrente. En efecto conforme está expuesto en él, se indica:

⁵⁶ Superintendencia Bancaria, Memorando 001-798 de Noviembre 30 de 1987.

⁵⁷ Superintendencia Financiera, Concepto 2008071549-001.

⁵⁸ Fallo 13 de diciembre de 1994, expediente 7058 citado en concepto No. 2002068293-2 del 28 de febrero de 2003.

⁵⁹ Comunicación del 23 de octubre de 2015 Requerimiento CV-SFC.015, Internacional C.F. S.A.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 0078 DE 2016 Hoja No. 57

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1585 del 18 de noviembre de 2015 mediante la cual se adoptó la medida de toma de posesión inmediata para liquidar los bienes, haberes y negocios de INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.

Como resultado de la validación de los saldos reportados por el Originador Procol de Colombia S.A.S. y los reportados por Internacional CF en relación con las compras de cartera de libranza, se identificó que este último revela un mayor valor de los saldos de cartera que el registrado por el originador Procol de Colombia S.A.S.

Para el corte de agosto de 2015 se tomó la información de la cartera de libranzas que reporta la Compañía en el archivo de consumo y se comparó con el archivo que entregó el originador a la comisión de visita con el detalle de las libranzas vendidas a Internacional CF⁶⁰.

Con base en esta información se realizó el cruce de datos por número de identificación del deudor para validar la consistencia de las libranzas que reporta Internacional CF. Como resultado de esta evaluación se encontró la siguiente diferencia para las libranzas que presentan saldo al corte de agosto de 2015:

Cuadro No.14
Información de libranzas
Cotejo de información Procol de Colombia S.A.S. e Internacional CF S.A.

Comparar Libranzas		Libranza Internacional CF Capital	Libranza PROCOL Capital	Diferencia
No cruzan		733	0	733
Cruzan	Mayor valor Internacional CF	34,642	33,650	991
	Mayor valor en Procol de Colombia S.A.S	7,291	7,688	-397
Total valor de las diferencias		42,666	41,338	\$2.121

Cifras expresadas en millones.

Las diferencias entre la información reportada por su originador y la registrada por Internacional CF, denotan la carencia de un mecanismo de control y conciliación periódica de la contabilización de este tipo de operaciones, afectando la adecuada revelación del valor de su activo.

Dado que dicha diferencia implica que Internacional CF reporte un valor del activo que Procol de Colombia S.A.S. no reconoce en su contabilidad, Internacional CF debe provisionar \$1.724 millones, hasta tanto determine el valor real de las libranzas que tiene con el originador Procol de Colombia S.A.S.

Estos resultados son consistentes con las observaciones ya planteadas en otros numerales de este Informe respecto de las debilidades en el registro y contabilización de las operaciones comerciales por parte de Internacional CF.

No está demás señalar que el defecto total en materia de provisiones, correspondía a casi un 55% de las que tenía constituidas la Compañía a septiembre de 2015, lo que permite mostrar la real dimensión de las situaciones puestas de presente en la Resolución impugnada.

Es de mencionar que las múltiples inspecciones a las que hace alusión sobre los pagarés o por lo menos con ese objetivo, no tuvo ocurrencia, por lo que intentar generar una defensa relativa a la violación a la confianza legítima, si ese fuera el objetivo, carece de todo sustento o apego a la realidad.

Ahora bien, sobre la afirmación del recurrente en el sentido de que, por el único hecho de encontrar diferencias en la cartera reportada por un originador, no puede endilgar a sus

⁶⁰ Nota al pie del Capítulo II del Informe de Inspección: "Archivo Punto 5 - Cuenta de Orden Agosto de 2015.xlsx."

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO

0078

DE 2016

Hoja No. 58

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1585 del 18 de noviembre de 2015 mediante la cual se adoptó la medida de toma de posesión inmediata para liquidar los bienes, haberes y negocios de INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.

vigiladas el incumplimiento de obligaciones, se debe mencionar que las situaciones valoradas guardan relación con las causales del artículo 114 del EOSF invocadas en la Resolución, referidas al persistente manejo inseguro de los negocios y a las graves inconsistencias de la información que se suministró a la Superintendencia.

8.4.6. Gastos no registrados - Provisión Impuesto de Renta

Frente a lo señalado por el recurrente, se debe indicar en primer lugar que el mismo no desvirtúa las afirmaciones de la Resolución objeto de impugnación, pues por el contrario las ratifica al señalar "debo manifestar que si bien la compañía no contabilizó en el gasto durante el 2014 dicho rubro, no hay una deuda efectiva con la DIAN".

En efecto, debe indicarse que el cuestionamiento no radicó en que no se hubieren honrado las deudas con la DIAN ni que la Compañía de Financiamiento hubiese dejado de atender sus compromisos tributarios, sino que había un faltante en la provisión, vale decir una subestimación del gasto, para el periodo al que correspondía su causación y, que tal situación estaba orientada a no afectar el estado de resultados del año 2014, aspecto este último sobre el cual el recurrente no hace ningún pronunciamiento.

En adición a lo anterior, como bien quedó consignado en el numeral 3.5 del capítulo VI del Informe de Inspección 2015100740, el Revisor Fiscal puso en conocimiento del Presidente de la entidad la existencia de faltantes en provisiones, en materia de impuesto de renta, que para la vigencia del 2014 sumaban \$994 millones, pese a que la entidad venía cancelando sus obligaciones tributarias.

A su vez Internacional C.F. S.A. reportó a esta Superintendencia resultados de ejercicio para el año 2014 de \$2.801 millones, utilidades que resultaron sobreestimadas en un 35,5% por la incorrecta contabilización de las provisiones del impuesto de renta, teniendo en cuenta el defecto antes mencionado.

Así mismo, según se evidenció en la declaración del señor Jorge Laverde, en su condición de Gerente de Proyectos y ex contador de la Compañía, a la cual adjuntó correo electrónico dirigido a los doctores Cándido Rodríguez Losada y Sergio Cortes Rodríguez, al 31 de julio de 2015 el defecto de provisión del impuesto para este año, alcanzaba los \$825, frente a \$1.615 millones de utilidad reportada a ese corte.

En la misma declaración, el señor Laverde indica que (...) se reportó mensualmente a la Presidencia y Vicepresidencia quienes considerando el resultado mensual de las utilidades y pensando en el efecto comercial solicitaron aplazar esta provisión y que se manejara durante el año con el compromiso de que al 31 de diciembre de 2015 quedaría registrada al 100% de su valor. (...). Frente a lo anterior, resulta un agravante más, que los dos principales administradores de la compañía (Presidente y Vicepresidente) conocían el faltante de provisión por impuesto de renta, tanto para el cierre a diciembre de 2014 como para lo corrido de 2015, sin embargo sus instrucciones siempre estuvieron orientadas a no afectar los estados de resultados de la compañía por dicho concepto.

En conclusión, el recurrente reconoce que no contabilizó adecuadamente el gasto por concepto de impuesto de renta y no dijo nada frente a que este aspecto, mientras que por decisión propia la Alta Gerencia había solicitado aplazar la provisión, situaciones que evidencian que la provisión del impuesto de renta no reflejaba la realidad económica y que había un directriz orientada a no afectar los resultados económicos de esos ejercicios, tal como se expuso en la Resolución, afectando no solamente un ejercicio contable sino de manera también el siguiente (2014 y 2015)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO

0078

DE 2016

Hoja No. 59

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1585 del 18 de noviembre de 2015 mediante la cual se adoptó la medida de toma de posesión inmediata para liquidar los bienes, haberes y negocios de **INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.**

Adicionalmente y no menos importante es el hecho que no se trató de una situación aislada e inmaterial, por el contrario, es un hecho sustancial y reiterado, orientado a no afectar el estado de resultados de los ejercicios económicos y no revelar la verdadera situación de la entidad.

En los anteriores términos se observa que los argumentos del recurrente no tienen respaldo legal ni fáctico.

8.4.7. Gastos no registrados – Cuentas por cobrar -

Con respecto a las cuentas por cobrar, como se hizo evidente en el numeral 3.2 del Capítulo VI del informe de inspección 2015100740, al 30 de septiembre de 2015 existía un defecto en provisiones por \$5.623 millones, como se demuestra a continuación, claridad que permitirá desvirtuar las apreciaciones expuestas por el recurrente.

- La Compañía de Financiamiento contabilizaba en sus cuentas por cobrar un giro del exterior por \$446 millones no provisionado, con más de 180 días de vencido (evento del 3 de diciembre de 2014).
- Todos los conceptos de anticipos de gastos y proveedores por \$303 millones registraban más de 180 días de vencidos (las fechas de registro fluctuaron entre septiembre de 2013 y marzo de 2015) y no reflejaban ningún valor de provisión.
- Frente a los conceptos de adelantos al personal, otros gastos anticipados y otros descuentos de nómina, que en su conjunto sumaban \$380,2 millones, se evidenció una inadecuada aplicación de la política interna de Internacional C.F. S.A. (numeral 8.1 del Manual Código de Buen Gobierno Corporativo), el cual establece que dichos gastos deben ser legalizados en un plazo máximo de 10 días después de terminar la actividad que originó el desembolso.

Así las cosas, los casos mencionados de adelantos al personal, otros gastos anticipados y otros descuentos de nómina, contaban con más de 10 días desde que se originaron, sin que hubieran sido legalizados en el tiempo estipulado, bien recuperando o bien reconociéndolo, su desatendiendo la propia política diseñada por la entidad en su "Manual Código de Buen Gobierno"; dicha antigüedad, junto con el concepto que origina dichas partidas indica que las mismas deben ser reconocidas como gasto, a pesar que todas no presentaban más de 180 días de antigüedad; incluso un agravante más, radica en el hecho que varias de ellas correspondían a desembolsos para un mismo empleado sin que hubiera legalizado gastos anteriormente realizados.

- Con respecto a las cuentas por cobrar – diversas otras - se evidenció en el informe de inspección antes mencionado que existían rubros con una antigüedad superior a los 180 días, los cuales deberían estar provisionados, aspecto que devino, entre otros, de la consolidación de las cuentas por cobrar de cada uno de los clientes, donde al menos una cuenta superó los 180 días de registro, con lo cual se alcanzó un defecto total en provisiones por 3.174 millones que debería estar provisionado para este rubro.
- Frente a las cuentas por cobrar por incumplimiento de cláusulas de leasing, si bien no se aplica un criterio de antigüedad como en los casos anteriores, se logró establecer por la Comisión de Visita y así quedó consignado en el informe de inspección, que para el mes de junio de 2015, la entidad procedió a registrar ingresos por \$1.320 millones de clientes que habiendo cancelado la obligación de leasing no ejercieron la opción de compra o no realizaron el traspaso de los bienes. Se observó que dichas partidas

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO

0078

DE 2016

Hoja No. 60

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1585 del 18 de noviembre de 2015 mediante la cual se adoptó la medida de toma de posesión inmediata para liquidar los bienes, haberes y negocios de **INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.**

presentaban poca probabilidad de recuperación, dado que el cliente ya había cancelado las obligaciones del leasing, haciendo remota la expectativa de recuperar estos rubros que ya habían sido erróneamente llevados al ingreso.

En resumen, para la SFC quedó demostrado que sí existía el faltante de provisiones en las cuentas por cobrar y aunque el recurrente señala que había altas probabilidades de recuperación simplemente se limita a afirmarlo más no a probarlo, contrario sensu, la documentación recogida en el proceso de inspección sí abunda en soportar el defecto.

Finalmente, a la afirmación del Dr Cándido frente a la cual la SFC pretende hacer extensiva la aplicación de las NIIF a hechos para los cuales aún no se encontraba vigente, es pertinente señalar que mediante la Ley 1314 de 2009 se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información aceptados en Colombia; mientras que posteriormente, en diciembre de 2012, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2784 que reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para los preparadores de información financiera que conforman el Grupo 1, (del cual hacía parte Internacional CF).

De acuerdo con tales normas la información financiera se encontraba plenamente regulada bajo la aplicación de las NIIF, para el año 2015, periodo durante el cual ocurrieron los hechos que soportaron la decisión, objeto de impugnación. En ese sentido, es el marco regulatorio bajo el cual se encontraba Internacional C.F. S.A., situación que al parecer sus administradores desconocían, de acuerdo con lo expuesto en el recurso.

Con la inadecuada contabilización de las cuentas por cobrar y los demás efectos contables señalados en la Resolución 1585 de 2015, y tal como quedó consignado en el Capítulo VI del Informe de Inspección 2015100740, se alteran algunos objetivos de la información financiera con propósito general, consignados en el Capítulo I del Marco Técnico Normativo de Información Financiera, las características cualitativas de la información financiera útil consignadas en el Capítulo 3 y se hace evidente un inadecuado reconocimiento de activos, según lo indicado en el Capítulo 4.

En los anteriores términos se observa que los argumentos del recurrente no tienen respaldo legal ni fáctico.

8.5. De los hechos que sustentan la medida de toma de posesión para liquidar respecto del Gobierno Corporativo de la Compañía.

Manifiesta el recurrente que frente al funcionamiento de la junta directiva y del comité de auditoría esta Superintendencia pretende imputar obligaciones y deberes que no le asisten a la compañía y que no debieron ser tenidos en cuenta al momento de tomar una decisión.

Sobre el particular, resulta necesario formular las siguientes consideraciones:

En primer lugar, no puede perderse de vista que en los términos del inciso segundo del artículo 98 del Código de Comercio, *"La sociedad, una vez constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados."*

En armonía con lo anterior, el artículo 633 del Código Civil define a la persona jurídica como *"(...) una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente. (...) "*, concepto que aplica a cualquier tipo de persona jurídica, entre ellas, a las sociedades comerciales.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO

0078

DE 2016

Hoja No. 61

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1585 del 18 de noviembre de 2015 mediante la cual se adoptó la medida de toma de posesión inmediata para liquidar los bienes, haberes y negocios de **INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.**

En este orden de ideas, es de destacar cómo la ley le otorga personería jurídica a las sociedades y las dota de capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones, los cuales, evidentemente no pueden ser practicados por ellas mismas. Así las cosas, el actuar y obrar de las sociedades se desarrolla a través de los distintos órganos creados para tal fin, bien por las disposiciones que las regulan o por sus respectivos estatutos sociales; siendo sobre éstos que recae el cumplimiento de las funciones, deberes y responsabilidades propias de los cargos que ejercen, y que no le resultan ajenas al ente para el cual prestan sus servicios, por cuanto conllevan al desarrollo de su objeto social.

Es así como el artículo 72 del EOSF establece unas reglas de conducta y obligaciones legales cuyo cumplimiento se exige no solo de los administradores, directivos, representantes legales, revisores fiscales y demás funcionarios de las instituciones vigiladas, sino también de las mismas entidades, las cuales incluso pueden ser sujetos de sanción⁶¹, medidas preventivas o toma de posesión cuando se presenten circunstancias que así lo ameriten, las cuales siempre derivarán o estarán ligadas al actuar de las personas naturales que realizan las actividades necesarias para su funcionamiento.

Ahora, si bien el recurrente omite precisar las obligaciones y deberes de la junta directiva y del comité de auditoría que de acuerdo con su afirmación no le asistían a la compañía y, por lo tanto, no podían ser tenidas en cuenta al momento de tomar una decisión, ni formula argumentos que sustenten su aseveración, es de señalar, que esta Superintendencia en la Resolución 1585 de 2015 se refiere a las siguientes responsabilidades que fueron desatendidas por los citados órganos de la sociedad:

En relación con la junta directiva, las previstas en materia de control interno en los numerales 6.1.1.1.1., 6.1.1.1.5., 6.1.1.1.8., 6.1.1.1.9., 6.1.1.1.12., 6.1.1.1.13., y 6.1.1.1.15 del Capítulo IV, Título I, Parte I de la Circular Básica Jurídica C.E. 029 de 2014, disposiciones que exigían del máximo órgano de administración su participación activa en la planeación estratégica de la entidad, el análisis del proceso de gestión de riesgos, el conocimiento de los informes sobre el sistema de control interno (SCI) presentados por los diferentes órganos de control y supervisión, la evaluación de las recomendaciones relevantes sobre el SCI formuladas por los órganos de control internos y externos y la evaluación de los estados financieros.

La junta directiva además de tener que conocer estos temas, tenía la obligación de pronunciarse en torno a los mismos, de adoptar las decisiones o medidas correctivas que resultaren necesarias y de impartir las instrucciones a que hubiese lugar.

De otra parte, se hizo referencia al deber que le fue asignado en el numeral 14 del artículo 43 de los estatutos sociales a la citada junta en cuanto al control y evaluación de la gestión de los administradores y principales ejecutivos de la compañía y la facultad de exigir la presentación de informes.

Respecto del comité de auditoría, se citaron las establecidas en los numerales 6.1.2.4 y 6.1.2.1.3 del Capítulo IV, Título I, Parte I de la Circular Básica Jurídica C.E. 029 de 2014, en cuanto al deber de reunirse y de evaluar la estructura del sistema de control interno de la compañía a efectos de poder determinar si los procedimientos diseñados protegían razonablemente los activos de la entidad y los de terceros que administrara o custodiara, así como la existencia de controles para verificar que las transacciones estuviesen siendo

⁶¹ De conformidad con lo dispuesto en el artículo 211 del EOSF.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO

0078

DE 2016

Hoja No. 62

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1585 del 18 de noviembre de 2015 mediante la cual se adoptó la medida de toma de posesión inmediata para liquidar los bienes, haberes y negocios de INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.

adecuadamente autorizadas y registradas.

Sobre el particular, es de advertir que las falencias encontradas en el actuar de los órganos de gobierno de la entidad, las cuales conllevaron a su inoperancia, tuvieron graves repercusiones en la manera como se ejecutaron las operaciones y se gestionaron los negocios al interior de Internacional CF S.A. y sustentaron la configuración de las causales que dieron lugar a la toma de posesión inmediata para liquidar los bienes, haberes y negocios de la entidad, tal como se expuso a lo largo de la mencionada Resolución 1585.

De acuerdo con lo señalado, no resultan acertadas las apreciaciones formuladas por el recurrente en este punto.

8.5.1. De la Junta Directiva y su funcionamiento.

En torno a los argumentos presentados por el recurrente en este acápite del recurso, debe tenerse presente, en primer lugar, cómo fue determinado al interior de la Compañía el funcionamiento de la junta directiva.

En efecto, el máximo órgano de administración de Internacional CF S.A. no llevaba a cabo reuniones mensuales, sino que en su lugar adoptó el "*Mecanismo para la toma de decisiones*" establecido en el artículo 20 de la Ley 222 de 1995, a través del cual sus miembros emitían por escrito el sentido de su voto acerca de los temas sometidos a su consideración. Dicho mecanismo, como quedó ilustrado ampliamente en la Resolución 1585 de 2015, no permite la deliberación y discusión en torno a los temas como quiera que no conlleva una sesión o reunión de los integrantes de la Junta que les permita interactuar. Consiste simplemente en la entrega de una información y la remisión de vuelta de un escrito con el sentido del voto.

Es así como revisada la información y documentación entregada por la propia entidad a la Comisión de Visita y evaluado el contenido de las declaraciones rendidas por el Presidente, a su vez miembro y presidente de la Junta Directiva; por la Gerente Jurídica, quien además se desempeñaba como secretaria de la misma; y por la Directora de Mercadeo, quien tenía a su cargo la elaboración y envío de la convocatoria a los miembros de Junta y la remisión de la información que acompañaba la citación⁶², se estableció que dicha información era remitida a los directores a través de correo electrónico. Particularmente, el doctor Cándido Rodríguez Losada, en su declaración juramentada⁶³ al preguntársele como era el envío de la documentación a la junta directiva indicó: "Todo es por correo electrónico, a excepción de las observaciones mías (que casi nunca hay) que son verbales." (Subraya fuera del texto original).

Por lo tanto, lo manifestado en el recurso en cuanto a que "(...) el correo electrónico no es el único medio idóneo para poner en conocimiento de los miembros de la Junta Directiva la información necesaria para la toma de decisiones.", contradice lo afirmado por el mismo Dr. Rodríguez, Presidente y miembro de la Junta Directiva, en calidad de Presidente de la misma, quien determinaba, tal como está probado en el expediente, la manera de funcionar de la Junta Directiva de Internacional CF. Igualmente, contradice lo señalado en la declaración del Dr. Cortés, en cuanto a que la información con destino a

⁶² La función de realizar la convocatoria le fue asignada de manera verbal a la directora de mercadeo por el doctor Cándido Rodríguez Losada, según consta en la declaración rendida por ésta el 27 de octubre de 2015.

⁶³ Según declaración rendida los días 29 y 30 de octubre de 2015.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO . . .

0078

DE 2016

Hoja No. 63

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1585 del 18 de noviembre de 2015 mediante la cual se adoptó la medida de toma de posesión inmediata para liquidar los bienes, haberes y negocios de INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.

la Junta se enviaba por correo electrónico.⁶⁴ Sobre este punto debe indicarse adicionalmente, que el recurrente no señala cuál o cuáles son en su consideración, los otros medios de que podrían servir de prueba para el efecto, ni los aporta.

Adicionalmente el cuestionamiento que hace el impugnante en cuanto a que "(...) de los hechos planteados por la Superintendencia no se desprende que los miembros de la Junta Directiva no hubieren solicitado la información relevante. En efecto la Superintendencia únicamente revisó las carpetas de 'salida' de los correos electrónicos, pero no los de 'entrada'." no resulta de recibo, toda vez que esta Superintendencia revisó en su integridad el proceso surtido en relación con las convocatorias, la emisión del voto y la elaboración de las actas, teniendo acceso a los correos a través de los cuales se remitió la información a la junta directiva, respecto de los cuales se verificó su trazabilidad⁶⁵ (entradas y salidas), evidenciando que no se recibieron correos de los miembros del citado órgano de administración requiriendo información adicional. Tan sólo en una oportunidad el doctor Javier Ardura requirió información, tal como lo puso de presente la Directora de Mercadeo en su declaración juramentada, en la cual al preguntársele si los directores habían formulado observaciones o requerimientos en torno a la información remitida, manifestó que "Pues sí, el doctor Ardura me escribió: donde está la información de junta que no viene adjunta. Lo que pasó es que la información no estaba lista, el Dr. Cándido me pidió enviar la convocatoria."

En segundo término, es de resaltar que en la resolución recurrida en cuanto al tema del envío de la información a la junta directiva, se advirtió lo siguiente:

"En efecto, tal como pudo corroborarse en las actas correspondientes a las reuniones de los meses de abril, mayo, julio y agosto de 2015, en las mismas aparecen tratados puntos del orden del día, respecto de los cuales la información anunciada a los directivos no fue remitida. Como consecuencia de ello, se evidencia que en las actas se consignaron como tratados y decididos aspectos o temas contenidos en documentos o informes que no fueron efectivamente conocidos por los directores.

"Así, al contrastar las convocatorias efectuadas para las reuniones antes citadas, pudo verificarse con la documentación que les fue remitida a los directores por correo electrónico⁶⁶, que no se les envió en ningún caso el informe del presidente de la entidad, ni los documentos relativos al punto de 'Varios', en el cual ordinariamente se sometían a consideración y aprobación las modificaciones a los manuales de los productos que ofrecía la entidad. Igualmente, en la mayoría de los casos, no se remitió el acta de la 'reunión anterior', lo cual se traduce en que las actas no eran efectivamente aprobadas."⁶⁷ (negrilla fuera de texto).

De acuerdo con lo anterior, resulta equivocada la interpretación que hace el doctor Cortés en cuanto a lo manifestado por la SFC al afirmar que "No es posible concluir que de haber tratado puntos del orden del día se desprenda que los informes no hubieran sido conocidos por los directores", para luego invocar "que no hay una relación de causalidad entre uno y otro hecho", pues la falta de conocimiento por parte de los directores respecto de los documentos e informes que debieron considerar para emitir el sentido de su voto o un pronunciamiento sobre los mismos, se evidenció no solo a partir del contenido de las actas sino adicionalmente de la revisión que se hizo de las convocatorias y de los documentos anexos a éstas y de los que les fueron efectivamente enviados por correo electrónico, verificación mediante la cual se pudo establecer que no les fueron entregados a los miembros de Junta la totalidad de los documentos que sustentaban uno a uno los

⁶⁴ Según declaración rendida el día 19 de octubre de 2015.

⁶⁵ En el expediente de la presente actuación obra copia de los respectivos correos.

⁶⁶ Informe de inspección número 2015100740-015. Pág. 8 numeral 3.1.1, literal c) Capítulo I.

⁶⁷ Resolución 1585 de 2015 numeral 6.3.1.1 del Funcionamiento y sesiones de la junta. Pág. 11

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO

0078

DE 2016

Hoja No. 64

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1585 del 18 de noviembre de 2015 mediante la cual se adoptó la medida de toma de posesión inmediata para liquidar los bienes, haberes y negocios de INTERNACIONAL COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A.

temas a revisar para tomar decisiones en las "reuniones" de Junta Directiva.

En punto a la afirmación de que "(...) se trata de una conclusión a la que no es posible llegar de acuerdo con los medios probatorios utilizados por la Superintendencia y citados en el acto administrativo que se recurre.", es preciso señalar que los aspectos establecidos por la Superintendencia que acaban de reseñarse no están sujetos a una tarifa probatoria, es decir, no requieren para su acreditación de un determinado medio probatorio, por lo tanto, los documentos, correos electrónicos y las declaraciones, entregados por la propia compañía para sustentar las reuniones de la Junta Directiva, son medios conducentes, pertinentes e idóneos que llevaron al supervisor a obtener la certeza acerca de la manera de funcionar y a establecer la inoperancia de la Junta de la Compañía.

Adicionalmente, en relación con la referencia que hace el doctor Rodríguez a lo manifestado por la Gerente Jurídica de Internacional C.F. S.A. de cara al informe del Presidente de la entidad, para resaltar "... que es muy distinto indicar que no se sabe si alguien va a dar un informe, a no conocer el informe", observa este Despacho, que la misma afirmó de manera categórica que "(...) **La verdad, el informe de presidencia lo suscribo yo como Gerente Jurídica, y escribo los asuntos importantes que considero deben quedar plasmados en el informe del mes respectivo. No hay un informe del Presidente Dr. Cándido Rodríguez para las sesiones de la Junta Directiva.**" (Negrilla fuera de texto).

Aunado a lo anterior, no puede perderse de vista lo manifestado por el mismo recurrente en declaración del 29 de octubre de 2015, en cuanto a que dicho informe se enviaba "(...) en el acta de la Junta posterior", lo cual corrobora que el informe no era conocido por los miembros de la Junta Directiva al momento de emitir un pronunciamiento en torno al mismo, circunstancia de la cual da cuenta la Resolución recurrida.

Al respecto, es preciso señalar que resulta fundamental, indispensable y propio del carácter, responsabilidad e idoneidad de los miembros de Junta que previo a la emisión del sentido del voto tengan conocimiento de los temas sobre los cuales se pronuncian. Diligencia que se exacerba al corresponder las "reuniones" a unas llevadas a cabo a través del mecanismo establecido en el artículo 20 de la Ley 222 de 1995, en la medida en que al no estar presentes y reunidos los miembros, éstos no tienen fuente de información distinta de aquella que se les allega previamente.

Ahora, si bien es cierto que el numeral 6.1.1.1.9 de la Parte I, Título I, Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica señala como responsabilidad de la Junta Directiva "Solicitar y estudiar con la debida anticipación, toda la información relevante que requiera para contar con la ilustración suficiente para adoptar responsablemente las decisiones que le corresponden y solicitar asesoría experta, cuando sea necesario." (subraya de la transcripción del escrito contenido del recurso), la frase resaltada se refiere a la solicitud de asesoría experta, mas no a los requerimientos de información, pues en la medida en que los miembros del citado órgano de administración debían emitir su voto o un pronunciamiento respecto de un tema a tratar en el orden del día, imperativamente tenían que contar con los documentos o la información relacionada con el mismo a efectos de tomar decisiones debidamente sustentadas.

En este orden de ideas, no resulta claro el razonamiento expuesto por el recurrente en cuanto a que "*Es del todo posible que no se solicite información siempre que se obre con diligencia.*".

En lo que tiene que ver con el argumento expuesto por el recurrente según el cual en materia de diligencia "*cualquier actuación que sea inocua frente a su vulneración ha de ser excusada*", debe tenerse en cuenta que bajo el contexto expuesto en la Resolución 1585

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO

0078

DE 2016

Hoja No. 65

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1585 del 18 de noviembre de 2015 mediante la cual se adoptó la medida de toma de posesión inmediata para liquidar los bienes, haberes y negocios de INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.

de 2015 la información que se echa de menos no era inocua pues resultaba fundamental para la toma de las decisiones que le correspondían a la Junta, más aún si se considera que la falta de completitud de la información se estableció para las sesiones que se llevaron a cabo entre enero y agosto de 2015.

Igualmente, es de advertir que la decisión de tomar posesión de la entidad no se fundamentó exclusivamente en las circunstancias evidenciadas en torno al funcionamiento de la junta directiva, las cuales si bien por sí mismas revisten materialidad y gravedad, se sumaron a los diferentes hechos y conductas que fueron ampliamente expuestos en el considerando Sexto de la Resolución 1585 varias veces citada, y que configuraron, sin lugar a dudas, las causales previstas en los literales h) y f del artículo 114 del EOSF) para adoptar tal medida.

En este orden de ideas, una vez desvirtuados los argumentos invocados por el recurrente en este punto, es evidente que esta Superintendencia motivó en debida forma las consideraciones expuestas en el acto administrativo que se recurre, basada en los hechos debidamente probados a lo largo de la actuación.

8.5.2. De la falta de direccionamiento y seguimiento real por parte de la Junta Directiva.

Tal como se precisó en el punto anterior, las situaciones establecidas en relación con la junta directiva y su funcionamiento dejaron en evidencia que ella no impartía instrucciones ni adoptaba correctivos y, por lo tanto, no había un direccionamiento y seguimiento por parte del citado órgano de administración sobre la gestión de la Compañía.

El análisis que lleva a la Superintendencia a abordar a esta conclusión y a las otras relacionadas con el gobierno corporativo de Internacional CF S.A., se realiza con base en las facultades que le fueron expresamente conferidas por la normativa, en este caso, el artículo 11.2.1.4.31 del Decreto 2555 de 2010, numeral 7º, conforme al cual corresponde a la Superintendencia a través de la Delegatura para Riesgos de Conglomerados y Gobierno Corporativo "*Velar por el cumplimiento de las políticas y normas de gobierno corporativo de las entidades vigiladas.*" y el artículo 11.2.1.4.33 numerales 1. "*Hacer seguimiento y evaluación sobre el gobierno corporativo de las entidades vigiladas (...)*" y 4. "*Verificar el establecimiento y funcionamiento de los diferentes órganos que comprende el gobierno corporativo de conformidad con las exigencias legales y estatutarias.*"

Por lo tanto, no puede afirmarse que "*(...) la Superintendencia se encuentra desbordando las facultades que le fueron asignadas por el legislador.*" sino que se encuentra precisamente haciendo uso de ellas y obrando dentro del marco de sus funciones.

En cuanto a lo que el recurrente denomina "*juicios de valor*" sobre el contenido de las actas, no es otra cosa que la valoración propia del ejercicio de las funciones asignadas a la Superintendencia pues precisamente las actas son un elemento importante para evaluar el funcionamiento de la Junta, como quiera que son prueba suficiente de los hechos que constan en ellas a la luz del artículo 189 del Código de Comercio, por ello, mal puede concluirse que la Superintendencia carece de competencia para pronunciarse sobre ellas o que requiere acudir al mecanismo de la impugnación, propio de las instancias de gobierno y propiedad de la Compañía, para valorarlas.

Ahora bien, el incumplimiento de las funciones por parte de la junta directiva de la compañía fue ampliamente referido en el numeral 6.3.1.2. de la Resolución recurrida, según el cual no se evidenció ningún pronunciamiento o constancia en las actas

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO

0078

DE 2016

Hoja No. 66

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1585 del 18 de noviembre de 2015 mediante la cual se adoptó la medida de toma de posesión inmediata para liquidar los bienes, haberes y negocios de INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.

evaluadas por la Comisión de Visita de esta Superintendencia sobre *"las labores de direccionamiento y seguimiento que está llamada a desempeñar la Junta, tales como el cumplimiento presupuestal y la revisión de los estados financieros, el informe de gestión comercial (captaciones y colocaciones), el informe de riesgos, dentro de los cuales se encuentra el SARC, de acuerdo con las políticas internas, no fueron objeto de análisis y deliberación por parte de dicho órgano, pues tal y como se señaló, a pesar del contenido de las actas, se estableció que al interior de la misma no existen tales procesos."*, por lo que la afirmación efectuada en el recurso en relación con que *"Las mismas actas de reunión establecen que las decisiones fueron tomadas con base en la información que fue analizada y discutida."*, no tiene asidero en los documentos evaluados, los cuales fueron entregados por la propia entidad vigilada.

Así mismo, en punto al análisis y discusión de los temas, se reitera que en la medida en que la junta directiva adoptó de manera permanente el mecanismo previsto en el artículo 20 de la Ley 222 de 1995 para la toma de decisiones, en virtud del cual todos los directores se limitan a expresar el sentido de su voto por escrito, no puede hablarse de procesos de discusión o deliberación de los temas sometidos a su consideración, pues bajo éste dicha discusión es inexistente y así se vio reflejado en el texto de las actas respectivas.

En este orden de ideas, es evidente que esta Superintendencia motivó en debida forma las consideraciones expuestas en el acto administrativo que se recurre, basada en los hechos debidamente probados a lo largo de la actuación.

Así las cosas, los argumentos expuestos en este acápite del recurso sobre las funciones de direccionamiento de la Junta Directiva no desvirtúan las consideraciones efectuadas respecto de las irregularidades encontradas y no tienen la virtualidad para sustentar la revocatoria de la decisión adoptada en la Resolución 1585 de 2015, la cual se encuentra debidamente soportada en los hechos establecidos y en las pruebas recopiladas.

8.5.3. Del Comité de Auditoría.

En relación con la forma como la Compañía debía probar la celebración de las reuniones no presenciales del Comité, es de advertir que en ningún aparte del acto administrativo recurrido se hace referencia a la aplicación de una tarifa legal probatoria a través de la cual la entidad debió acreditar el mecanismo virtual empleado en las mismas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 222 de 1995.

Al respecto, recordemos que el artículo 19 en comento establece que ***"Siempre que ello se pueda probar, habrá reunión de la junta de socios, de asamblea general de accionistas o de junta directiva cuando por cualquier medio todos los socios o miembros puedan deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva. En ese último caso, la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado."*** (Negrilla fuera de texto)

Anteriormente, la citada norma tenía un párrafo que exigía que quedara como prueba de la comunicación simultánea o sucesiva, un fax donde aparecieran la hora, girador, mensaje, o una grabación magnetofónica donde quedaran los mismos registros. Dicho párrafo fue efectivamente eliminado por el artículo 148 del Decreto 019 de 2012.

Sin embargo, con la eliminación del mencionado párrafo en manera alguna se prescindió de la necesidad de contar con la respectiva prueba para acreditar la deliberación simultánea y sucesiva surtida por todos los miembros del respectivo cuerpo colegiado como requisito para que la reunión se dé, permitiendo libertad probatoria para acreditar los supuestos previstos en la norma y, por ende, la realización de la reunión, tal

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO

0078

DE 2016

Hoja No. 67

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1585 del 18 de noviembre de 2015 mediante la cual se adoptó la medida de toma de posesión inmediata para liquidar los bienes, haberes y negocios de **INTERNACIONAL COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A.**

como lo señala el recurrente.

Pese a la libertad probatoria a la cual se refiere el impugnante, al señalar que *"lo relevante es que haya cómo probar la reunión no presencial"*, lo cierto es que, durante el proceso de supervisión adelantado, a pesar de haberse requerido, no se allegó a esta Superintendencia prueba alguna que acreditara la ocurrencia de las reuniones celebradas por el Comité al amparo del artículo 19 de la Ley 222 de 1995. Igualmente, es de resaltar que tampoco se allegó prueba con el presente recurso que sustentara el reproche que sobre el particular realiza el recurrente.

De otra parte, al parecer el recurrente olvida otros aspectos evidenciados en relación con las reuniones del Comité de Auditoría y referidos de manera expresa en la resolución recurrida, entre ellos:

- i. La realización de seis reuniones no presenciales con la participación de tan solo dos (2) de los tres (3) miembros que lo integraban, pese a que el artículo 19 de la Ley 222 de 1995 exige la participación de todos los miembros del respectivo cuerpo colegiado, so pena de ineficacia según lo consagrado en el parágrafo del artículo 21 de la misma Ley en los siguientes términos: *"Serán ineficaces las decisiones adoptadas conforme al artículo 19 de esta Ley, cuando alguno de los socios o miembros no participe en la comunicación simultánea o sucesiva.(...)"*.
- ii. La declaración juramentada rendida por la señora Lina Paola Rodríguez el 27 de octubre de 2015, quien desempeñaba el cargo de Auditora Interna de la Compañía y elaboraba las actas del comité de auditoría, quien reconoció que para las sesiones de los días 27 de febrero, 27 de mayo, 28 de agosto y 21 de noviembre de 2014 y 20 de febrero, 21 de abril y 31 de julio de 2015, que constan en las actas 01 a 04 de 2014 y 01 a 03 de 2015, los miembros del comité no fueron convocados y las actas se elaboraron por ella o por algunos de sus funcionarios, con el fin de mostrar el cumplimiento de las funciones a cargo del citado comité.

Por lo anterior, en este punto encontramos, igualmente, que los argumentos expuestos no desvirtúan los hechos observados por la SFC en relación con la ausencia de reuniones y el incumplimiento de las funciones del Comité de Auditoría, que coadyuvaron a sustentar la medida que se recurre.

8.5.4. Alta Gerencia – Presidente y Vicepresidente.

Tal como se encuentra plasmado en la Resolución 1585 de 2015, esta Superintendencia estableció el incumplimiento de las funciones asignadas al Presidente de la entidad, a través de la *"evidencia recopilada durante la visita"*, evidencia que consiste básicamente en la documentación entregada por Internacional CF y en las declaraciones recibidas por la Comisión de Visita de la Superintendencia, pruebas que estuvieron a disposición permanente del recurrente y de las partes involucradas y que no fueron consultadas, tal como se advirtió en el Auto 01 del 15 de diciembre de 2015, mediante el cual se resolvió sobre la práctica de las pruebas solicitadas dentro del recurso que se resuelve mediante el presente acto administrativo, por lo que mal puede afirmarse que la Superintendencia se basó únicamente en la declaración del Presidente, cuando no revisó la evidencia en la cual estas conclusiones tuvieron su sustento.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO

0078

DE 2016

Hoja No. 68

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1585 del 18 de noviembre de 2015 mediante la cual se adoptó la medida de toma de posesión inmediata para liquidar los bienes, haberes y negocios de **INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.**

Ahora bien, es claro que la Superintendencia no ha cuestionado la asignación, distribución o delegación de funciones realizada por el señor Cándido Rodríguez en Internacional CF, tal como se desprende del contenido de la Resolución 1585 de 2015, lo que se cuestiona es la falta de seguimiento por parte de éste a la gestión delegada, pues seguía siendo de su resorte el control y seguimiento de la gestión de la Compañía, responsabilidad que no podía abandonar por ser propia de su cargo y que le exigía, entre otros, tener un conocimiento permanente de las labores y del rol de la Vicepresidencia, que como quedó evidenciado tenía a su cargo las dependencias que desarrollaban el core del negocio de Internacional C.F. S.A. Así las cosas, carece de fundamento la aseveración formulada por el recurrente en torno a que "(...) la Superintendencia establece -sin más- que el Presidente incumplió sus funciones al ceder su gestión."

Para concluir, en torno a las afirmaciones de la Superintendencia, que el recurrente califica como no ciertas, relacionadas con el direccionamiento de la Compañía a cargo del Vicepresidente y no de su Presidente, así como la inexistencia de reporte del primero respecto del segundo, estos fueron hechos que pudo establecer la Comisión de Visita de la Superintendencia a lo largo de la visita mediante documentos y declaraciones, hallazgos que no se desvirtúan en el recurso.

Con base en lo anterior, esta Superintendencia encuentra que sus consideraciones están debidamente argumentadas y soportadas, sin que hayan sido desvirtuadas por el recurrente.

En mérito de lo anterior, este Despacho,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. - CONFIRMAR en su integridad la Resolución 1585 del 18 de noviembre de 2015, por medio de la cual se adoptó la medida de toma de posesión inmediata para liquidar los bienes, haberes y negocios de **INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.** identificada con el NIT 860065913-9 con domicilio principal en Bogotá D.C., de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO. - NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente Resolución al doctor Cándido Rodríguez o a quien llegare actuar como su apoderado, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra la presente decisión no procede recurso alguno. En consideración a que el recurrente indicó como direcciones de notificación, una de carácter postal y otra electrónica, la Superintendencia procederá a surtir dicho trámite de conformidad.

ARTÍCULO TERCERO. - ORDENAR la publicación de la presente Resolución en el

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO

0078

DE 2016

Hoja No. 69

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1585 del 18 de noviembre de 2015 mediante la cual se adoptó la medida de toma de posesión inmediata para liquidar los bienes, haberes y negocios de INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.

Boletín del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Capítulo Superintendencia Financiera de Colombia.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C. a los

29 ENE 2016

EL SUPERINTENDENTE FINANCIERO (E),


JORGE CASTAÑO GUTIÉRREZ